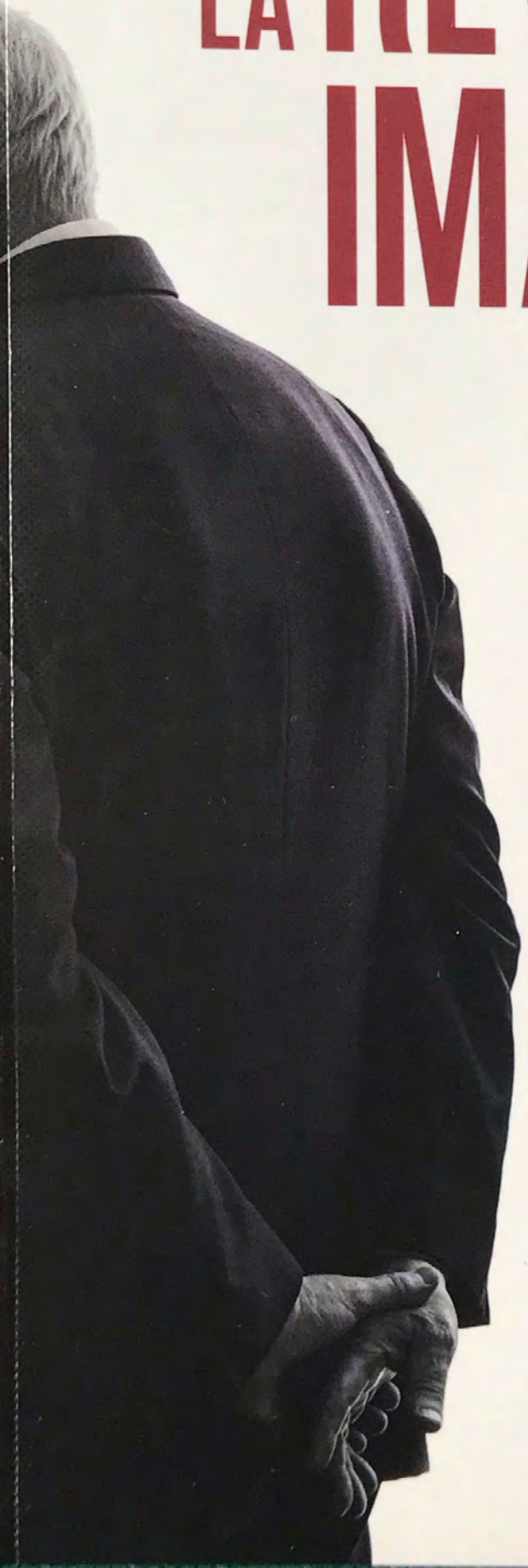
LA REVOLUCIÓN IMAGINARIA



El obradorismo y el futuro de la izquierda en México

Carlos Illades

OCEANO

La revolución imaginaria

La revolución imaginaria

El obradorismo y el futuro de la izquierda en México

Carlos Illades

OCEANO

LA REVOLUCIÓN IMAGINARIA
El obradorismo y el futuro de la izquierda en México

© 2023, Carlos Illades

Imagen de portada: Adobe Stock
Diseño de portada: Jorge Garnica
Fotografía de Carlos Illades: cortesía del autor

D. R. © 2024, Editorial Océano de México, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso 17-5, Col. Industrial Las Armas
Tlalnepantla de Baz, 54080, Estado de México
info@oceano.com.mx

Primera edición: 2024

ISBN: 978-607-557-895-8

Todos los derechos reservados. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita del editor, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. ¿Necesitas reproducir una parte de esta obra? Solicita el permiso en info@cempro.org.mx

Impreso en México / Printed in Mexico

Índice

Prólogo, 13

1. El obradorismo, 25
2. Vaciar el Estado, 41
3. La guerra interna, 53
4. La política del espectáculo, 65
5. La geometría social, 77
6. Mito e historia, 91
7. Ni "verdad histórica", ni verdad sin más, 105
8. ¿Una nueva hegemonía?, 117
9. Las izquierdas no partidarias, 127
10. La salida es a la izquierda, 137

Índice analítico, 147

Para mi mamá

Si ser de izquierda tiene algún sentido, tal debe incluir un compromiso con la igualdad humana, con la posibilidad de que todos realicen sus capacidades de vida, lo cual no debe reducirse a los recursos materiales, sino incluir también la igualdad vital, es decir, la igualdad de oportunidades de una vida larga y saludable y la igualdad existencial al hilo de la cual la libertad, el reconocimiento y el respeto son universales.

GÖRAN THERBORN

Prólogo

El obradorismo ha desconcertado por igual a la derecha y a la izquierda. Aquélla suponía que el consenso entre los partidos de la transición (PRI, PAN y PRD) sería suficiente para administrar la economía y ordenar la política, que la cuestión social ocupaba un lugar subsidiario en la agenda nacional y que, si cerraba filas, podía bloquear la puerta de Palacio a la irrupción plebeya. Desmentido el pronóstico por una contundente votación en favor del candidato que ofreció el "cambio verdadero", las explicaciones del fracaso electoral por parte del *establishment* intelectual fueron el negacionismo, considerarlo un "accidente", atribuirlo a un electorado obnubilado e ignorante o a un pacto espurio de López Obrador con Enrique Peña Nieto. El planteamiento excluyó la revisión de sus premisas.[1]

La autopostulada Cuarta Transformación (4T) es el foco de la crítica procedente de aquel flanco, la cual combina el realismo, la exageración y la desmemoria, adentrándose en lo insólito. Señalar la precariedad del programa económico de la 4T cuadra con lo primero. Anunciar que las elecciones intermedias serían las últimas en democracia se inscribe en lo segundo. Afirmar que el presidente carecía del mandato electoral para

[1] En esa línea argumental, entre otros, véase Héctor Aguilar Camín, "El otoño del presidente", *Nexos*, núm. 534, junio de 2022, pp. 28-29, 32.

realizar la transformación que se propuso, después de pasar por alto que las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, con mandatos mucho más precarios y cuestionados en su legitimidad, emprendieron acciones de amplio calado —la primera generación de las reformas estructurales, la guerra contra el crimen organizado, respectivamente— raya en la desmemoria. Denunciar, quienes hasta ayer pensaban que el mercado resolvía todo, que López Obrador no es keynesiano, que pretendió construir una hegemonía, cuando la inteligencia neoliberal coadyuvó a cimentar otra, o que la derecha desenmascarara la impostura de un gobierno que se hacía pasar por izquierda se adentra en lo insólito, cuando, si su caracterización fuera certera, debería regocijarlos.

Para la izquierda también ha sido difícil empatar el obradorismo con su tradición y las posturas hacia él son disímbolas. Éstas pasan por sumarse al movimiento con la expectativa de conducirlo en aquella dirección y aceptar cualesquiera de las decisiones presidenciales, por absurdas que sean, como indispensables para la causa. Otros le regatean la denominación de origen al obradorismo, reservándola exclusivamente para las opciones anticapitalistas, negando con ello, quizás involuntariamente, el carácter de izquierda al socialismo romántico y a la socialdemocracia. Unos más lo definen como un populismo de izquierda (el envés positivo del populismo de derecha), obliterando los elementos compartidos por ambos. Y llamarlo progresismo quizá sea la caracterización más cómoda para abandonar la coordenada derecha/izquierda de la política, con el beneficio adicional de filiarlo dentro de una familia de regímenes latinoamericanos del siglo xxi. Esto no es de ninguna manera óbice para destacar la tensión que hay en el obradorismo entre la cuestión social, el progresismo con respecto de los derechos de grupos específicos y la agencia de las clases subalternas, la captura del proyecto por parte de los

intereses privados aglutinados alrededor de la 4T, la cual complica caracterizarlo como izquierda.

La polarización discursiva, fomentada por el propio obradorismo, también dio lugar a conceptualizaciones encontradas por parte de intelectuales y comentaristas. Roger Bartra define el obradorismo como un populismo de derecha que "produjo un extraño regreso a la jaula con el triunfo de un movimiento populista de signo reaccionario" o "retropopulismo". Y lo es, según el antropólogo mexicano, tanto porque aquél recupera la ideología priista del nacionalismo revolucionario y adopta una política económica desarrollista, como porque el presidente tiene un talante indubitablemente conservador. Para cerrar el argumento, el peligro latente de este populismo de derecha es que se convierta en la restauración —no idéntica y posiblemente peor— del viejo régimen autoritario, de tal manera que el obradorismo sería la reencarnación posmoderna del priiato. Carlos Elizondo, otro de sus críticos, lo sitúa más bien a la izquierda, "por la presunta defensa de los intereses de los más pobres", aunque subraya que López Obrador "combina la retórica contra los privilegios económicos, propia de los populistas de izquierda, con la retórica contra los privilegios de la élite tecnocrática y liberal, más propia de los de derecha".[2]

Que López Obrador es conservador no cabe duda. Que su bagaje ideológico se reduzca al nacionalismo revolucionario es reduccionista, pues soslaya el romanticismo social y el socialcristianismo presentes en su pensamiento. Que su política contenga múltiples aspectos regresivos, también es cierto, aunque más relevante que su fijación con el nacionalismo revolucionario

[2] Roger Bartra, *Regreso a la jaula. El fracaso de López Obrador* (México, Debate, 2021), p. 12; Carlos Elizondo Mayer-Serra, *Y mi palabra es la ley. AMLO en Palacio Nacional* (México, Debate, 2021), p. 30.

es su anclaje en las corporaciones antiguas (familia, Iglesias, Ejército). Que el presidente tabasqueño sea un populista de derecha es una caracterización errada. Llamar populista a todo lo que excede el consenso neoliberal es impreciso, y reducir el populismo a una "cultura política", como hace Bartra, deja fuera sus dimensiones fundamentales: es un discurso, un estilo y un régimen. Y si hemos de encontrar convergencias entre los populismos de derecha e izquierda, debemos precisar también las diferencias: el de derecha es xenófobo, borra la justicia social y es supremacista, por decirlo en breve. Por más semejanzas de estilo de López Obrador con Trump, Orbán, Bolsonaro o Erdŏgan que advierta el antropólogo mexicano, las diferencias son profundas, más allá de que la melancolía fuera "el fuego frío y rencoroso" que aviva al populismo.

La restauración, incluso con las salvedades señaladas por Bartra, supone que la transición hubiera dado lugar a un nuevo régimen, siendo, ese sí, la 4T. Ni antes ni ahora se ha desmontado el "antiguo régimen", como lo denomina el antropólogo mexicano. Que haya elecciones más competidas no implica la supresión del régimen autoritario, y menos todavía del sistema de dominación. De hecho, los mecanismos de ambos facilitaron la implantación del modelo neoliberal y contuvieron la respuesta de los subalternos ante la reconversión industrial, la desregulación económica y el incremento de la desigualdad. También fueron bastante funcionales a la expansión de la economía criminal y a la opción militarista tomada por la segunda administración del PAN, de la que tampoco se ha desprendido el gobierno obradorista. Con esto en cuenta, el ascenso populista no sería accidental, y probablemente tampoco pasajero, antes bien sería consecuencia de las enormes grietas sociales del edificio neoliberal más que del afán masoquista de los subalternos por encerrarse dentro de la jaula autoritaria.

De acuerdo con Jesús Silva-Herzog Márquez, tres traiciones dañaron la democracia liberal, abriéndole la puerta de Palacio al populismo autoritario: el historicismo que lo convirtió en profético, la arrogancia ciega del triunfador que se pensó imbatible ("el fin de la historia") y el encogimiento intelectual. De esta manera, las falencias liberales no están ni en la teoría ni tampoco en sus herramientas para confrontar los problemas que el capitalismo desregulado plantea, tampoco en su incapacidad genética para hacerse cargo de la "cuestión social", sino en su *actitud*. Según el comentarista político, la transición mexicana tuvo dos episodios fallidos, aunque hermanados por la pretensión de negar justamente la contradicción, que configuraron la frustración democrática que nos aqueja: la desfiguración, a cargo de las administraciones panistas y del peñismo ("de la mano del PAN, primero y del PRI después, un pánico conservador impregnó el aire de la democracia"), y la demolición, obra exclusiva de López Obrador ("lo que ha representado el obradorismo es un ataque frontal a la arquitectura de la república: su demolición"). Aquéllos repartieron dinero y prebendas a fin de evitar el conflicto, y éste hace todo lo posible por cancelar la pluralidad y los contrapesos a un presidencialismo exacerbado. Ambos, no obstante, eludieron la reforma democrática del Estado que habría ofrecido el andamiaje indispensable para sostener la democracia liberal.[3]

Para Claudio Lomnitz, la revolución neoliberal en el país aconteció en dos momentos: el modernizador, apuntalado en la economía legal, "cuando se creó un espacio económico que debía regirse por una serie de criterios de transparencia y legalidad, los cuales podían ser medidos y ser valorados internamente, sino también desde fuera de México"; y la involución,

[3] Jesús Silva-Herzog Márquez, *La casa de la contradicción* (México, Taurus, 2021), pp. 100, 170-171.

"que pasó de estar alineado con los intereses de la economía formal transnacionalizada... a los intereses de las economías informales, incluidos los de las economías ilícitas". Si bien el antropólogo asume que ambos segmentos económicos coexistieron en la posrevolución, apunta que el balance se invirtió en la autonombrada 4T. Sin duda, mucho podrá cargarse al saldo de ésta, lo que no es razón para soslayar que la penetración del crimen organizado en los circuitos financieros ocurrió justamente cuando se formó la "ínsula de los derechos", acompañándose del despojo de comunidades enteras, del traslado masivo e ilegal de fondos públicos a las arcas privadas (FOBAPROA) y de crímenes políticos todavía irresueltos.[4]

En la otra acera del comentario político, la tentativa obradorista la concibe Jorge Zepeda Patterson cual "revolución social que por fin termine con la injusticia", lastimosamente truncada por la Covid-19. Ni el proyecto ni sus fundamentos, ni las políticas eran desacertados o mal ejecutados, de acuerdo con el columnista, antes bien no tuvieron la eficacia debida a consecuencia de un factor externo, circunstancial y contingente (un virus), que significó "un duro golpe de infortunio para un hombre que luchó 30 años para intentar un cambio a favor de los dejados atrás". Pero justo es en el proyecto donde otros comentaristas afectos al régimen advierten el punto flaco de la 4T. "Una de las principales debilidades del obradorismo —apunta Hernán Gómez Bruera— es no tener un programa ambicioso de redistribución de la riqueza y el ingreso", sin por ello negar la conveniencia de los programas sociales y los aumentos anuales al salario mínimo por encima de la inflación a resultas de este "populismo de baja intensidad". Ambos autores ponderaron las buenas intenciones presidenciales

[4] Claudio Lomnitz, *El tejido social rasgado* (México, Era, 2022), pp. 129, 133.

(¡como si los demás presidentes del ciclo neoliberal hubieran tenido de suyo malas intenciones!) por encima de los pobres resultados, minimizando los yerros gubernamentales y su sesgo autoritario.[5]

En una primera aproximación denominé populista el discurso obradorista, considerando que la caracterización de su movimiento se circunscribía únicamente a eso, además de que el concepto abarcaba una escala temporal bastante dilatada y experiencias históricas tan diversas que había quedado rebasado por la política del siglo xxi. No obstante, y aunque mantengo algunas reservas, regímenes análogos en otros países obligan a pensar en un fenómeno global, lo llamemos populista o elaboremos un concepto nuevo y más preciso. Conforme avanzó el sexenio de López Obrador al discurso se añadió un estilo de gobierno que calza con el populismo, si bien todavía no podemos hablar de un régimen dado que no se ha instituido.[6]

Ahora bien, como el presidente tabasqueño acrisola un conjunto de grupos e intereses en una coalición política precaria, carente de un fundamento ideológico o de un programa común de gobierno, al modo bonapartista, López Obrador se emplaza encima de los grupos sociales y arbitra sus disputas. La grieta en el sistema político abierta en 2018, que sancionó el fracaso de las élites dirigentes, conforma el espacio colmado por el hiperpresidencialismo, por lo que la viabilidad y funcionamiento del sistema político en estas condiciones —aparte de la inocultable personalidad autoritaria del

[5] Jorge Zepeda Patterson, "El virus que truncó una revolución", *elDiario.es*, núm. 32, junio de 2021, p. 7; Hernán Gómez Bruera, *AMLO y la 4T. Una radiografía para escépticos* (México, Océano, 2021), pp. 67, 105.

[6] Carlos Illades, "La izquierda populista mexicana", *Nexos*, núm. 465, septiembre de 2016, pp. 19-23.

presidente— requiere su constante intervención. La pregunta entonces es si esta situación de excepción se normalizará o tomará una ruta distinta incluso aunque la coalición gobernante refrende la victoria precedente.

De no institucionalizarse la 4T y cuajar el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como partido, después del liderazgo centralizado de López Obrador posiblemente sobrevenga la fragmentación y acaso sobreviva lo que queda de la izquierda socialista más la joven militancia que haya logrado formar. El peligro de la desinstitucionalización es que cualquier formación política, sin importar su filiación ideológica, puede beneficiarse de ella. Las derechas radicales han sido mucho más eficaces que las izquierdas para captar el descontento con las políticas neoliberales y el deterioro de la democracia representativa. Acaso el éxito mayor de la administración obradorista fuera evitar esa fuga. No está en el horizonte inmediato esa eventualidad, como tampoco que la ultraderecha pueda hacerse de la base de masas que nunca tuvo, entre otras razones, por el clasismo y el racismo constitutivos de su ADN político.

Empero las abultadas falencias de la administración obradorista no deben servir para soslayar las razones de su victoria y de la crisis política, moral e intelectual de la oposición de derecha, propiciada por el déficit social y la corrupción que acompañaron a sus políticas cuando fueron gobierno. La desigualdad social, la injusticia crónica y el clasismo cebaron el malestar de las clases populares que, con el obradorismo, obtuvieron una victoria simbólica contra el país de los pocos. Y aunque notoriamente insuficientes a falta de una reforma fiscal progresiva y con un inocultable sesgo electoral, las transferencias directas también hicieron su parte en la conformación del consenso obradorista. Aunque corta por la falta de recursos, es innegable su vocación redistributiva, la gran ausente en

las administraciones explícitamente neoliberales. El salario mínimo ha tenido el incremento mayor en lo que va del siglo XXI, los programas sociales fueron incorporados al texto constitucional, se cobraron adeudos multimillonarios a los causantes mayores, se reguló el *outsourcing* y se legisló la libertad sindical, a consecuencia —cabe decir— de la presión de los congresistas demócratas para aprobar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ello, aunado a un monto récord de remesas, modificó la tendencia, redundando en una modesta disminución de la desigualdad social y en sacar a 5 millones de personas de la pobreza, logros incuestionables de la gestión obradorista, si bien empañados por el desplome en la cobertura y calidad del sistema de salud y el incremento del rezago educativo.

Días antes de la elección constitucional del 1 de julio de 2018 escribí que la inminente victoria de la izquierda era una oportunidad y también un riesgo. De un lado, podría encauzar la indignación social contra el *statu quo* neoliberal administrado por el PRI y el PAN. En un país con cerca de la mitad de la población en la pobreza y con una desigualdad social radical, un gobierno de izquierda podría explorar nuevas opciones para menguarlos. Pero, también, si AMLO realizaba un mal gobierno, clausuraría la posibilidad de que la izquierda gobernara a México por más de un sexenio y realizara un programa reformista indispensable. Peligro, sin embargo, que habría de correrse. Las derechas habían dado la espalda a los problemas sociales e iniciaron una guerra sin solución contra el crimen organizado. Infortunadamente la oportunidad se fue diluyendo por la incapacidad obradorista de conformar un programa de gobierno viable, la cortedad de su agenda, la politización de absolutamente todas las decisiones públicas relevantes, la poca destreza o franca ignorancia de los cuadros administrativos y la pandemia. Salvo de esta última, di cuenta

en un diagnóstico temprano de la 4T.[7] No obstante, la derecha tampoco logró recomponerse de su crisis de legitimidad y muy posiblemente pavimente un segundo mandato de la coalición gobernante.

Segmentos de la militancia partidaria de izquierda y derecha, de los medios de comunicación masiva y algunas columnas de opinión creen que la 4T es una revolución, por considerarla un cambio de gran calado, independientemente de su valoración específica. Incluso López Obrador la refiere como "revolución de las conciencias", el cuarto de los grandes hitos del relato patrio en una continuidad histórica —intermitentemente truncada por la contrarrevolución conservadora— impresa en los nuevos libros de texto gratuitos. Ilusione o amedrente, véase en ella la toma del Palacio de Invierno o la Marcha sobre Roma, en el imaginario redivivo de la Guerra Fría no son infrecuentes las asociaciones de la 4T con Cuba, Venezuela, la Unión Soviética y de su prócer con Stalin, Chávez, Mussolini y Hitler. Unos asumen que hacen la revolución en tanto que otros nos quieren resguardar de ella. El nuevo mito nacional se incorpora a un acervo vasto de suyo.

De esa revolución imaginaria trata este libro. El volumen no pretende mostrar los resortes de esta representación de la realidad, lo que busca es analizar los grandes trazos del sexenio obradorista y la condición de las izquierdas tras la gestión de una fuerza política que se asume como tal, que llegó al poder (y abusó de él) sin hacer una revolución más que declarativa; antes bien, prolongó la crisis del régimen, y reprodujo los vicios de la política nacional sin revertir la senda neoliberal

[7] Carlos Illades, "AMLO y la oportunidad histórica de la izquierda", *The New York Times* [edición en español], 27 de junio de 2018; Carlos Illades, *Vuelta a la izquierda. La Cuarta Transformación en México: del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría* (México, Océano, 2020).

perfilada en los ochenta del siglo pasado. También expandió la presencia de las fuerzas armadas en el Estado —con los ominosos precedentes de las guerras sucia y contra el narcotráfico—, concediéndoles facultades ajenas a su función y espacios en la administración pública, además de cuantiosos recursos presupuestales, canonjías y poder en detrimento del gobierno civil. La 4T reforzó al Ejecutivo a expensas de las instituciones de la República. Y el crimen organizado, que ganó muchas posiciones y plazas en las administraciones priistas y panistas, consolidó un Estado a la sombra en múltiples espacios del territorio nacional. De esta forma, los actores de la guerra interna e irregular que vive el país, esto es, las fuerzas armadas y el crimen, son factótum de la gobernanza estatal.

López Obrador tuvo la oportunidad de hacer un cambio sustantivo en el país y la desperdició. Entre el conservadurismo hasta la médula y la visión providencialista del devenir nacional del presidente, el arribismo común a aliados y partidarios, el obradorismo se diluyó como proyecto de izquierda y fue acentuando las taras de la cultura priista en su seno, sin salvar el legado institucional y la disciplina partidaria del antiguo partido del régimen. El remanente de la izquierda socialista MORENA mostró la incapacidad intelectual y su inoperancia política para perfilar una opción socialista dentro de la coalición gobernante plagada de advenedizos y de rémoras de un sistema caduco. De hecho, esta izquierda consumió su energía en justificar las acciones gubernamentales por erráticas que fueran, en lugar de hacer una elaboración inteligente y viable para sacar al país del marasmo. La orfandad ideológica e intelectual en que dejó a esta izquierda el colapso del bloque soviético y la satisfacción de haber llegado al poder por parte de una militancia ávida de revancha y lucro abonaron el camino para que el nacionalismo revolucionario ocupara posiciones dentro del campo ideológico. Tras combatir durante un siglo,

finalmente la Revolución mexicana se impuso a la tentativa socialista que pretendía trascenderla y abrir un horizonte histórico nuevo y mejor. Tampoco sabemos si una figura presidencial sin el carisma y el arraigo de López Obrador pueda mantener la cohesión de su coalición, dado que el obradorismo como ideología no es un pegamento potente para unirla y suena difícil encontrar un sucesor con la sagacidad política suficiente para manipular los hilos del poder (legal y extralegal) como hizo el inquilino de Palacio. Si aquélla perdiera la presidencia o no se resolviera adecuadamente la sucesión, habría una fractura; de imponerse, hacia donde apunta la evidencia disponible, la cohesión del movimiento podría preservarse a través de un Maximato adecuado a los nuevos tiempos, acaso seguido de un nuevo arreglo institucional. Pero no adelantemos vísperas, siempre podrá ocurrir otra cosa.

Chapultepec, diciembre de 2023

1

El obradorismo

Político tenaz, Andrés Manuel López Obrador se sobrepuso a dos elecciones adversas en Tabasco (1988, 1994), la segunda groseramente fraudulenta, antes de competir por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (DF) en 2000, la cual ganó apretadamente al aspirante panista. Esto, más el liderazgo construido cuando fue presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 1996 a 1999, aunado al fracaso del primer gobierno de la alternancia encabezado por Vicente Fox (PAN), despejaron el terreno al político tabasqueño para contender por la presidencia de la República en la cuestionada elección constitucional de 2006. En el tercer intento, López Obrador ganó la presidencia en julio de 2018 con una mayoría contundente (53.19% de los votos) y la caída estrepitosa del voto panista, priista y perredista.

La corrupta administración de Peña Nieto, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y decisiones puntuales como el aumento del precio de los combustibles en 2017, favorecieron la candidatura de López Obrador, quien, todavía en las filas perredistas, se deslindó del Pacto por México, acuerdo cupular de las tres fuerzas políticas principales para realizar las reformas estructurales (energética, educativa, entre las más importantes) en el regreso priista. Fuera de la trama palaciega, el fundador de MORENA

quedó en magnífica posición para capitalizar el descontento popular y la crisis moral de las élites (políticas, económicas, intelectuales) que condujeron al país en tres pistas: la desregulación económica, la transición democrática y la guerra al crimen organizado. El político tabasqueño logró concentrar en un polo a la izquierda política e ilusionar a un electorado que en un 85% se pronunció por el cambio en 2018. Éste se postuló cual ruptura necesaria con el régimen de privilegios basados en el vínculo espurio del dinero con el poder político. La desmesura de esta acumulación de capital mediante la corrupción, sumada a la reconfiguración del mundo del trabajo en el capitalismo desregulado, produjeron una masa de pobres y excluidos, simultáneamente castigados por el mercado y desprotegidos por el Estado. Ellos, más los marginados que provenían de antiguo en sociedades radicalmente desiguales, serían el objeto de un nuevo pacto social tramado desde el poder federal y que supondría la recuperación de lo público por parte del ente estatal.

El triunfo obradorista corroboró que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia fue quien captó el anhelo colectivo del cambio. No era cualquier transformación, López Obrador hablaba del fin de la simulación, de un "cambio verdadero" al que nombró 4T con el propósito de inscribirlo en una perspectiva histórica, esto es, un continuo donde la jornada electoral era el umbral del México del futuro en el que, dijo en su libro de campaña, "habrá en la sociedad mexicana en su conjunto un nivel de bienestar y un estado de ánimo distinto del actual", resultado de la "revolución de las conciencias", que prevendría "el predominio del dinero, del engaño y de la corrupción, y la imposición del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo". Pueden aducirse muchas razones de la aplastante victoria obradorista, pero, sin duda, el haber generado una expectativa dentro

de un electorado muy diverso y crispado con el *statu quo* fue definitivo.[1]

La coalición Juntos Haremos Historia reunió alrededor de MORENA a un grupo de partidos electoralmente insignificantes, oportunistas y retardatarios, congregados únicamente por la urgencia de conservar el registro: el Partido Encuentro Social (PES), un partido confesional ultraconservador; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un membrete ecologista que no apoya las energías limpias, impulsor de la pena de muerte y aliado sucesivamente del PAN, PRI y MORENA; el Partido del Trabajo (PT), formación de origen maoísta alentada por el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, con una militancia tan reducida que sólo una maniobra oscura del tribunal electoral le permitió recuperar el registro legal que perdió en las urnas, simpatizante también de la dictadura de Kim Jong-un. Y MORENA, conformado por un núcleo que acompaña a López Obrador desde hace 20 años, remanentes comunistas y de la izquierda nacionalista no priista, además densamente poblado por todos quienes quisieron labrarse un futuro con el obradorismo sin importar la filiación política precedente. El gabinete presidencial, si bien variopinto, no integró en la primera línea de responsabilidad a miembros de estos partidos, aunque sí en niveles menos visibles en los cuales, además, el presidente colocó a sus paisanos tabasqueños y compañeros de antaño, independientemente de que sus perfiles, calificación y experiencia profesional correspondieran a los cargos, herencia nefasta del priato en los usos de la gestión pública. Otro tanto hizo el presidente con los exgobernadores de oposición que se "portaron bien" en las elecciones, es decir, donde MORENA ganó las gubernaturas. Lo cierto es que la

[1] Andrés Manuel López Obrador, *2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México* (México, Planeta, 2017), pp. 271, 274.

coalición obradorista en las cámaras legislativas y su gabinete cumplimentan las decisiones del Ejecutivo federal, siéndole enteramente funcionales.

Cuando hablamos del obradorismo referimos a un movimiento que no configura todavía ni una ideología ni un régimen político. Desarrollado en los últimos veinte años, el movimiento agrupa a las clases populares y a las clases medias bajas alrededor de un liderazgo carismático, castigadas de antiguo por la desigualdad, y en las últimas décadas, por la globalización excluyente. A esta base social se agregaron coyunturalmente contingentes de los sectores medios, de universitarios y ciudadanos de las entidades federativas (que solían votar por la derecha), por el descontento extendido con respecto del gobierno de Peña Nieto. Aquella base es leal y sólida, responde cuando la convocan el presidente o MORENA, y está activa en las redes sociales. Es innegable que el discurso polarizador del presidente —avivado con los yerros en el ejercicio gubernamental que lo conduce a buscar responsables en las administraciones anteriores— incentiva su movilización, como también lo hacen las políticas sociales de su gestión (aumentos al mínimo y a los salarios contractuales, diversos programas basados en transferencias directas, pensión universal para adultos mayores, regulación del *outsourcing*). No obstante, el punto de partida de la movilización son las iniciativas del presidente mas no las reivindicaciones sociales. Tampoco López Obrador coadyuva a la organización de las clases populares dado que pretende ser el patriarca de la "república amorosa".

Su carácter de movimiento es una razón entre varias que traban la interlocución del obradorismo con otros movimientos sociales (el feminismo, el neozapatismo) porque todos disputan entre sí la prioridad de sus demandas. Articulado de arriba hacia abajo, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del DF armó una estructura política a partir de los programas sociales

dirigidos a las clases populares de la Ciudad de México que dio asiento a la base territorial del futuro MORENA. Con adecuaciones y en un cambio de magnitud, el modelo se replicó a escala nacional cuando el político tabasqueño alcanzó la presidencia de la República. Esta relación directa con el potencial electorado se solidificó con la presencia recurrente de López Obrador en colonias y delegaciones, provisto de un discurso sencillo y directo, centrado en los problemas comunes y las necesidades básicas de la población de bajos recursos. La cercanía discursiva además de física, no impostada sino producto de una larga trayectoria de trabajo comunitario, le rindió frutos. La convocatoria constante a sus adeptos y la narrativa construida con base en el agravio, el fraude electoral atribuido al Instituto Federal Electoral (IFE), proporcionaron el combustible para la activación del movimiento, agregándose las acciones de la derecha en el gobierno y el gran capital que, involuntariamente, coadyuvaron a cohesionar el obradorismo y a avivar el deseo de revancha de sus militantes. La estrechez de miras de las élites que condujeron la modernización neoliberal, seguras de que la protesta popular sería contenida (como en 1988 y 2006), en lugar de desmontarla, la potenciaron hasta escapar a su control desalojando al binomio PRI-PAN de Palacio y retirándolo de la conducción de la transición democrática y de la inserción del país en la economía global. Fue esta derecha la que puso en juego la polarización que López Obrador explotaría después.

El obradorismo carece de una perspectiva de emancipación social. Tanto discursivamente como en las acciones cotidianas de gobierno y las políticas públicas, la posibilidad de que las masas populares se autogobiernen está descartada. La tutela del pueblo bueno se presenta como la relación óptima entre los gobernados y el príncipe benévolo, austero y justo. La única participación ciudadana en las decisiones públicas es a través de las consultas ciudadanas, todas convocadas desde

el Ejecutivo, más para legitimar la voluntad presidencial que para deliberar, no digamos acerca de la conducción de la República, sino sobre asuntos de interés local. La organización autónoma de la sociedad, de haberla, le incomoda y la rechaza López Obrador, quien no pretende ensanchar la sociedad civil, antes bien su expectativa es absorberla por el Estado (el Ejecutivo en primer término), asumiendo que éste es la expresión inmediata e inequívoca de la voluntad general, lo cual hace obsoleta cualquier mediación institucional, con el riesgo añadido de que pueda distorsionar aquella voluntad o desvirtuar el propósito del gobernante. La comunicación y la distribución de beneficios a la población se da de manera directa entre el líder (encarnación del pueblo) y el pueblo concreto, sin fisuras.

El liderazgo obradorista es carismático, unipersonal y autoritario. La administración pública, el partido, la diplomacia, la relación con la prensa, las obras de infraestructura, todo, absolutamente todo en el gobierno federal obedece a la voluntad, los tiempos y el humor presidencial. Este carácter autoritario engarza con una sociedad civil débil lacerada por la desigualdad y la injusticia, profundamente agraviada y resentida de antiguo en su copioso contingente plebeyo. Aparte de las asignaciones monetarias directas y de la liga histórica de la participación electoral con la distribución de magras prebendas, el obradorismo brinda a las clases populares la perpetua victoria simbólica sobre los ricos y poderosos, independientemente de que sus fortunas y privilegios permanezcan intocados. Que desde la tribuna presidencial se fustigue a quienes se identifica como opresores no es cosa menor para los que padecen el agravio. El líder bueno y justiciero habla por ellos, resarciéndolos en el espectáculo matinal del obradorismo. Es su manera, acaso la única, de participar en el poder.

Un presidencialismo incontinente, en tensión con los marcos institucional y legal, remplazó a otro enteramente dócil

al poder económico. Sin embargo, no debemos de confundir la centralización en la toma de decisiones y la pulsión autoritaria de López Obrador con la detentación del poder real. Éste, como argumentaremos en otro lugar, lo concentran el gran capital y, con la narcoguerra, si no es que antes, el crimen y el estamento militar. Aun cuando el presidencialismo esté desbordado, el poder civil dentro del Estado mengua a cada día con la transferencia de funciones al Ejército y en menor medida a la Marina, y hacia afuera del ente estatal, con el dominio territorial, económico y político del crimen organizado.

López Obrador es el ideólogo de la 4T. En sus libros, conferencias matutinas y mítines define las directrices políticas y precisa los mensajes que posteriormente comentan los medios, amplifica la militancia morenista y replica el ejército de bots en las redes. La megamarcha del 27 de noviembre de 2022 culminó con el discurso del presidente donde definió su doctrina política y su forma de gobernar, que para él son indisociables, como "humanismo mexicano". Llevaba años el presidente coqueteando con el sustantivo, al que el "mexicano" pretende darle un mayor anclaje situándolo en una comunidad específica, hacerlo universal y nacional a la par, connotando también su peculiaridad. "Necesitamos heredar una teoría propia", dijo el primer mandatario. Hasta en los conceptos, él quiere ser el guardián de su legado. La definición, no obstante, es vaga y ecléctica.

El humanismo cívico, sabemos, surgió en el Renacimiento italiano y definió al hombre como un ser político que se realiza dentro de una república virtuosa de ciudadanos libres. Nuestro humanismo —resumió López Obrador— significa no aceptar "el derrotismo"; sostener que "el progreso sin justicia es retroceso"; fijar como cometido del Estado "crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores"; estar ciertos de que, "más allá del crecimiento

económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y, de manera específica, en beneficio de los más pobres y marginados"; saber que el poder "sólo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás". Lo específico de estas "ideas universales" residiría en que se apoyan tanto en "nuestra grandeza cultural milenaria" como en "nuestra excepcional y fecunda historia política" (parece referir a los pueblos originarios, los liberales decimonónicos y la Revolución mexicana). Aquélla, entonces, no corresponde a las ideas mismas, moduladas o reformuladas por una situación particular, de una historia concreta, sino porque anida en México.

El obradorismo recurre a la polarización discursiva. La antítesis amigo/enemigo se expresa en distintas oposiciones (mafia en el poder/pueblo, conservador/4T), pero con el mismo sentido: una totalidad unitaria y excluyente, el pueblo versus una minoría rapaz, retardataria y corrupta. Ahora bien, ese antagonismo hace sentido para un público amplio porque hablamos de un país tremendamente desigual e injusto. El discurso polarizador tiene un referente en la realidad, independientemente de la manipulación discursiva a la que pueda ser sujeto por parte del presidente. El populismo no crea el antagonismo, lo que hace es politizarlo a fin de movilizar sus bases sociales, alinear a los seguidores y conformar un campo homogéneo donde queden subsumidas las diferencias. Sólo en la fantasía de la derecha México era un país fraternal y unido antes de la presidencia de López Obrador, trasmutando la causa en consecuencia.

Filón del discurso obradorista es el cristianismo. Cada vez son más reiteradas en el mensaje presidencial tanto las referencias bíblicas como la mención a Jesucristo cual reformador social. El primer socialismo también asumió la prédica de los primeros cristianos, pero no la derivó hacia un cristianismo

conservador como hizo López Obrador. Éste habla todavía con menos recato de sus creencias religiosas que sus antecesores priistas y panistas, y sus libros enaltecen la fe cristiana convocando a amar al prójimo. La moral cristiana, con todas sus consecuencias prácticas, es objeto de la apropiación presidencial. La afinidad con el cristianismo, magnificada por las huestes morenistas, permitió descubrir al entonces secretario de Gobierno de la Ciudad de México las amplias coincidencias de los diez mandamientos con el ideario de la 4T y a López Obrador ver en el Ejército al "ángel de la guarda del pueblo".[2]

El proyecto presidencial, y el Ejecutivo mismo, están anclados en distintos momentos del pasado, de donde abrevan para revestirse de densidad histórica y de una legitimidad pretendidamente irrebatible. Bien sabemos que López Obrador concibe la historia como una épica patria, por lo que inscribe la propia en una secuencia de larga duración (Independencia, Reforma, Revolución, Cuarta Transformación), situando a sus adversarios en los bandos y periodos menos afortunados (conservadores, neoporfiristas, neoliberales). A cada cual la historia lo pondría en su lugar, siendo ahora el turno de los neoliberales, aunque, en realidad, en el discurso matinal se confunden los tres, por lo que también puede hablarse de que se presentan como un continuo de la derecha a través de los tiempos (el "bloque conservador"). En materia económica, el presidente se remonta a mediados del siglo xx, al esplendor del desarrollo estabilizador que corona Adolfo López Mateos con la nacionalización de la industria eléctrica (supuestamente "renacionalizada" por López Obrador con la compra de 13 plantas de energía de Iberdrola por parte de un fondo de inversión privado respaldado por el gobierno), de quien convenientemente

[2] "La lucha por la paz de la 4T coincide con los diez mandamientos: Martí Batres", *Infobae*, 1 de febrero de 2022; *Reforma*, 20 de noviembre de 2023.

omite su política antisindical (la represión de los ferrocarrileros) y la celada a Rubén Jaramillo, que dicen poco a la filia nacionalista del presidente. Otro tanto ocurre con el movimiento del 68. De ello hablaremos más adelante.

Los bastiones obradoristas son las corporaciones caras al conservadurismo clásico: el Ejército, las Iglesias y la familia. Las competencias del instituto armado, más las de la Marina, desbordan el mandato constitucional, en la medida en que se extienden a la seguridad pública (incluida la cabeza del sector), la administración de puertos y aduanas, la construcción de aeropuertos y sucursales bancarias, la distribución de medicamentos, la seguridad sanitaria y un larguísimo etcétera. Esto es, el Ejecutivo ha debilitado el poder civil dentro del Estado en favor del brazo militar. Las Iglesias ganan terreno dentro del espacio público —favorecidas por la reforma constitucional del gobierno de Carlos Salinas de Gortari—, además de intervenir explícitamente en organizaciones políticas (el PES, el cual formó parte de la coalición gobernante). La familia no sólo deposita los valores morales de la sociedad, sino también de las asignaciones directas de los programas sociales, financiados cuando menos en parte con los recortes al propio gasto social (educación, salud). De acuerdo con el dicho presidencial, ésta es "la principal institución de seguridad social que existe en el país".

Incondicional de los Estados Unidos, el presidente se plegó a la criminal política migratoria de Donald Trump (que poco y nada cambió Joe Biden) cumpliendo la Guardia Nacional la función de una patrulla fronteriza extraterritorial, aceptando también que México recibiera a los migrantes latinoamericanos mientras el gobierno estadounidense decidía si les otorgaba visas, además de no hacer una presión diplomática suficiente para proteger los derechos de los migrantes mexicanos, aunque sí para rescatar a un exsecretario de Defensa

capturado por el cargo de narcotráfico en los EUA. Entre múltiples incidentes no menores está la criminal negligencia del Instituto Nacional de Migración, que en marzo de 2023 costara la vida a 40 migrantes latinoamericanos confinados en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

En su afán de cubrir todo el espectro político y subordinar a los demás poderes de la República, López Obrador pretende suplantar a la prensa al presentarse a sí mismo como la principal fuente de información y cual ministerio de la verdad acerca de lo que publican los medios. Esta tentativa de colonizar al "cuarto poder" escaló con la sección *Quién es quién en las mentiras de la semana*, una suerte de *reality* matutino de los miércoles, en la que se "desenmascaran" las noticias falsas o tendenciosas de los medios informativos. En paralelo, la ahora extinta agencia noticiosa estatal (Notimex), según varios de los periodistas afectados, lanzó ataques en las redes que dañaban su reputación y propaló noticias falsas a través de cuentas anónimas, antes de extinguirse, tras una larga huelga, por la manifiesta incompetencia de su directora. México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y la administración obradorista ha roto el nada envidiable récord de sus antecesores en cuanto a comunicadores asesinados en el ejercicio de su función, lo que hace más nociva esta práctica gubernamental reprobable de suyo. En vista de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apercibió al Estado mexicano para cesar esta acción intimidatoria que debilita el debate público libre.

El disenso se expresa en una parte de la prensa, de poca circulación en México, con la desmesurada respuesta del presidente en sus conferencias matutinas. Aquélla funciona como el adversario a mano para activar el discurso binario desde Palacio Nacional, dada la debilidad de la oposición partidaria, únicamente reactiva a las invectivas presidenciales. Cada

mañana, López Obrador fija la agenda a su coalición, a los poderes federales, a sus adversarios y a los medios en una mezcla de datos inexactos, medias verdades, exposición de problemas serios, anuncios, mentiras, ocurrencias e insultos a los adversarios vertidos frente un auditorio dócil que da la pauta, frecuentemente con preguntas obsequiosas, para que el político tabasqueño se pierda en largas disquisiciones. Esta práctica comunicativa, activada por López Obrador cuando era jefe de Gobierno del DF, le ha rendido magníficos dividendos, si bien decrecientes; informa a la vez que distorsiona los hechos, simplifica abusivamente la realidad o caricaturiza los argumentos contrarios. Es obvio que al presidente le molesta la crítica, en su obsesión por pasar a la historia que él redactará a su arbitrio.

La estrategia de comunicación centrada en las conferencias matutinas del presidente ha perdido eficacia, de acuerdo con los análisis demoscópicos. Éstos muestran un alejamiento paulatino del público con respecto del mensaje matinal de López Obrador. Desde el fracasado operativo en Culiacán de octubre de 2019, la llaneza del mensaje presidencial ha perdido la claridad y sencillez que poseía de antiguo, para enredarse reiteradamente en diatribas incomprensibles o contradicciones evidentes. El alambicado no sorteo del avión presidencial o las declaraciones con respecto a la protesta femenil ilustran esto. En cierta medida ello también ocurrió con la pandemia de coronavirus, en la que lo único que queda claro es el afán gubernamental de bajarle de tono al problema, de evitar una alarma que cuestione las capacidades presidenciales para enfrentar la crisis.

Las respuestas presidenciales a la protesta feminista y a la pandemia fueron erráticas. No obstante tratarse de dos fenómenos de naturaleza distinta, además de los vericuetos en que López Obrador se internó en cada caso, ambos poseen

una línea común, incluso una consistencia discursiva que los aproxima a pesar de la confusión en Palacio. El presidente depuró su estrategia comunicativa con la pandemia, al colocar un pararrayos (el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell) y no quedar a la intemperie como le ocurrió con la movilización femenil del 8 de marzo de 2019, en la que convocó demasiado tarde a las mujeres del gabinete para que nos dijeran que el presidente era un feminista, aunque pareciera lo contrario.

La protesta feminista escapó al radar de López Obrador porque éste sólo registra las reivindicaciones procedentes de lo que reconoce como pueblo. Las demandas transversales no cuadran en la geometría presidencial, debido a que ésta identifica lo popular, lo social y lo nacional, dada la centralización en el Ejecutivo que gobierna el flujo reivindicativo. En el mejor de los casos, la exigencia feminista estaba inscrita en el ámbito de la sociedad civil, y ésta, en la que confluyen intereses encontrados, perturba la homogeneidad y la armonía que busca el presidente con su política social.

A esa geometría tan estrictamente recortada también se sometió la pandemia. Aunque sea una amenaza global, no una consecuencia de sus políticas o un virus "mexicano", López Obrador la jibarizó a una escala nacional para enfrentarla con dos discursos. Y aquí el pararrayos López-Gatell cumplió una función profiláctica hasta que agotó su credibilidad por plegarse obsecuentemente a las directrices presidenciales armonizándolas en inverosímil maniobra con las consideraciones científicas. López Obrador moduló la voz pública para que lo escucharan las capas populares. Asumió desde el principio que no sacrificaría una economía en recesión por la emergencia sanitaria, sin atisbar la duración de la pandemia y los altísimos costos en vidas humanas que traería. Ni pruebas diagnósticas masivas ni el uso de cubrebocas recomendó el presidente a la

población, desatendiendo las recomendaciones respectivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un derroche más de voluntad que de prudencia; su política fue estar cerca, se sustentó en los afectos, consistió en la empatía.

López Obrador empleó todos sus recursos comunicativos para expresar solidaridad, incluso arriesgando su salud en el contacto directo con la gente (tres contagios), anticipándose a la eventual desgracia que podía caerle encima. Esto también lo llevó a escenificar en un disenso cuando comenzó la pandemia, una suerte de combate arreglado con su gabinete de Salud (cuando todos podemos ver en las mañanas que el presidente está detrás del funcionario que habla, que él mismo cede y quita la palabra, o desmiente a los subalternos que aventuran un diagnóstico que no es el suyo) en el que se colocaba del lado de los desfavorecidos, compartía sus símbolos, llamaba a no cerrar los negocios porque la recesión económica les pegaría fuerte, pues bien sabía lo poco que podrían hacer para cuidarse quienes diariamente tienen que salir a la calle para ganarse la vida, impedidos de confinarse. El presidente, que perdió a un contingente significativo de las clases medias, a los de mayor escolaridad y a muchas de las mujeres que estaban con él, se pertrechó en su base.

López Obrador volteó a ver al México olvidado y pobre, recorrió el país en una campaña permanente desde que contendió por la presidencia de la República en 2006, sin dejar de hacerlo ahora que ocupa el cargo y a pesar de su mal cardiaco. Esto trasciende el ánimo publicitario y manifiesta una genuina empatía con las clases populares. De hecho, López Obrador se ve más cómodo en sus giras de fin de semana a las entidades federativas que ocupándose de gobernar. Sin duda, esta conexión con el pueblo llano es una de las causas de su fuerza y popularidad. Suponer que ésta se basa exclusivamente en los programas sociales o en los sesgos de las conferencias

matutinas significa soslayar una de las razones de su alta votación en tres elecciones presidenciales consecutivas, como también ignorar por qué mantiene una alta aprobación no obstante los fracasos en distintos rubros de su gestión. Que todavía genere esperanza en una capa grande de la población no es algo para minimizar, antes bien habría que intentar explicarlo.

2

Vaciar el Estado

López Obrador encontró un Estado descompuesto y disfuncional. La corrupción, el tráfico de influencias y el contubernio de la política con el dinero eran tan evidentes como la deficiente administración pública, la duplicación de funciones y la incompetencia burocrática. De igual manera, la penetración del crimen en distintos niveles de gobierno, instancias operativas y poderes de la Unión era notoria. Había que actuar para evitar que la gangrena acabara de contaminar el núcleo estatal y ello ameritaba un plan con objetivos claros y mensurables. Era razonable pensar que la solución marcharía por el camino de la profesionalización de la burocracia civil y la rendición de cuentas, pero las medidas de la 4T consistieron en la gestión centralizada, la mutilación indiscriminada del aparato administrativo y la cesión de competencias a las fuerzas armadas. Tampoco se rompió el nexo espurio de la política con el dinero, sólo que ahora también participaban los empresarios consentidos de la 4T. La ilusa metáfora según la cual "la corrupción se barre como las escaleras, de arriba hacia abajo", no hizo sino mostrar el voluntarismo presidencial, la falta de ideas y el nulo deseo de institucionalizar esta política y fortalecer al Estado en vez de desfondarlo.

Es incuestionable la legitimidad de la victoria obradorista, de la crisis de las élites que evidenció, de la simpatía y el

carisma del líder y del respaldo popular que posee. Tampoco hay duda respecto de la conducción del país con base en los intereses de las oligarquías y de la desatención de la cuestión social por parte de sus predecesores priistas y panistas. No obstante, los contrapesos y la pluralidad son fundamentales en la democracia política y ambos fueron corroídos durante el mandato de López Obrador. Éstos evitan la autocracia, la tiranía de la mayoría u otras formas intermedias. En el sistema de contrapesos lo que importa es acotar el poder del Ejecutivo para evitar que actúe en desmedro de los otros poderes de la República, mengüe los derechos de los ciudadanos o limite la opinión pública.

Aunque la independencia de los organismos autónomos era incipiente, sin duda las acciones gubernamentales respecto de ellos han sido regresivas, particularmente en energía (la obsesión presidencial), derechos humanos y transparencia. La centralización obradorista dirige sus baterías contra los organismos reguladores con la presunción de que sirven más a los intereses privados que a los públicos, además de ser fuente de corrupción. El mecanismo consiste en colocar incondicionales al frente de éstos o reabsorberlos dentro de la administración central. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acotando la relativa autonomía ganada en los últimos años, cedió el cargo a alguien de MORENA con muy escasa acreditación en el medio, obsecuentemente plegado a los dictados presidenciales.

Particularmente ríspida ha sido la relación con el organismo electoral, al cual el obradorismo atribuye haberle escamoteado la victoria en 2006 y permitir el fraude en las elecciones subsiguientes. Si bien la tensión con el Instituto Nacional Electoral (INE) recorrió el sexenio, ésta escaló cuando comenzó a perfilarse la sucesión presidencial. Más allá del protagonismo de dos consejeros, de declaraciones imprudentes de ambos y

del oneroso costo de la institución, el INE ha cumplido satisfactoriamente su función en el sexenio obradorista, estando ciertos de la intervención del crimen organizado en las campañas o de la de otros poderes fácticos, así como de la imposibilidad institucional de contenerlos. La primera acometida de envergadura del Ejecutivo contra el Instituto fue el proyecto de reforma electoral que rehacía su arquitectura, reducía sustancialmente su presupuesto, designaba a los consejeros mediante elecciones abiertas a la ciudadanía, otorgaba a la Secretaría de Gobernación algunas de sus atribuciones y desaparecía a los candidatos plurinominales. Al no prosperar la enmienda constitucional por carecer de una mayoría calificada en el Senado, el presidente optó por modificar la ley secundaria eludiendo el mandato constitucional, lo cual provocó la movilización en sendas manifestaciones multitudinarias. Posteriormente, colocaría a una de las suyas en la presidencia del Consejo General del INE.

Respecto de los poderes de la Unión, López Obrador revitalizó el presidencialismo del régimen de la Revolución mexicana, con el Ejecutivo fuerte y un Legislativo y Judicial subordinados a éste. El primero, merced de la mayoría en la Cámara de Diputados que concede poco a la oposición, y una minoría robusta en el Senado, más propensa a pactar. En cuanto al Judicial, el presidente modificó la correlación de fuerzas con la incorporación de ministros y togadas afines y el allanamiento a sus directrices por parte del titular de ese poder, hasta que la impresentable candidatura a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la esposa de uno de los contratistas consentidos de la 4T recompuso las alianzas dentro del máximo tribunal, dando la victoria a una ministra nombrada durante la administración de Peña Nieto.

Menos terso es el trato con algunos de los gobiernos estatales, en particular los panistas, que formaron un bloque para confrontar a la federación (algo que no había sucedido

en mucho tiempo), sobre todo en las asignaciones presupuestales y en la política sanitaria. Cabe decir que el conflicto inició con la designación presidencial de delegados en las entidades federativas, quienes manejan los recursos de los programas sociales y son candidatos potenciales para las contiendas por las gubernaturas, consideración relevante dado el peso de las clientelas políticas en las elecciones mexicanas. Tras las elecciones intermedias de 2021, el presidente cambió la táctica premiando con misiones diplomáticas a los mandatarios priistas que pavimentaron las victorias morenistas en las entidades federativas.

Quitar o reducir el poder de la oligarquía es un objetivo de la izquierda, como también lo es que éste se redistribuya en la sociedad. Después del desencuentro por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, López Obrador incorporó al *top ten* mexicano de la lista de *Forbes* a los megaproyectos (Slim, Quintana) y a la política social (Salinas Pliego), colocó a las mineras (Larrea, Baillères) en la primerísima lista de empresas estratégicas que reabrirían en la "nueva normalidad" y lleva la fiesta en paz con la televisión privada. Es decir, la élite económica tiene cabida en la 4T mientras se ciña a sus prioridades, esto por no hablar de los contratistas afines al obradorismo. Los más ricos tienen motivos para estar contentos. "Ya no gobiernan", como repite el presidente, pero se benefician como siempre del flujo de los recursos públicos y de la opacidad de su manejo; siguen viviendo subsidiariamente del erario en el capitalismo "de cuates" inaugurado por el alemanismo. No han recibido ese trato preferencial las pequeñas y medianas empresas, las que concentran el mayor volumen del empleo formal en el país, a quienes López Obrador dio el portazo en su plan de emergencia económica.

Hay desconfianza recíproca entre López Obrador y un segmento del capital —nativo y global—, tanto por el amago constante de revisar los contratos firmados con gobiernos

anteriores, como por los cambios del talante presidencial con respecto de ciertos temas, particularmente el energético, en el que suma o resta la inversión privada de acuerdo con la circunstancia y el auditorio. No obstante, en distintos renglones y proyectos participan los magnates mexicanos. Si bien en algunos casos los forzaron a pagar elevados montos de impuestos atrasados, tienen la garantía verbal del presidente de que no habrá una reforma fiscal que grave sus fortunas. Silenciosa y consistentemente crecen los depósitos de capitales mexicanos en los bancos estadounidenses, al tiempo que los migrantes han incrementado los envíos hacia nuestro país, amén de la cifra negra del blanqueo de capitales de la economía criminal camuflado como remesas.

Ahora bien, si concedemos que el poder político de la oligarquía disminuyó en el obradorismo, la pregunta es quién se benefició de esta pérdida. Cuando se habla de "democratizar la democracia", entendiendo por ello transferir la capacidad decisoria del Estado a los agregados sociales (incluidos los presupuestos), ello supone someter a los representantes políticos al escrutinio de los electores. Esto con vistas a resolver mediante la democracia participativa (variante de la democracia directa) algunas de las falencias de la democracia representativa (liberal). No es menos sino más democracia la que busca este planteamiento. Mermados los contrapesos dentro del Estado, el presidente ha buscado legitimar sus acciones por medio de consultas populares poco representativas y sesgadas, mal organizadas y sin instrumentos de certificación confiables, por lo que no hay una redistribución del poder en beneficio de la sociedad civil organizada, ni tampoco incentivos para que se articulen nuevos conglomerados sociales o se conformen empresas de interés social. Antes bien, lo que observamos es el bloqueo constante y la satanización de los grupos autónomos que no se someten a los dictados de Palacio. A la democracia

participativa enunciada en "La nueva política económica en tiempos del coronavirus" —lanzada en paralelo con el acuerdo presidencial que legaliza la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública— no la acredita todavía la experiencia, que López Obrador tanto aprecia como fuente de conocimiento.

Entonces, de un lado tenemos que la centralización en el Ejecutivo socava los contrapesos del sistema republicano, pero tampoco ese poder se transfiere a la sociedad, ni siquiera a las clases populares para las cuales dice gobernar el presidente, además de ser las principales beneficiarias de su política social y potencial clientela política, muy a los viejos usos políticos del régimen mexicano. Ellas son actores pasivos que reciben las derramas en efectivo que llegan a la familia, la institución más antigua y objeto de la veneración presidencial. Esto es, no se crea ciudadanía, sino que se fomenta la dependencia con respecto del ente estatal. Las mediaciones institucionales del Estado con la sociedad minadas, un Ejecutivo incontinente, el Ejército con cometidos que exceden su naturaleza y rebasan las normas, una oposición únicamente reactiva y con una enorme crisis de credibilidad a cuestas, más una sociedad civil débil y desorganizada, es lo que tenemos con el obradorismo. A menos que se trate de una vía democrática inédita, no hay evidencia de que estemos en el carril de la democracia liberal, pero tampoco en el de la democracia participativa más allá de una apelación retórica.

La astringencia presupuestal contribuye también al vaciamiento de las capacidades estatales. La reducción a rajatabla del gasto en las dependencias públicas, su compactación con fines de ahorro más que de eficiencia y la supresión de institutos de investigación en algunas de las secretarías redujo la capacidad de diagnóstico, elaboración, evaluación y corrección de las políticas públicas como se observa, por ejemplo,

en el seguimiento de los programas sociales o en el ramo ambiental. Con la justificación de retirar intermediarios que lucran con los programas, las asignaciones directas fluyeron con escasa supervisión y carecen de padrones confiables de beneficiarios. Otro tanto ocurrió con los estudios acerca del impacto ambiental, como vimos con las obras insignia de la administración obradorista. Obviamente la austeridad gubernamental sirve para quitar trabas a las prioridades presidenciales.

Las asignaciones financieras a Salud, Ciencia, Tecnología y Cultura sufrieron recortes draconianos, también bajo la consideración de que los fondos eran mal empleados, fuera en el derroche de los funcionarios o concediéndolos a organismos privados ajenos a la función. Indudablemente el uso del dinero público debe de ser fiscalizado, pero esto además sirvió de coartada para reasignar estos fondos a otros proyectos gubernamentales tampoco suficientemente supervisados. Una administración pública opaca de suyo continuó en la misma tónica durante este sexenio, si no es que empeoró cuando menos en lo que respecta a la transparencia y a las reiteradas asignaciones directas por parte del Ejecutivo. Tanto el decreto presidencial que clasificó como asunto de seguridad nacional el trazado del Tren Maya como el llamado presidencial a desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras dejarlo inactivo al bloquear el nombramiento de tres comisionados, ilustran bien esto.

Las instituciones creadas por la 4T son escasas, frágiles, de calidad dudosa y opacas. El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), el Banco del Bienestar, Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) no sólo están cualitativamente muy por debajo de las instituciones públicas creadas en la

posrevolución —el periodo de esplendor al que el presidente remite frente al desdén neoliberal por lo público—, sino lejos de cumplir satisfactoriamente la función para la que fueron creadas. La pandemia de Covid-19 mostró la inconveniencia de desmontar a botepronto el Seguro Popular sustituyéndolo por un organismo centralizado que desapareció por decreto a cuatro años de su creación sin rendir cuentas de su desempeño ni del manejo de sus finanzas. El INDEP organiza la venta de garaje de mercancías decomisadas por Hacienda. Las UBBJ cuentan con una matrícula estudiantil pequeña, carecen de infraestructura adecuada y de acreditación de sus licenciaturas, no disponen de un reconocimiento social que multiplique las oportunidades laborales de los egresados ni tampoco ofrecen a sus profesores las prestaciones laborales de ley. Más el desfalco monumental de SEGALMEX a manos de sus funcionarios, muy tibiamente sancionado por la autoridad competente.

El presidente reforzó el Ejecutivo y, al mismo tiempo, debilitó el Estado (incluida la administración central), amén de otorgar atribuciones desproporcionadas a las fuerzas armadas, la única institución pública en la cual confía. El incremento sustancial del presupuesto militar, el despliegue en múltiples regiones y la ampliación de su capacidad de negociación (con las autoridades civiles, el poder económico y, eventualmente, el crimen), abonan a su papel en la guerra interna e irregular en la que interviene. La militarización parte de una premisa equivocada dado que no existe una línea clara entre el interior y el exterior, lo público y lo privado que pudiera señalar en dónde exactamente se encuentra el enemigo público. Este error de perspectiva ha tenido consecuencias muy graves para la sociedad mexicana. No solamente es muy cuestionable que el Ejército combata delitos del fuero común, sino que los propios soldados no estén capacitados para enfrentar a esa clase de enemigo y, por tanto, cometan abusos contra la población civil, además

de que ellos mismos pueden considerarse como víctimas al ser empujados a una guerra para la cual no fueron entrenados. Además, las múltiples tareas ajenas a la seguridad nacional (comenzando por la seguridad pública), las empresas asignadas por el Estado y el debilitamiento del brazo civil de éste en favor del instituto armado (menos permeable al control democrático) son enteramente atribuibles a la administración obradorista. La desmesurada presencia militar amenaza la democracia cuando menos por dos razones: la ya mencionada mengua del poder civil y la posibilidad de que el Ejército se politice.

El Estado moderno separó los ámbitos religioso y civil, y las esferas pública y privada, sin hacerse cargo de la cabal observancia de las leyes al desatender las condiciones indispensables para que éstas se cumplan, entre ellas, la situación material y moral de los ciudadanos. Los catecismos cívicos decimonónicos promovieron los principios republicanos en vista del retiro de la Iglesia al espacio privado, mientras que en las escuelas la cátedra de moral (sustituida después por el civismo) remplazó a la de religión en el ánimo de que la instrucción escolar debería introyectar los valores patrios en los educandos. La *Guía ética para la transformación de México* (2020) persevera en esa misma dirección. Pretensión anacrónica en la era de la comunicación articulada en redes donde la exposición de la vida privada, incluso íntima, en los medios diluyó el deslinde con lo público. Que esto ocurra en esos espacios de interacción comunicativa no autoriza, sin embargo, que los gobernantes los confundan.

Los 20 "mandamientos" —como los llamó Alfonso Reyes— del código obradorista abarcan los renglones de la conducta personal y pública, y hablan de la libertad y la fraternidad, el amor, el sufrimiento y el gozo, el pasado y el futuro, el perdón y la redención, la justicia y la ley, el trabajo y la riqueza, la

familia y la naturaleza, el gobierno, mientras que la "revolución de las conciencias" permitirá que los valores patrios, sociales y cristianos del presidente enraícen en la comunidad y perduren en el tiempo. El catecismo de la 4T renuncia a imponer creencias, modos de ver el mundo, opiniones y preferencias; admite el derecho a la discrepancia, el reconocimiento de la crítica en cuanto atributo democrático; proclama el combate al autoritarismo en favor de la libertad e instruye para alcanzar una sociedad fraterna con fundamento en la justicia y la igualdad; reitera la convicción de que la historia es la maestra de la vida, dado que "quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va". La política deberá orientarse "por el principio del servicio a los demás", en tanto que el desarrollo económico no dejará "fuera a nadie".

Empero el prontuario presidencial no se contenta con instruir la moral pública y procurar la virtud ciudadana, también se adentra en la educación sentimental de los hijos de la república. Para esto, el amor, la gratitud, el perdón, la familia son temas capitales. "Ama especialmente a las personas que llevan una vida difícil por la falta de amor", sugiere la *Guía ética*. "Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza e incluso del odio"; "comprende las motivaciones de tu conducta indebida, conviértela en aprendizaje y enmienda el daño causado", recomienda. Con respecto de la familia prescribe evitar "las actitudes autoritarias, violentas y arbitrarias y procura resolver el conflicto mediante el diálogo".

Ni siquiera los presidentes panistas se involucraron tanto en la esfera privada de los ciudadanos como lo hace López Obrador, sea a través de las directrices de la *Guía ética* o de las conferencias matutinas. Desde la tribuna de Palacio devenida en púlpito, el presidente instruye cómo educar a los hijos, qué juegos hay que prohibirles, cuáles deben ser las aspiraciones del individuo, reiterando a la primera oportunidad las

virtudes de Jesucristo, aunque dice que cualquier creencia religiosa habrá de respetarse. Y, en contrario, utiliza la tribuna presidencial para responder por la conducta de sus vástagos o la probidad de sus hermanos. Como López Obrador no distingue entre el presidente y el padre de familia, el ámbito público del privado, esto da lugar a equívocos constantes (*i.e.* no todas las religiones creen en Jesucristo ni tampoco todos tienen religión, a algunos les gustan los videojuegos violentos, otros más desean un segundo par de zapatos) sin mostrar un atisbo de entendimiento y contención.

Exhibir públicamente información sobre privados, procedente probablemente de organismos de fiscalización estatales, también forma parte de la revoltura de esferas que el presidente cotidianamente realiza. Si las personas impugnadas han cometido delitos lo conducente es proceder legalmente contra ellos, no mostrar sus datos personales en cadena nacional, es decir, esto viola sus garantías individuales, convierte la política en espectáculo y la justicia en apéndice de aquélla. La modalidad adoptada aquí es la del escarnio público, la exhibición en la plaza de la vileza del inculpado, de la traición a la patria impresa en su conducta. El juicio y la sentencia son instantáneos, aunque jurídicamente el veredicto sea nulo, la presunción de inocencia inexistente y la defensa de la honra a cargo del inculpado (el presidente no puede ser imputado de difamación). Es un abuso de poder.

Otro caso ilustrativo de la confusión de lo público con lo privado, de los muchos que podrían ofrecerse, fue la defensa presidencial de Alejandro Gertz Manero tras la filtración ilegal de unos audios que muestran las presiones del fiscal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un asunto que lo atañe como particular, no en cuanto servidor público: "Entiendo la situación personal, moral, humana, del fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo. Él

quiere que se haga justicia", dijo. Esto, por cierto, dos semanas después de que el ministro presidente de la Corte denunciara el acoso al que lo sometió el expresidente Felipe Calderón a propósito del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, que causó la muerte a 49 niños e hirió a 106 en junio de 2009. El dislate presidencial lo es por partida doble: de un lado, solapa el uso de las instituciones públicas con fines privados (después de remachar todo el sexenio que deslindaría el interés público del de los particulares), es decir, patrimonialista, y, del otro, no parece preocuparle que un poder (el Ejecutivo) invada las competencias de otro (el Judicial). No fueron pocas ni menores las pifias de alguien que pretendió gobernar con el ejemplo.

3

La guerra interna

Con la irrupción de la guerrilla moderna y la contrainsurgencia estatal, el país experimentó desde la década de los sesenta lo que en otro lugar llamamos un estado de guerra.[1] El enfrentamiento entre los cárteles y la guerra en contra de ellos emprendida por Felipe Calderón ocurrió en un contexto dentro del cual el Estado no había limpiado las excrecencias de la guerra sucia ni tampoco procesado judicialmente a los autores de los crímenes de lesa humanidad que conllevó. De hecho, fue en las entrañas de los cuerpos de seguridad, que actuaron sin contención legal, donde se incrustó la empresa criminal. El presidente panista, con la legitimidad electoral en entredicho y una cartografía mental en la que únicamente cabían buenos y malos, se lanzó a una suerte de guerra santa que los sucesivos gobiernos federales se dedicaron a administrar. No obstante, el sexenio obradorista le añadió ingredientes que no han hecho sino reforzar el régimen autoritario y prolongar la guerra interna irregular en el territorio nacional.

Combatir el crimen con las fuerzas armadas, el último recurso y no el primero de un Estado democrático, provocó una guerra interna irregular en la que, si bien no se enfrenta a

[1] Carlos Illades y Teresa Santiago, *Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra* (México, Era, 2014).

una fuerza beligerante o un enemigo del mismo rango, se lucha contra grupos pertrechados con armas de alto poder letal, auténticos ejércitos informales. Cierto, los objetivos, métodos de combate y financiamiento no corresponden a las guerras convencionales, volviendo impracticables las normas de contención del derecho internacional, y esto se traduce en el abultado número de muertos, desaparecidos, desplazados y en constantes atropellos a los derechos humanos, pues la narcoguerra liquida —con la complicidad del Estado o ante su conducta omisa— a líderes sociales, ecologistas, defensores de los derechos humanos y periodistas. Los llamados "daños colaterales", eufemismo que elude la carga moral y la responsabilidad política de haber optado por la respuesta militar que, conforme a la normatividad internacional, debe ser el último recurso. Esta guerra se degradó en cuanto a los medios utilizados por las bandas criminales para controlar las zonas donde operan, particularmente cuando las disputan entre sí o al confrontar a las fuerzas armadas. El coste humano es ya inocultable en cuanto a víctimas, tanto de la violencia criminal como de violaciones a los derechos humanos,[2] como muestran diversos episodios a lo largo de esta guerra y refrendó en este año el asesinato a mansalva de cinco civiles en Nuevo Laredo a manos del Ejército. De acuerdo con el parte militar, se les disparó desde el retén por desacatar la orden de detener el vehículo en que viajaban tras haber escuchado los soldados un "estruendo" atribuido a la detonación de un arma de fuego: ninguno de los jóvenes estaba armado.

A despecho de esta naturaleza no convencional, desplegar las fuerzas armadas en distintas regiones del país en acciones donde también participa la Guardia Nacional, extensión

[2] Carlos Illades y Teresa Santiago, *Mundos de muerte. Despojo, crimen y violencia en Guerrero* (México, Gedisa/UAM, 2020), pp. 145-146.

de éstas, sin dar visos del aminoramiento de la violencia, además de que podrían contarse en cientos de miles los muertos producidos por los enfrentamientos entre las propias organizaciones criminales y de éstas con la seguridad estatal, de las decenas de miles de desplazados y desaparecidos, dificulta encontrar término mejor que el de *guerra* para referirnos a este conflicto armado, asumiendo las implicaciones conceptuales y fácticas que presenta. La narcoguerra es una guerra interna incrustada en la economía global donde el enemigo que se enfrenta obedece a esa lógica, si bien es *difuso* dado que es difícil de identificar y ubicar. Pero, sobre todo, en esta guerra las distinciones tradicionales entre "la barbarie externa y el civismo interno, entre el combatiente legítimo y el no combatiente, entre el soldado o policía y el criminal", se desdibujan. Cada vez son más frecuentes las guerras no entre Estados, "sino entre grupos armados que actúan bajo la máscara del Estado pero que controlan territorios bien delimitados".[3] Y aunque no consigan hacerse de todo el poder sí alcanzan a dominar territorios completos, "feudos" con soberanía propia, en los cuales controlan la extracción de minerales (los diamantes en África, el oro en Guerrero, el aguacate en Michoacán, el agua en Morelos), plantíos de enervantes, laboratorios de drogas sintéticas y un copioso volumen de giros ilícitos.

Por medio de la coacción la empresa criminal ha creado una legalidad paralela que ocupa los espacios estatales y suplanta sus funciones. Éstas incluyen la seguridad, el monopolio de la violencia legítima, la fiscalidad y el control territorial. La función básica del Estado es brindar a los ciudadanos la seguridad con la que se constituye el pacto social. A la luz

[3] Mary Kaldor, *Nuevas guerras. Violencia organizada en la era global* (Barcelona, Tusquets, 2001), pp. 20-21; Achille Mbembe, *Necropolítica* (Tenerife, Melusina, 2011), p. 64.

de las cifras sobre asesinatos, desplazados y desaparecidos no hay duda de su incapacidad de cumplirla. El "monopolio de la violencia (i)legítima" está pulverizado en múltiples soberanías *de facto* o gobernanzas criminales regidas por sus propios códigos que debe acatar la población sometida a su dominio, además de que ese monopolio del ente estatal es cada vez más ilegítimo, a juzgar por la penetración criminal de las fuerzas de seguridad. La soberanía fragmentada respecto del dominio territorial en relación con las personas se manifiesta como una soberanía sumaria: el que posee el poder real determina "quién puede vivir y quién puede morir". La modalidad predatoria de la renta, coloquialmente "derecho de piso", para efectos prácticos es un impuesto extraordinario recaudado por los criminales en calidad de privados como pago de protección (de sí mismos y de otras bandas delincuenciales). En cuanto al control territorial, recordemos nada más lo mucho que incomodó a López Obrador la declaración del jefe del Comando Norte del Pentágono Glen Van Herck (más tarde lo repitió el exembajador Christopher Landau) de que el 35% del territorio nacional está en manos del crimen organizado y su enfático rechazo a la afirmación en el mismo sentido realizada por la cúpula del gabinete de Joe Biden en marzo de 2023.

Calderón privilegió la solución militar sobre cualquier otra medida; movilizó 6,500 soldados de infantería hacia Michoacán, apoyados por helicópteros y lanchas, para combatir la violencia criminal que, con base en su opinión más que en la evidencia, se había desbordado. El objetivo principal era aprehender a los principales capos de la droga de aquellos años. Al poco tiempo, los operativos alcanzaron doce entidades federativas. No obstante descabezar a los principales cárteles, el gobierno calderonista provocó, entre no pocos efectos imprevistos, su fragmentación. Este modelo militarista se acompañó de un discurso justificativo de los métodos para enfrentar

al crimen ejemplificado en expresiones alusivas a "salvar a las familias" de la violencia y el flagelo de las drogas, muy acorde con el conservadurismo católico del presidente panista. Con esta estrecha mirada, la causa justa volvía incontrovertible el recurso de las armas para enfrentar el crimen organizado. La respuesta presidencial ante la crítica señalaba que el otro camino posible era simplemente no combatir a los cárteles y, por tanto, hundir al país en el caos.

La estrategia no cambió con el regreso del PRI al Ejecutivo federal salvo que, a diferencia de Calderón, Peña Nieto dejó de ofrecer cotidianamente partes de guerra. De hecho, el discurso presidencial respecto del combate a la delincuencia, más que justificarlo la solapaba, ocultándola. En el mandato del priista no disminuyó la violencia criminal del país y sí crecieron los dispositivos de autodefensa armada de la sociedad para hacer frente a la incapacidad manifiesta del Estado de hacerse cargo de la seguridad ciudadana. Michoacán fue un caso paradigmático, en donde claramente se combinó la estrategia militar con la operación política al enviar a un comisionado presidencial a mediar en el conflicto entre los grupos de autodefensas que combatían a la Familia Michoacana. Mediación fracasada que acabó por fortalecer a las autodefensas vinculadas con los grupos criminales. A una década de la operación peñista que pretendía pacificar a Michoacán —donde comenzó la guerra Calderón a finales de 2006—, la situación de violencia en la que vivían cultivadores de limón y aguacate, así como la población en general, incluso empeoró.

La administración obradorista asumió también el modelo militarista, aunque, según el discurso oficial, "ponderando la seguridad de la población por encima del abatimiento de los líderes de los cárteles". La Guardia Nacional formada por militares, marinos y los saldos de la Policía Federal desmanteló las policías sin arrojar ninguna evidencia indicativa de la

disminución en los índices de violencia. Inicialmente, el nuevo organismo de seguridad quedó en manos de un mando militar y sólo la presión de la sociedad civil hizo que el presidente colocara nominalmente a la Guardia Nacional bajo un control civil. No obstante, avanzado el sexenio, López Obrador reculó, presentando una iniciativa de ley que inscribía al organismo de seguridad pública dentro del Ejército. Concomitante a esto, el presidente creó el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, integrado por el Ejército y la Fuerza Aérea. Y posteriormente designó a un militar como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

López Obrador puso en práctica una política social con el fin de combatir la pobreza y la exclusión, que él considera las causas directas de la violencia criminal. No es claro que se lograra algún cambio sustantivo ni tampoco indicativo de la certeza del diagnóstico. Sin duda la pobreza y la exclusión conforman el hábitat de la delincuencia, pero no es posible establecer una relación causa-efecto entre ambas. Al respecto, el discurso obradorista posee cierta novedad en relación con sus predecesores: se trata de un discurso oblicuo que, de una parte, reconoce que se tiene que combatir el crimen, pero de otra parte ofrece "abrazos, no balazos". La conducta pública de López Obrador refuerza esta ambigüedad, siendo prueba fehaciente el saludo a la madre del *Chapo* en una de sus giras semanales, cuando en otros momentos se ha negado a atender a colectivos que claman justicia para las víctimas de la violencia; sólo los padres de los normalistas de Ayotzinapa han merecido la deferencia presidencial. En sentido opuesto, la captura de Ovidio Guzmán, hijo del *Chapo*, fue considerada una acción "responsable", haciéndose votos para que "las actividades regresen a la normalidad lo más pronto posible". También es de resaltarse el carácter moralizante del discurso obradorista, especialmente para el caso de la violencia y el crimen, evidenciando con

ello un conservadurismo clerical bastante sorprendente, procediendo de un hombre que se considera juarista y de izquierda. Su respuesta ante los hechos de violencia son reprimendas paternales con el objetivo de disuadir a quienes se portan mal, convocándolos a retornar al camino del bien.

Debemos mencionar, sin embargo, una iniciativa del gobierno obradorista que ningún otro se había atrevido a llevar a cabo, esto es, la demanda contra la industria armamentista de EUA por "prácticas de negocio negligentes" en México. Dada la facilidad para conseguir armas de todo tipo y calibre, las diferentes ramas del crimen organizado (salvo las pequeñas bandas de narcomenudistas) están muy bien pertrechadas y cuentan además con cuantiosos recursos para adquirirlas. El poderío de armamento es consustancial a la capacidad operativa de los grupos criminales. Estar preparados para combatir al rival, o bien al Ejército y otras fuerzas federales, es la prioridad. A su vez, éste también ha tenido que actualizarse y proveerse de equipo como no lo hacía desde décadas atrás. Pero en esta lógica, lo único que se puede esperar es o bien una suma cero, o el escalamiento a la guerra total, en la cual resultan fútiles todos los principios de contención de las leyes de la guerra y en donde la paz y la seguridad no pueden vislumbrarse.

No únicamente están las concesiones dadas al Ejército, sino que, como sucede en el caso de los grupos criminales, es un poder frente al cual la 4T frecuentemente claudica; así lo muestran la liberación de Ovidio Guzmán, después de la amenaza del cártel de Sinaloa (acaso del jefe de seguridad de los *Chapitos*, Néstor Isidro Pérez Salas, el *Nini*) de desatar una masacre, y el caso del general Salvador Cienfuegos, a quien se rescató de manos de la DEA, con la amenaza de suspender la cooperación binacional en materia de narcotráfico, y se trajo de vuelta al país para evitar que lo procesaran en los Estados Unidos por posibles vínculos con el crimen organizado.

Probablemente esta última maniobra fuera exigida por el Ejército, ante el cual López Obrador tuvo que cambiar su discurso después de un primer momento cuando afirmó que el caso Cienfuegos era un símbolo de los niveles de corrupción alcanzados en el periodo neoliberal. Entonces apelaría a la soberanía nacional. Sin duda, las presiones estadounidenses por el crecimiento exponencial de las muertes por fentanilo en su país —abastecido por los *Chapitos*— y el costo ante la opinión pública mexicana por la liberación de Ovidio Guzmán convirtió su recaptura en un objetivo prioritario para el gobierno de López Obrador. En una acción preparada por fuerzas tácticas estadounidenses y mexicanas, la captura se consumó exitosamente al comenzar 2023.

"Abrazos, no balazos" no disminuyó la violencia ni evitó las masacres ni tampoco acotó las actividades criminales. La tendencia alcista de los asesinatos dolosos, observable en la segunda mitad del periodo peñista, se consolidó en el obradorismo. Muy a su pesar, López Obrador entregará peores números que Calderón Hinojosa y Peña Nieto. Con la tendencia actual, al terminar el sexenio la cifra de homicidios dolosos rebasará los doscientos mil. Aguililla, Caborca, Colima y Zacatecas, territorios de confrontación bélica de los cárteles, no sólo mostraron el poder de fuego de éstos sino la ineficacia de los operativos militares, de haberlos, dado que en Aguililla, durante meses, las fuerzas armadas se abstuvieron de intervenir confiando en que los grupos criminales llegarían a un acuerdo para pacificar el poblado. Cuando llegaron los convoyes militares al poblado michoacano, los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación se replegaron y, muy probablemente, al desplazarse las tropas a otro territorio en disputa, aquéllos regresarían. Entidades que antes estaban en relativa calma (Guanajuato) se transformaron en teatro de la guerra, y otras, con altos índices de violencia criminal en el pasado (Guerrero), periódicamente reencienden

las alarmas. Asimismo, los decomisos de estupefacientes disminuyeron durante la administración de López Obrador, motivo de continuas presiones estadounidenses para frenar la exportación de opiáceos, y el cobro de piso se extendió a ciudades y poblados situados fuera del control territorial de los cárteles.

Tan fallida resultó la estrategia belicista de Calderón como la de López Obrador de canjear balazos por abrazos, dado que ninguna contuvo la expansión de la empresa criminal y ambas coadyuvaron a la multiplicación de la violencia. Ni la Policía Federal Preventiva del primero, ni tampoco la Guardia Nacional del segundo, solucionaron el problema. Aquella policía pronto se corrompió, si no es que genéticamente estaba atrofiada de la cabeza a los pies, como mostró el juicio a Genaro García Luna en la corte de Brooklyn; y la segunda es una pieza más de la militarización del país, la cual, junto con un combate a la corrupción más discursivo que tangible, fue la respuesta obradorista a la descomposición del Estado. Contra lo que se diga, la coordenada de la guerra, además de marcar la transición mexicana, potenció a los contendientes (los criminales y el Ejército) en desmedro del poder civil, y en los territorios dominados por la delincuencia organizada opera una soberanía de facto, al margen o en connivencia con el Estado, y sustraída al control democrático. Se estima que en alrededor del 80% del territorio nacional tienen presencia los grupos criminales. Entre los 175 cárteles y bandas esparcidos en las entidades federativas, predominan el Jalisco Nueva Generación y el del Pacífico. Más allá de achacarse los partidos unos a otros tener vínculos con el crimen —fenómeno común a todos de acuerdo con el tiempo y la circunstancia—, sorprende que el asunto no sea objeto de un debate nacional, la preocupación capital de la clase política y un asunto de Estado con independencia de quien gobierne.

Las elecciones intermedias de 2021 fueron las más violentas en dos décadas de alternancia política. Alrededor de una

centena de políticos, un tercio de ellos candidatos a puestos de elección popular, cayeron asesinados durante el proceso electoral. A otros más los secuestraron o amedrentaron. Además, durante la jornada comicial en lugares con fuerte presencia del crimen algunos representantes de los partidos y funcionarios de las mesas electorales corrieron análoga suerte. Esto no es nuevo desde que comenzó la malhadada guerra contra el crimen organizado, pero su virulencia rebasó los comicios precedentes, llevando a la alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos a manifestar su preocupación al gobierno mexicano y a los comentaristas políticos a reparar en la obviedad de la tensión entre democracia y guerra interna irregular.

Es inocultable que el crimen organizado forma parte del entramado político nacional: financia campañas, da o niega el aval a candidatos de los partidos, impone funcionarios en los gobiernos locales, realiza actos de proselitismo otorgando recursos a la población, aplica una fiscalidad paralela a la ciudadanía, desempeña funciones de seguridad en los territorios que domina y disputa también al Estado el monopolio de la violencia o la instrumentaliza a través de éste. La paradoja, por no llamarla tragedia, de la transición democrática es que ésta apenas comenzaba a despuntar cuando se disparó la violencia criminal. Y ésta penetra en el cuerpo social, subsume a las otras violencias, disputa espacios de poder (económicos y políticos) y drena los recursos públicos, al grado de ser ya un actor importante dentro del mercado electoral, del que hablan poco las instancias encargadas de regularlo y los representantes del Estado. La delincuencia organizada "se portó muy bien" durante la jornada del 6 de junio pasado, fue la rúbrica presidencial a ésta. Ni cabe la mención que desató sospechas sobre un pacto espurio con el crimen, ni tampoco fue cierto ese buen comportamiento, como documentó la prensa local. Sin recato, criminales y autoridades conviven en el espacio público en algunas regiones del país.

No obstante la innegable consolidación del mecanismo electoral en términos de funcionamiento y transparencia, los aspectos no procedimentales están al margen de su escrutinio e inciden de manera determinante en el resultado de las contiendas en espacios diversos de la geografía nacional. Pasamos del fraude más burdo en el priiato a formas menos evidentes, ya no digamos de subvertir, sino, antes bien, de confiscar, la voluntad ciudadana. Si es imposible de suyo tener una democracia robusta en sociedades tan desiguales como la nuestra, lo que entre otras cosas permite el tráfico de votos y alimenta las clientelas políticas, los poderes de hecho legitimados a través de las elecciones anulan la oportunidad de optar de la ciudadanía (no me detengo en la pobreza y la cuasi indiferenciación de las ofertas políticas). En la medida en que se naturalice esta situación y aquellos poderes formalicen legalmente la soberanía criminal que detentan de hecho, la descomposición del ente estatal se acelerará todavía más.

La violencia política se expande en la democracia (no a consecuencia de ella), cuando ésta se considera el mejor antídoto para inhibirla. La incorporación de la izquierda a la política formal y la amnistía a los presos por el delito de sedición, recordemos, conformaron la solución concebida por el gobierno de José López Portillo para desactivar las guerrillas (las otras, puestas en práctica por su antecesor Luis Echeverría, fueron la guerra sucia y la cooptación de los líderes) y acabar con la violencia política (no la de Estado, claro está). La democracia representativa se postula cual disputa pacífica por el poder. A despecho de esto, el crecimiento de la empresa criminal en la economía en la globalización neoliberal, su enraizamiento en la sociedad y la participación política ponen en entredicho esa pretensión y desnaturalizan los procesos democráticos.

El crimen y el Ejército actúan como poderes de facto, ante los cuales el presidente se plegó para llevar a cabo

su proyecto. Las consecuencias de este riesgoso acomodo no son lo bastante visibles hoy, pero prometen ser muy negativas. Esto no quiere decir que no se combata de manera intermitente a aquellos grupos que bien saben del amplio margen de acción que les permite operar sin grandes escollos. Y el Ejército aprovecha los privilegios que tanto le reditúan y que difícilmente podrán escatimarle en futuros sexenios gobiernos presumiblemente más débiles. López Obrador benefició al instituto armado como ningún otro presidente en la historia moderna del país a cambio de mantener la estabilidad necesaria para realizar sus reformas. Contra su promesa de campaña de que regresaría a los soldados a los cuarteles con el propósito de desactivar la guerra interna, confirió a las fuerzas armadas —particularmente al Ejército— funciones y estímulos que exceden con mucho tanto el mandato constitucional como la lógica civilista del régimen de la Revolución mexicana. Frente a una iniciativa privada que considera real o potencialmente corrupta y un Estado descompuesto y disfuncional, el presidente optó por convertir al Ejército "del pueblo" en el garante de la 4T en un entorno que suponía conflictivo. El instituto armado sin limpieza alguna que intervino en las huelgas obreras de los cincuenta, disparó contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, realizó los vuelos de la muerte en la guerra sucia, participó en las masacres no aclaradas durante el calderonato y el peñismo, del que no sabemos hasta qué grado, aunque estamos ciertos, también ha sido penetrado por el crimen.

4

La política del espectáculo

López Obrador presumió a medio sexenio haber anclado la 4T a través de un cúmulo de acciones que reorientaron el país en la senda correcta, donde incluso los desaciertos eran virtuosos, materializándose en "los cambios tan profundos que se han hecho realidad".[1] El galeno era López Obrador, la receta el combate a la corrupción y la medicina la austeridad republicana, de sabor más laico que la pobreza franciscana predicada posteriormente. Una suma geométrica de ahorros y más ahorros (hasta por mantener en tierra durante cinco años el avión presidencial, antes de venderlo al gobierno de Tayikistán muy por debajo de su costo), hacen que el presupuesto federal alcance absolutamente para todo: hospitales equipados, escuelas dignas, programas sociales masivos, becas para estudiantes de todos los niveles, vacunas, medicinas gratuitas, tratamientos para el cáncer infantil, incentivos a la pequeña industria, formación de la Guardia Nacional con cien mil elementos, desastres naturales, siembra de millones de árboles, ciencia y tecnología, búsqueda de desaparecidos, cien universidades públicas de nueva creación (más cuarenta en ciernes), cuatro aeropuertos internacionales más los costos

[1] Andrés Manuel López Obrador, *A la mitad del camino* (México, Planeta, 2021), p. 10.

de la cancelación de otro, megaproyectos en el sureste (no en el sur, como se sugiere).

Ni siquiera la Covid-19 impidió que estos objetivos se alcanzaran, dado que incluso la pandemia contribuyó a la racionalización del gasto. De acuerdo con la contabilidad presidencial, 98 de sus 100 compromisos de campaña habían quedado satisfechos, faltando únicamente desconcentrar la administración federal y aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tareas en las que se empeñaría en el segundo tramo de su gestión, además de concluir en tiempo las obras insignia de ésta. Sin entrar en detalle, hay evidencia suficiente de que se descobijaron rubros esenciales en favor de las prioridades presidenciales, que el presupuesto federal es insuficiente para hacerse cargo de todas ellas si no se realiza una reforma fiscal sustantiva y no mejora el desempeño económico (no obstante el cobro de cuantiosos adeudos a los causantes mayores).

A pesar del desgaste de la administración de López Obrador, de sus numerosos yerros, o de acontecimientos inesperados que han rebasado las exiguas capacidades gubernamentales, todavía no varían las condiciones que permitieron su triunfo, de la misma manera que al país no ha llegado la transformación prometida. Las élites (políticas, económicas e intelectuales) no han superado la crisis que estalló en el corrupto sexenio de Peña Nieto, la base social que desde 2006 acompaña a López Obrador permanece leal y la oposición cuenta con escasa credibilidad, amén de una política redistributiva que, aunque incipiente y cuestionable, ha contenido los reclamos populares. Pero no sólo eso, López Obrador tampoco ha perdido la capacidad de crear expectativas en un segmento considerable de la población y de despertar entusiasmo en las clases subalternas. Es el único político importante que lo hace. Ello se debe a su inagotable capacidad de politizar cualquier evento

o circunstancia, conformando una tensión dinámica que activa el conflicto al movilizar a los actores: invariablemente hay una tarea por hacer, una misión histórica que cumplir. Su público, los medios, sus adversarios siempre están esperando algo, con lo que López Obrador logra concentrar la atención en lo que va a pasar incluso aunque se trate de un despropósito.

Esta fuga hacia delante, o al pasado en busca de analogías funcionales, da coherencia al discurso obradorista por precario que sea, pues la línea del tiempo ofrece un sentido a los acontecimientos. Ese péndulo oscilante entre el pasado y el futuro permite al presidente responsabilizar de los problemas del presente a quienes le precedieron y generar una expectativa hacia un futuro indubitablemente mejor: difumina el presente al temporalizarlo dado que lo vuelve fugaz, y, con esta operación, las falencias de su gestión se atenúan ante una parte de la opinión pública, permitiéndole a López Obrador construir una narrativa positiva de su gestión. Por eso el énfasis de la oposición en los magros resultados presidenciales pierde peso, porque la atención está en el futuro (la promesa) y en el pasado (la causa): así con el aeropuerto de Texcoco y su "solución" en Santa Lucía, el sainete del avión presidencial, "en agosto comenzará la recuperación económica", o múltiples episodios sexenales. Mientras López Obrador no pierda esta capacidad de concentrar la discusión pública en el terreno que más le favorece, y continúe produciendo expectativas, será por demás difícil que la oposición capture la voluntad ciudadana. Ofrecer esperanza a quien no la tenía puede parecer poco, pero a muchos les basta.

La política mexicana en agosto de 2019 se pobló de imágenes. En la cuenta apócrifa atribuida a Juan Jesús Lozoya Austin, un video muestra a dos personeros panistas empaquetando fajos de billetes presumiblemente para corromper a cuanto legislador tuvieran enfrente. En paralelo, el hermano, Emilio,

adereza el escándalo mediático incriminando a miembros de las administraciones federales y congresistas de los últimos treinta años en diversos ilícitos, vinculados fundamentalmente con desfalcos ruinosos para Petróleos Mexicanos (Pemex) y cabildeos de expresidentes en favor de empresarios corruptos con el objeto de beneficiarse irregularmente de la reforma energética peñista. Emilio Lozoya Austin prometió casi veinte horas de videos y múltiples pruebas contra los responsables del daño al erario, pero sólo entregó una parte ínfima de los materiales ofrecidos y una oferta económica ridícula para negociar la impunidad. Recibió prórroga tras prórroga de la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de multiplicar el acopio de evidencia. A cambio, el único delincuente confeso de recibir los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht no pisaría la cárcel. Se adujo, primero, una anemia aguda; posteriormente, lo operaron de una hernia hiatal en un hospital privado; al final lo "recluyeron" en un departamento familiar en Polanco. Esta cadena de hechos evidencia para muchos un cambio genuino en la política nacional, también que la lucha gubernamental contra la corrupción "ahora sí va en serio" y que, una vez en la vida, las sanguijuelas políticas morderán el polvo. Desplegado este mensaje alentador, el presidente convocó al pueblo —porque para él la sociedad civil no existe— a denunciar penalmente a sus predecesores y fijó la fecha de la Independencia como límite para recibir la patriótica demanda; de no ser de esta manera, sugirió, él procederá por su cuenta. Todo acabó en una insulsa consulta popular que no movilizó más que a las bases morenistas.

Infortunadamente, el presidente no tiene el monopolio de los videos. Carlos Ahumada, a pesar de no disponer de un vocabulario superior a las cincuenta palabras, sedujo a la *crème* de la izquierda nacionalista, cuando perredistas y morenistas eran uno y el mismo. El empresario argentino tuvo la astucia

de grabar a los operadores del PRD mientras recibían donaciones "desinteresadas" para la causa del cambio que todavía no se adjetivaba verdadero. La práctica persistió. El meteórico ascenso del chico maravilla de Querétaro, Ricardo Anaya, fue acompañado de videos en los cuales varios legisladores panistas de la vieja guardia departían alegremente con unas damas de compañía contratadas para agasajarlos en el receso de una convención partidaria. Peña Nieto tomó sus precauciones y grabó a los opositores y, posiblemente, también a los suyos, no fuera que huyeran del partidazo por el deseo irrefrenable de conseguir un hueso. Cual copia del *affaire* Ahumada, en el video dado a conocer por *Latinus* aparece el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero "para el movimiento" de manos del operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en 2015 —año del debut electoral de MORENA— por Manuel Velasco Coello. El militante del PVEM que avitualló a Pío, David León, sería nombrado por el presidente López Obrador coordinador nacional de Protección Civil y, previo al escándalo, zar de la distribuidora estatal de medicinas. Idéntico al *quid pro quo* de la negociación con Ahumada con el gobierno local. "No somos iguales", machacaría AMLO seguido de la glosa de los comentaristas afines al régimen, quienes, en análisis exprés, advirtieron diferencias inobjetables entre los implicados, en la magnitud de los montos, además del sutil detalle de emplear bolsas de papel y no los portafolios de los delincuentes de cuello blanco. Alguien añadió analogías históricas absurdas. Sin duda, la 4T posee también su propia semiótica.

Por año y medio Lozoya Austin gozó de la libertad de acuerdo con el estatus de "testigo colaborador", hasta que unas fotos departiendo con sus amistades desparpajadamente en un restaurante de lujo desataran la ira presidencial. Una columnista de finanzas, que había acusado al exdirector de Pemex de

difamación, fue la autora del hallazgo del *Peking duck* en el exclusivo Hunan de las Lomas. El ridículo de la Fiscalía, que había negociado por largo tiempo con Lozoya los términos de su extradición desde Málaga, motivó que a éste se le considerara inculpado. Meses atrás, en julio de 2021, Martín López Obrador, hermano menor del presidente, apareció en un video recibiendo dinero en efectivo también de manos de David León. Y en diciembre de ese año, mes del arroz amargo del Hunan, exhibieron a varios colaboradores de López Obrador, entre ellos su secretario particular, haciendo depósitos hormiga en efectivo en múltiples sucursales bancarias. Esto, al igual que el dinero entregado a los hermanos del presidente, presume el portal *Latinus*, quien presentó las grabaciones, fueron a dar a las campañas políticas de MORENA. El gobierno no ofreció ninguna explicación convincente de los videos, atribuyéndoles a sus adversarios conservadores la filtración (Roberto Madrazo Pintado, acérrimo enemigo político de López Obrador, es socio del portal noticioso), como si la falacia *ad hominem* sustituyera a la evidencia o equivaliera a la verdad.

Tienen razón quienes observan la dependencia de los partidos hacia el dinero ilegal para robustecer las campañas electorales, incluido MORENA, que, participando de éste, pretende reducir el financiamiento público a los partidos ahora que es gobierno, conocida la ventaja de las fuerzas políticas en el poder por la débil fiscalización de los fondos públicos disponibles para los comicios. López Obrador ha dicho que no lucrará políticamente con la necesidad de los electores (no sabemos a cuál renglón corresponden las clientelas políticas), aunque sí con la inapropiada atribución que se concedió como guardián de las elecciones limpias. De otro lado, la exhibición de los videos puede verse como indicio del uso electoral de la demanda de justicia de una población secularmente agraviada por su ausencia.

El obradorismo no da visos de resolver la crisis nacional de la que debe de hacerse cargo como gobierno, profundizándola incluso en algunos aspectos (seguridad, economía, salud, profesionalización de la administración, etcétera). Un gobierno inoperante y una oposición desacreditada copan el vacío político con imágenes, lo único que pueden ofrecer como sucedáneo de una política sustantiva que dé viabilidad a un país desgarrado. Estamos muy lejos de la "purificación de la vida pública" pregonada por el otrora candidato López Obrador. Más bien corremos en sentido opuesto: avanza la putrefacción de un sistema caduco que la tecnocracia gobernante adaptó a las necesidades del capitalismo desregulado, y que la 4T, a falta de imaginación política, pretende recuperar como el paraíso que nos arrebataron los neoliberales. Mientras tanto, ciudadanos ávidos de silbar, aplaudir y mentar madres contemplan a los esperpentos de la política nacional, esa oquedad tapada con imágenes.

La politización de la justicia es una constante de la historia nacional, pero su representación como espectáculo, sin ser novedad, nunca llegó a los extremos alcanzados en este sexenio. Las conferencias matutinas también son el foro en que la justicia se escenifica como *reality show*. Opositores, periodistas, jueces y científicos son los actores involuntarios de este montaje, incluidos segmentos chuscos para arrancar la risa del auditorio (el líder de FRENA cayéndose de la silla) o pausas musicales (en memoria de Vicente Fernández y de Juan Gabriel). Tras mostrar las "pruebas", viene el juicio moral del presidente que equivale a una condena de facto. Cuando se trata de casos más importantes para López Obrador, por su relevancia política, o porque tiene un interés particular el fiscal (sus litigios personales), el asunto se judicializa. El presidente dirá en una conferencia posterior que él no tiene que ver con el caso, que no cree en la venganza, que la Fiscalía es autónoma y un

hombre intachable la encabeza. Ese suele ser el patético guion de la justicia. Casos emblemáticos, los más de la administración federal pasada, de la corrupción y de la colusión del Estado con el narcotráfico, es decir, la Estafa Maestra y los 43 de Ayotzinapa, fueron reveses rotundos para la administración de justicia, dejando claro que el régimen de impunidad permaneció intacto pese al cambio de gobierno. Y el único éxito judicial con respecto de los crímenes de la clase política (el proceso contra Genaro García Luna) ocurrió en los Estados Unidos, dado que en México no había cargos contra el todopoderoso exsecretario de Seguridad calderonista. Entretanto, miles de convictos siguen sin sentencia y, con el incremento del número de delitos tipificados como peligrosos, con la consecuente prisión preventiva oficiosa, la población carcelaria crece en los reclusorios de por sí atestados y capturados por los grupos criminales.

Acontecimientos imprevistos hicieron que el presidente perdiera el control del debate público y, frente a ellos, reaccionó de manera descompuesta e improvisada, tornándose irascible, maltratando a los impugnadores e invariablemente victimizándose. Quedó un vacío discursivo que no pudo llenar con palabras ni cubrir con imágenes. El fallido operativo de Culiacán, en el que el chantaje del cártel del Pacífico hizo que las fuerzas armadas le devolvieran en octubre de 2019 al capturado Ovidio Guzmán en aparente decisión presidencial, se convirtió en una comedia de enredos en la que López Obrador ofreció versiones distintas y contradictorias del acontecimiento, considerado por analistas y medios como un fracaso enorme de la estrategia de seguridad y prueba fehaciente de su inviabilidad. En otro episodio, a una semana de que las feministas le rayaran la puerta de Palacio Nacional el 9 de marzo de 2020, López Obrador llenó el Zócalo con una multitud disciplinada, el "ejército del pueblo", que no lo increpaba, lo

saludaba. El bálsamo para un ego lastimado por la furia femenina. Restaurado el orden, el presidente colocó Un día sin mujeres en el mismo marco que la Marcha blanca de 2004: detrás estaba la ubicua mano negra de los conservadores. Ésa sería la muletilla en las confrontaciones siguientes.

La caída de la popularidad presidencial en un 7%, el descubrimiento de que el gobierno de la Ciudad de México ofrecía un medicamento contraindicado para tratar la Covid-19, la cuarta ola de la pandemia que se resistía a la "doma" por decreto, inflación, seis periodistas asesinados en un mes y, sobre todo, el escándalo mediático por un posible conflicto de interés a propósito de una casa de lujo en Huston, propiedad de un contratista de Pemex y ocupada durante un año por el hijo mayor y su esposa, atormentó por varias semanas a López Obrador, quien recién salía del segundo tratamiento contra la Covid-19 y de un cateterismo cardiaco producto de una revisión de "rutina", aunque extraoficialmente se habló de un infarto. Descompuesto, el presidente despotricó contra los medios ("mercenarios y corruptos"), victimizándose él y a su vástago ("los hijos pagan por los padres"). Esto, cuando los Estados Unidos enviaban un segundo emisario del presidente Biden para plantear las preocupaciones con respecto de la reforma eléctrica a discusión en las instancias legislativas mexicanas. Y de manera sorpresiva, cruzándose madejas diferentes, López Obrador emitió un mensaje confuso en la conferencia mañanera del 9 de febrero de 2022, ratificándolo al día siguiente en términos semejantes, acerca de que habría de hacerse una "pausa" en las relaciones diplomáticas entre México y España, a resultas de las concesiones leoninas que las administraciones priistas y panistas realizaron a las empresas españolas de energía en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ello provocó estupor en las cancillerías de ambos lados del Atlántico, más si se consideran los vínculos históricos y culturales

entre ambos países y que la inversión española directa es la segunda más importante en México, únicamente superada por la estadounidense. Aunque ignoramos el motivo del exabrupto presidencial, pareció un esfuerzo agónico, desafortunado e inútil para desviar la conversación pública de la que perdió el control.

El choque de dos trenes en la Línea 3 del Metro en enero de 2023 puso a prueba la teatralidad gubernamental. La crisis del sistema de transporte público que mueve a la capital, evidente desde hace años, en este sexenio asomó al abismo. La colisión de dos convoyes en 2020 en la Línea 1, y el incendio del Puesto Central de Control y el desplome de un tramo de la Línea 12 (Dorada), ambos en 2021, causaron una treintena de víctimas fatales y múltiples lesionados e intoxicados. Como era de esperarse, los funcionarios de las últimas tres administraciones eludieron su responsabilidad y aprovecharon la situación para sugerir que a sus adversarios era a quienes debían fincárseles cargos. La jefa de Gobierno y parte de su gabinete cantaron siguiendo los acordes de un músico "improvisado" celebrando la reapertura de un tramo de la línea siniestrada, no obstante que en el accidente fallecieron 26 personas. El mal tino no paró allí. Arguyendo que sucedían fallas "anormales" en el Metro, el presidente ordenó el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en todas las estaciones del sistema, pues no le cabía duda de que se trataba de un sabotaje "conservador" para dañar a su gobierno y no un problema atribuible a la falta de recursos para su mantenimiento o a la corrupción. Camionetas de la Guardia Nacional aparcaron en las estaciones y elementos uniformados se apostaron en los andenes. Parecía que el objetivo del operativo era que los vieran, evidenciar la presencia de la fuerza pública en un país militarizado. Distintos núcleos de activistas asumieron que la intención gubernamental era intimidatoria, como si se viviera una

situación extrema, y respondieron con el *hashtag* #Movilidad SinMiedo, convocando a una marcha que tuvo escaso eco a no ser en los medios debido a los desmanes de los encapuchados. En cualquier caso, las encuestas indicaron que una mayoría consideraba que el problema principal del Metro era el mantenimiento y no el supuesto sabotaje. El tinglado gubernamental fue insuficiente para ocultar lo que ven a diario quienes emplean este servicio.

5

La geometría social

López Obrador concibe la economía en tres niveles: un sector externo ligado al mercado global con el T-MEC, instrumento suficiente para que se desarrolle por sí mismo; el mercado interno, al que hay que impulsar con las obras de infraestructura, en especial en la producción energética; un segmento informal fuera de ambos que habrá de integrarse a través de programas sociales basados en asignaciones directas. Neoliberal, desarrollista, redistributivo y asistencialista a la vez. Ni sentar las bases de un Estado de bienestar, ni tampoco la autoorganización de las clases populares están en el radar obradorista. La ingeniería financiera para sostener esta política se concentra en las reasignaciones presupuestales más que en la carga fiscal, por lo que resulta insuficiente y costosa, pues es a cambio de sacrificar otros sectores fundamentales en una economía que, a duras penas, tendrá un crecimiento promedio en el sexenio del 1.3%, el más bajo desde la olvidable gestión de Miguel de la Madrid. No obstante, la disciplina fiscal y factores externos fortalecieron el peso a niveles no vistos desde 2015 y México se situó en el lugar 14 de la economía mundial.

El obradorismo asumió el tópico de la derecha nacional y de los populismos contemporáneos: la corrupción. Ésta no es únicamente la enfermedad neoliberal que contaminó la política con el dinero, el presidente también la considera causa

de la desigualdad social. Como dicha desigualdad, según él, no es producto del sistema económico, no trata de sustituirlo por otro más justo, sino de desterrar la corrupción. Antes de alcanzar la presidencia, el discurso obradorista distinguía el pueblo (las clases trabajadoras, los indígenas, los desposeídos y los pequeños empresarios) de la mafia del poder (los ricos y los políticos corruptos), mudando en el ejercicio gubernamental por la oposición entre los partidarios de la transformación y los conservadores, en una analogía con el conflicto político de la segunda mitad del siglo XIX, la cual le permitiría ensanchar a placer al bando retardatario. El presidente situó al pueblo en el centro de su discurso político. Éste es una totalidad orgánica donde no caben ni siquiera las fisuras y menos todavía el disenso. De esta manera, los movimientos sociales independientes son estigmatizados desde la tribuna presidencial, trátese de las comunidades contrarias al proyecto hídrico de Morelos o al Tren Maya, las feministas o las demandas de los padres de los niños con cáncer. De otro lado, se atienden las reivindicaciones de los movimientos afines al obradorismo y sus líderes tienen derecho de picaporte en Palacio. Las demandas por la diversidad sexual, ecológicas, la despenalización del aborto, la legalización de algunas drogas o la autonomía de los pueblos originarios no tienen cabida en la lente presidencial, quien concibe la república como un Estado-nación unitario y concede al Príncipe el monopolio de la política. "Politiquería" son las migajas a disposición de quienes no representan al pueblo.

En un principio este pueblo era más amplio, pero cuando avanzó su sexenio el término se achicó al tamaño de un presupuesto disminuido, volviéndose sinónimo de pobre. El decálogo de junio de 2020, la respuesta más coherente que el presidente atinó a dar al desbordamiento de la Covid-19, registró este cambio. Si bien la noción obradorista de pueblo semejaba la del romanticismo social (el primer socialismo, Michelet), su

redefinición con la pandemia (el Estado está para servir a los pobres) es inequivocamente cristiana. Incluso las clases medias que sufragaron por el cambio en 2018 deberían asumir ese credo y abjurar de sus expectativas aspiracionales (todo lo que exceda un par de zapatos). Los privilegios de la "burocracia dorada", cebada por muchos años con el dinero público y agigantada durante el foxismo, reales y escandalosos, fueron cercenados a tal punto, y sin la ponderación adecuada, que el Estado ha perdido a personal altamente especializado en enclaves de la administración pública.

Una sociedad de clase media es una de las ilusiones liberales más caras y la "prueba" fáctica de los economistas neoliberales de que las cosas van bien en los países periféricos, bajo la tesis de que, al engrosarse aquélla, se reduciría la pobreza en dirección de su posible extinción. Esta historia rosa tiene algunas complicaciones. En el Norte global la clase media ha menguado desde finales de los setenta del siglo pasado, mientras que en el Sur global el crecimiento de ésta se detuvo. Si tomáramos por referencia a los países desarrollados, la realidad indica que al abatimiento de la pobreza le siguió el crecimiento de la desigualdad. En América Latina los gobiernos del nombrado ciclo progresista de la primera década del siglo XXI consiguieron una modesta igualación social, sin traducirlo en un esfuerzo continuado o porque lo truncara el retorno de las derechas al poder. Y más recientemente, la pandemia de Covid-19 castigó mayormente a las economías europeas y latinoamericanas, ensanchando la brecha de la desigualdad. Entre 2019 y 2021 las fortunas de los magnates mexicanos crecieron un tercio, con lo que de cada 100 pesos de riqueza producida, 21 fueron al bolsillo del 1% más rico de la población, en tanto que sólo 40 centavos llegaron al 50% más pobre.[1]

[1] Göran Therborn, "Sueños y pesadillas de las clases medias en el mundo", *New Left Review* [edición castellana], núm. 124, septiembre-octubre de

López Obrador declaró la guerra a la clase media. Ni duda cabe que un segmento de ésta ni votó ni lo hará nunca por la coalición obradorista, aunque sea tan conservadora y cristiana como el presidente, pero quienes sí lo hicieron en 2018 recibieron puntualmente su escarnio matutino tras las elecciones intermedias. Aparte de la austeridad evangélica transformada en política de Estado (la neoliberal cuando menos era secular), reñida con la apetencia clasemediera por los bienes y la simpatía por el "modo de vida americano" de quienes nunca estuvieron con López Obrador, a éste también le perturban las aspiraciones "egoístas" de los que alguna vez lo acompañaron en las urnas. Sin embargo, hacia ellos la condena no es únicamente moral. Al presidente lo desconcierta particularmente la pluralidad que observa en este segmento de la clase media y la índole de sus demandas (libertad sexual, reivindicaciones de género, financiamiento a las ciencias y las artes, estudios de posgrado), que no son reductibles a la uniformidad social e ideológica que busca y considera el bálsamo para una nación injusta, desigual y diversa. Ya no digamos los pobres, incluso el pueblo obradorista en su acepción extensa, es homogéneo de acuerdo con la mirada presidencial. En vista de esto, las reivindicaciones del flanco progresista de las clases medias, de atenderse, no harían más que desorganizar a la sociedad austera y feliz que habita en su fantasía, en la cual se aman los unos a los otros y los abuelos leen en voz alta la *Guía ética para la transformación de México*, a fin de que la familia tenga felices sueños y amanezca como un todo y en sus partes dispuesta a hacer el bien.

2020, pp. 74, 90, 94; Göran Therborn, "Desigualdad y paisajes políticos mundiales", *New Left Review* [edición castellana], núm. 129, julio-agosto de 2021, pp. 27, 29; "¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos de las grandes fortunas en México" (México, OXFAM, 2023), p. 1.

La 4T no planteó la redistribución de la riqueza con base en reordenar la relación del capital con el trabajo o en expropiar al capital privado, ni tampoco por medio de una reforma fiscal progresiva que gravara a los deciles más altos de la población para devolver los recursos captados al resto de la sociedad a través del gasto público (transferencias directas, subsidios, becas), o emplearlos en beneficio del interés colectivo (seguridad, educación, servicios). Salvo las empresas morosas con el fisco, a los grandes capitales (incluida la economía criminal) prácticamente no los tocó la administración federal. Tan es así que los causantes con ingresos superiores a los 500 millones de pesos anuales aportaron al fisco en 2022 un irrisorio 0.03% de la recaudación total.[2] Con tales restricciones presupuestales, el único reparto factible es el del gasto gubernamental. Y es allí en donde colisionaron intereses y demandas de los grupos sociales menos favorecidos con los de las clases medias ilustradas, disputa arbitrada por el presidente, quien considera que el dinero público es del pueblo, es decir, los pobres, con base en su decálogo cívico-moral.

López Obrador asumió que la abultada votación de 2018 le otorgaba un poder absoluto, sin considerar siquiera las demandas de un electorado considerablemente más diverso que el antagonismo social que concibe. No toda la población demanda asignaciones monetarias directas, y ello no significa que sus reivindicaciones particulares sean ilegítimas y no merezcan atención. Ningún proyecto de la izquierda socialista supuso que la igualdad se redujera al acceso común a lo indispensable o que la pobreza purificara el alma. Antes bien, aquella izquierda aspiraba a compartir la abundancia en una sociedad libre, diversa e informada, evitando que las diferencias sociales

[2] "¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos de las grandes fortunas en México" (México, OXFAM, 2023), p. 6.

hicieran que los satisfactores de la vida, así como los goces del cuerpo y el espíritu, no estuvieran a disposición de todos.

La ladera progresista de la sociedad no tiene acomodo dentro del esquema presidencial, que sintetiza la visión y los valores del mexicano común, incluidos prejuicios y fantasías. De hecho, una de las razones de su elevada popularidad es que articula la preocupación por la desigualdad social con el conservadurismo acendrado de la sociedad mexicana, reacio a la despenalización del aborto y del consumo de drogas, que tiene por instituciones más confiables al Ejército, la Iglesia y la familia y se informa en la radio y la televisión. El presidente dio la espalda a ese segmento de la clase media que sufragó por él y le recrimina hoy día que no comparta su concepción redentorista acerca de lo público. Ese segmento social que desdeña es de donde salen los intelectuales (en el sentido amplio del término), los cuales se ocupan de la dirección de la sociedad en sus múltiples niveles. Conservar este aliado es fundamental, pero no basta con ofrecerle la salvación.

No hay presidente que salga indemne de la acción colectiva. Por sólo mencionar las referencias que la administración obradorista considera fundamentales: a Miguel de la Madrid le tocó el Movimiento Urbano Popular y el Consejo Estudiantil Universitario, a Carlos Salinas de Gortari la rebelión indígena en Chiapas, a Ernesto Zedillo la huelga estudiantil de 1999, a Vicente Fox Atenco y Oaxaca, a Felipe Calderón los electricistas y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a Enrique Peña Nieto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y Ayotzinapa. Ninguno de estos presidentes provenía de la izquierda ni tampoco se habían fogueado en la lucha social: López Obrador sí. A los neoliberales, se entiende, era lógico que se les rebelaran los débiles y sometidos, pues éstos eran las víctimas del "sistema"; que le

suceda al presidente morenista parece un contrasentido. Y a él, incomprensible. ¿Puede haber una causa justa fuera del mapamundi de la 4T?

Si se aplacaba al magisterio con la reversión de la reforma educativa, además de pactar con la Confederación Sindical Internacional Democrática, de Napoleón Gómez Urrutia, y la Confederación Autónoma de Empleados y Trabajadores de México, de Pedro Haces Barba, era posible que López Obrador bajara el perfil a la protesta pública, y con los programas sociales tendría tranquilos a los jóvenes y sus familias. El viejo estilo corporativo funcionaba con estos núcleos rijosos que no habían dado tregua a los gobiernos de la alternancia. Quedó fuera del cálculo la emergencia de actores sociales nuevos desligados de los usos corporativos del régimen de la Revolución mexicana, diestro en contender con movimientos sectoriales con reivindicaciones puntuales susceptibles de negociarse, ya fuera beneficiando al conjunto de los demandantes u otorgando posiciones y recursos a los dirigentes a cambio de la subordinación.

Fraguada en la calle, sorprendió el desconcierto de la 4T frente a quienes salieron a tomarla. Esto ocurrió porque el movimiento encabezado por López Obrador, devenido en gobierno, se asumió cual expresión de la totalidad de lo social: no habría reivindicación de los subalternos que escapara a su oferta política. Cuando esto ocurría, en automático el presidente la situaba fuera del campo popular, negándole legitimidad y tildándola de conservadora. Para efectos prácticos, lo que estaba fuera del radar de la 4T no existía. Así ocurrió con las demandas de los pueblos originarios, la protesta por el desabasto de medicinas para los niños con cáncer, la clausura de las guarderías subrogadas, la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz de Javier Sicilia y la familia LeBarón, o las manifestaciones públicas articuladas con la consigna "El INE no se toca".

Las movilizaciones contra la violencia de género tuvieron un procesamiento distinto e incluso dramático en el mensaje presidencial, que pasó de ignorarlas a ofrecer un decálogo anacrónico, el cual únicamente mostró que el Ejecutivo no sabía qué hacer. El reclamo de derechos universales, la obligada transformación de un aparato judicial anquilosado y corrupto, inhábil para atender las demandas no consideradas en la agenda oficial, los movimientos horizontales sin liderazgos visibles, la exasperación evidenciada con una violencia más simbólica que instrumental, rebasan con mucho la capacidad gubernamental. "Luchamos contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, condición social, económica, política o cultural", reza el octavo postulado de la declaración de principios de MORENA. Ello no obstó para que la expresidenta nacional del partido minimizara los feminicidios con un "en México parecería que aumentó el número, pero no es así. Lo que pasa es que ahora hay mucho mayor apertura a dar a conocer los casos", achacando su recurrencia al neoliberalismo, como también hizo uno de los senadores, mientras una secretaria de Estado exoneró a su jefe colocándole la medalla del "presidente más feminista en la historia contemporánea".

La incapacidad del Estado para procesar las demandas de la sociedad civil autónoma, aunada a la pretensión de copar todo el espacio de lo social y a la precaria interlocución de MORENA con los nuevos movimientos sociales, bloquea la salida a los conflictos presentes. La protesta pública por el feminicidio sacó a la luz una de las violencias cardinales que cruzan a la sociedad mexicana, la vulnerabilidad de las mujeres en las esferas pública, privada e íntima, una de las inequidades mayores del mundo laboral, la complicidad del Estado con los agresores y el machismo omnipresente. También mostró tanto la obsolescencia del régimen político como la necesidad

acuciante de reformar el ente estatal. Si algo ha quedado claro con ellas es la disfuncionalidad de éste, no únicamente por la debilidad de las instancias de procuración de justicia, la impericia o la manifiesta incompetencia de muchos de sus elementos, sino porque carece del entramado institucional para hacerse cargo y de la elemental empatía con las víctimas de la violencia de género, suerte análoga a la de las víctimas de la narcoguerra, a la de los migrantes y de los movimientos populares fuera de su órbita.

Los movimientos populares independientes también perturbaron al presidente tabasqueño. Samir Flores Soberanes, un líder náhuatl de Amilcingo, luchó contra la tentativa del gobernador de Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu de construir una termoeléctrica en Huesca que se beneficiaría del deshielo del Popocatépetl, pero quitaría el agua a los agricultores en una región donde escasea el líquido. En su campaña presidencial, López Obrador prometió cancelar la obra, compromiso que no honró al tomar el cargo. El Plan Integral Morelos (PIM) —que incluye además de la termoeléctrica un gasoducto y un acueducto— cuadraba bien con el proyecto energético de la 4T, por lo que hizo a un lado a los campesinos. Una consulta sesgada disfrazó el cambio del ánimo presidencial. Ello no bastó: los afectados continuaron luchando a través del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT). Al líder indígena de 36 años de edad lo asesinaron a balazos en febrero de 2019. En enero de 2022 circuló en redes la foto del gobernador Cuauhtémoc Blanco flanqueado por tres cabecillas locales del crimen organizado, supuestamente reunidos en la iglesia de la parroquia de La Asunción (Temixco) en diciembre de 2018, donde según algunos medios periodísticos se habría acordado la ejecución de Flores Soberanes. No pasó de ser un tema de la prensa por varios días.

Además de la investigación, la docencia y la difusión de la cultura y del conocimiento, y no obstante la raquítica cobertura de la educación superior mexicana, el siglo xx consagró a la universidad como semillero de cuadros de los sectores público y privado, ámbito de reproducción y autonomía de los intelectuales y vehículo de la movilidad social ascendente. Varias de estas funciones en distinto grado perdieron relevancia en el nuevo milenio, se desplazaron hacia instancias extrauniversitarias o no fueron convenientemente recompensadas por el mercado. Hacer una carrera no garantizaría ya obtener un empleo digno dado el pobre crecimiento económico nacional de los últimos 40 años, mientras que la economía criminal concretó el anhelo de ascenso social de muchos y la creciente fractura social impregnó el espacio universitario. El rezago escolar por la pandemia, la ruptura de los lazos cohesivos durante el confinamiento, recortes presupuestales e inercias burocráticas en las instituciones contribuyeron a empeorar las cosas.

Es sentido común considerar a la universidad un termómetro sensible de lo que ocurre en la sociedad. Los movimientos estudiantiles de 1929, 1960, 1968, 1986, 1999, 2012 lo ilustran. Además de sus luchas específicas (por la autonomía, gratuidad, etcétera), todos resonaron en la esfera pública y repercutieron en la sociedad política. Protestas dispersas, constantes y prolongadas ocurrieron en las universidades mexicanas. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) paró en 2023 por la violencia de género. Asimismo, cinco facultades de la UNAM permanecieron sin labores por demandas de la misma índole, aunado a la movilización estudiantil por la cancelación de las becas Elisa Acuña que les otorgaba el gobierno federal y ahora costeará la institución. Amago de paro en la Ibero por el manejo presupuestal, el aumento de las colegiaturas, recortes al gasto en los talleres artísticos, alto costo del estacionamiento, deplorables ingresos de los profesores de asignatura, encubrimiento

de la violencia sexual, ausencia de oferta vegana en la cafetería a precios razonables, entre otras. La precariedad, o lo que se percibe como tal (disminución del poder adquisitivo), y las violencias (especialmente la sexual) son denominador común del desasosiego juvenil.

Apenas comenzaba la administración obradorista cuando un "error de dedo" borró accidentalmente la autonomía universitaria del proyecto de reforma del artículo 3º constitucional. Constantes alusiones en las conferencias matutinas a que la educación, por ser un derecho, no debe negarse a nadie en cualquiera de sus niveles, razón por la cual las universidades públicas deberán admitir a todos quienes soliciten el ingreso sin mediar el examen de admisión u otro indicador de las calificaciones indispensables para acceder a la educación superior. El proceso penal contra académicos que tuvieron funciones directivas en el extinto Foro Consultivo Científico y Tecnológico y en el CONACYT (quien lo proveyó legalmente de recursos para su funcionamiento ordinario). La diatriba presidencial contra la "derechización" de la UNAM y las universidades públicas en general que perdieron la "emoción social" de los setenta (cuando López Obrador se formó) para entregarse a los brazos del neoliberalismo, esto es, "lo más retrógrada" que había. Más inquietante que eso fue la afirmación del jefe del Ejecutivo según la cual la institución universitaria "requiere una sacudida".

No obstante que tardó 14 años en graduarse, el contacto del presidente con la universidad pública ha sido débil, y su desconocimiento, profundo. El movimiento estudiantil de 1968 no pasa de escasas alusiones retóricas, porque el priismo que nutrió la socialización política de López Obrador, además de su afección al estamento militar, tienen una relación bastante problemática con aquel gran símbolo de la izquierda histórica. La gesta del Consejo Estudiantil Universitario dice

más a algunos de sus colaboradores que al presidente, quien labraba entonces su candidatura para gobernador de Tabasco, también por el PRI. Del movimiento encabezado por el Consejo General de Huelga, que estalló cuando pugnaba López Obrador por ser jefe de Gobierno del Distrito Federal bajo las siglas perredistas, sólo recuerda la "celada" que les tendieron los "porros" que ocupaban el auditorio Che Guevara a él y al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en las respectivas campañas del 2000. Acaso las recurrentes protestas de los estudiantes rechazados acabarían por convencerlo de que el problema de la cobertura universitaria no era un asunto de recursos (económicos y académicos) sino de eliminar los requisitos de ingreso, como harían la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), fundada en 2001, y las fantasmales cien universidades de *garaje* creadas en su sexenio. El Yo Soy 132 lo tomó como candidato perredista a la presidencia y es el único que escapa a su juicio lapidario. Las feministas radicales, que tomaron varias facultades de la UNAM en 2020, seguramente no le despiertan ninguna simpatía.

Pero estas ideas y prejuicios acerca de las instituciones de educación superior no explican totalmente la actitud desdeñosa del presidente respecto de la universidad pública, como tampoco el incumplido compromiso de destinar el 1% del PIB a la ciencia y la tecnología (actualmente se gasta menos que en el "periodo neoliberal"). Es importante considerar además la satanización de las clases medias desatada por el descalabro electoral en la Ciudad de México en los comicios intermedios de 2021. Parte de esa clase media "aspiracional" e "individualista", la cual no piensa en el bien común sino en el beneficio personal, asimiló esos valores en una universidad desnaturalizada: "ya no se han formado economistas, sociólogos o abogados en la máxima casa de estudio, como los de antes". La movilidad social ascendente, uno de los objetivos

de la educación superior, quedó condenada desde el púlpito presidencial. Reverbera también en el discurso obradorista la fobia hacia las élites (su formación concierne a las universidades), privilegiadas de acuerdo con un tabulador social calibrado a la baja, la incomodidad con la pluralidad (aspira a una sociedad homogénea incluso en los valores y expectativas), la intolerancia a la crítica (quiere escribir a dos manos su biografía política) y la aversión a la autonomía (que desorganiza su idílica república plebeya).

6

Mito e historia

Aparentemente inocua, la historia es uno de los campos de la actividad humana más tocados por la política, desmintiendo en los hechos que la historia es un puro asunto del pasado. La apelación al héroe favorito es una de sus manifestaciones obvias que, en un rápido y selectivo recorrido por los años recientes, pasa por el presidente que se sentía Quetzalcóatl (aunque afortunadamente nadie esperara su regreso), continúa con quien equiparó su gesta con la de Madero (como si hubiese acabado con una dictadura no obstante que llegó al poder por la vía electoral), llegando hasta el presidente que se asumió la reencarnación de Juárez (con todo y carruaje) y maltratado por los "conservadores" tanto como Madero. En contrario, el antihéroe sirve para denostar al adversario, lo que permitiría también confeccionar una copiosa lista de los indeseables, expulsados del panteón patrio generalmente como consecuencia del derrocamiento a manos de movimientos y ejércitos populares (Iturbide, Santa Anna, Porfirio Díaz).

En un plano menos trivial, la política interviene la historia a través de la selección y el acceso a los documentos resguardados en archivos y hemerotecas, los libros que recrean los acontecimientos históricos, las conmemoraciones, los monumentos, la enseñanza escolar, el civismo y, sobre todo, por la omisión deliberada, lo que se trata de borrar de la memoria

colectiva. Los ejemplos abundan: en el siglo XIX, las versiones liberal y conservadora de la historia patria, cada una con su propia genealogía de la nación; en el XX, el ocultamiento de los testimonios acerca del movimiento estudiantil de 1968. Todo ello configura una ingeniería de la memoria.

Los caminos de la historia y la política se entrecruzan también en la apropiación que los distintos partidos hacen del pasado, de manera tal que su razón de ser está no sólo en las expectativas sino en lo que quieren conservar, proyectar, cambiar, o de plano olvidar, de aquél. Cuando México negociaba el tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, el Museo Metropolitano de Nueva York presentó la exposición *México: esplendores de treinta siglo*s, generosamente auspiciada por el gobierno salinista y con el aval y asesoría de los jerarcas de la cultura nacional. El discurso museográfico pretendía deshacerse del obsoleto nacionalismo revolucionario de viejo cuño y mostrar un país con una rica cultura ancestral que no le había impedido abrirse al mundo a lo largo y ancho de su historia. La reivindicación de la Colonia y del arte virreinal marcó la pauta del nuevo rumbo de la narrativa oficial al mostrar una nación multicultural y cosmopolita desde antes de su conformación como Estado independiente. Como escribió un teórico cultural, si nos atenemos al relato curatorial de la exposición, "no hubo Colonia (sino Virreinato) ni opresores internos o externos de importancia, y los periodos de opresión política (como la dictadura de Díaz) fueron, sobre todo, momentos de feliz fecundidad artística".[1]

La Revolución mexicana es también bastante ilustrativa al respecto. Desde la perspectiva del PAN, cuyo origen está en la reacción liberal hacia las reformas sociales cardenistas,

[1] Rafael Lemus, *Breve historia de nuestro neoliberalismo* (México, Debate, 2021), p. 80.

es decir, en lo que para otras fuerzas políticas significa la culminación de la Revolución, la situación resultó por lo menos incómoda al verse obligado a conmemorar desde el Estado algo que como corriente política históricamente rechazó. Si nos remontamos a la adopción del olvidable "liberalismo social" como la ideología del régimen que en su momento hizo el jefe nato del partido, en otras palabras, el presidente de la República, el PRI no debería sentirse muy a gusto, pues esto lo alejó del nacionalismo revolucionario que cultivó por décadas y le otorgó legitimidad frente a la derecha panista y a la izquierda comunista, apoderándose del centro del espectro político. Y por lo menos una parte del PRD, la procedente de la tradición socialista, debió de experimentar cierta extrañeza al conmemorar una revolución a la que siempre quiso trascender y que, sin mediar explicación alguna, convirtió en su horizonte programático, reclamando el estorboso bagaje que el PRI desechó en la era de la globalización. No obstante estas diferencias nada menores, el 20 de noviembre suben todas las fuerzas políticas en el mismo vagón, tal y como el monumento de la Revolución acogió a quienes lucharon por causas distintas y fueron liquidados por los adversarios que cristianamente descansan junto a ellos, salvo Zapata, quien dignamente permanece en Cuautla.

La disputa política suele trasladarse a los símbolos, y la memoria histórica —que se balancea entre el mito y la verdad— está llena de ellos. El águila y la serpiente, el Pípila, los Niños Héroes encabezan un catálogo por demás extenso. Si esto es así, en la historia como discurso cívico, revitalizada por la administración actual, el fenómeno se potencia. Debido a ello, la visión histórica obradorista también tuvo un registro visual a manera de didáctica. Múltiples conmemoraciones históricas pusieron en escena la reafirmación de la identidad nacional en los términos de la 4T. Modificación del nombre de calles, retiro

de monumentos, efemérides apócrifas (la fundación de Tenochtitlan en 1321), la redefinición de la Independencia como "primera transformación", complementan la operación identitaria impulsada desde el poder público. Sobra decir que los Estados nacionales se dieron a esta tarea desde su fundación, no es una novedad, pero destaca esta pretensión tardía del gobierno mexicano por su magnitud, teatralidad y anacronismo.

El bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución convocaron a las conmemoraciones anodinas del calderonismo, donde lo más destacable acaso fuera la dificultad para abordar la gesta de 1910, por el desencuentro ideológico que la estirpe del "hijo desobediente" tiene con ella, a no ser por la identificación que hiciera Vicente Fox de la alternancia con el malogrado gobierno de Madero, en el entendido de que los Flores Magón, Zapata o Villa estaban impedidos por obvias razones para formar parte del panteón panista. La némesis obradorista, en cambio, saturó de significados las conmemoraciones a su cargo, elaborando una narrativa histórica que corrió desde el origen de la civilización mesoamericana hasta el presente, anunciando incluso un futuro venturoso pautado por el compromiso con los "más pobres", el amor al prójimo y la fraternidad universal. No es poca cosa.

La reproducción en cartón piedra del Templo Mayor (a doscientos metros del original) ilustró en agosto de 2021 la batalla por Tenochtitlan en la que sucumbieron los mexicas a manos de medio millar de españoles y decenas de miles de aliados mesoamericanos que los peninsulares fueron sumando en el camino, los que, a su pesar, fueron sometidos, al igual que los mexicas, por el régimen virreinal a despecho de que ellos mismos se asumieran vencedores. Con ello, y de acuerdo con el relato oficial, comenzaron los 500 años de resistencia indígena que se prolonga hasta el presente. Posteriormente, la jefa de Gobierno capitalina anunció en una decisión unilateral que

sería la efigie de Tlali quien remplazaría a Colón en la glorieta de Reforma del mismo nombre. Más adelante informó que no sería Tlali sino la Joven de Amajac quien ocupará la antigua glorieta. Las huastecas y no las olmecas ordenarían el relato patrio de la 4T. A Colón, y de paso Bartolomé de las Casas, cuya imagen está en el basamento, los reubicarían —se dijo— en un parque en Polanco, contiguo a una iglesia, para beneplácito de los fifís. Finalmente decidieron colocarlos en el Museo del Virreinato. Como el marino nunca supo a dónde llegó, supongo que le dará exactamente igual. Y a Tlali, de última hora, la colocaron en una pequeña plaza al lado de la glorieta para evitar la confrontación con el Frente Amplio de las Mujeres que Luchan (FAML), que convirtió aquélla en un memorial. Estas acciones anclarían el nuevo relato histórico oficial.

Todo comenzó cuando un "colectivo" fantasmal convocó a atacar el monumento de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 2020, acaso acicateado por una práctica extendida este año en múltiples países contra los símbolos de opresión (el derribo de las estatuas de los Confederados en los Estados Unidos). Claudia Sheinbaum sorpresivamente bajó de su pedestal a la imagen colombina elaborada por el francés Charles Cordier en 1875, aduciendo labores de mantenimiento de la glorieta, y conminó a la ciudadanía a reflexionar sobre la permanencia del monumento en una de las principales arterias capitalinas. Lo expedito de la medida y el llamado al debate histórico sonaron impostados, dado que la autoridad metropolitana incentivó una discusión hasta entonces prácticamente inexistente en la sociedad, esto es, hizo eco de un vacío. La pregunta fue por qué ahora y la respuesta no podría ser más que hipotética.

Es una constante de este gobierno la hiperpolitización de los acontecimientos y su sometimiento a la lógica binaria del discurso populista. La operación consiste en conformar un campo antagónico, manejado a voluntad por quien lo define,

es decir, el Estado las más de las veces. Los conservadores, presumo, serán quienes deseen contemplar la estatua colombina en el Paseo de la Reforma, mientras que los partidarios del "cambio verdadero" opinarán lo contrario. La jefa de Gobierno se sublevó contra "la visión que todos aprendimos del descubrimiento de América, como si América no existiera antes de la llegada de Colón". ¿En verdad es la que "todos aprendimos"? El libro de historia de Cuarto Grado, certificado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para el ciclo 2020-2021, habla de "los primeros contactos de España con América" e indica que "las expediciones de otros navegantes revelaron que Colón había llegado a otro continente y no a India". Omitió también la entonces mandataria capitalina la palabra *descubrimiento* y en ningún lugar dice que América no existiera antes de los viajes colombinos, dado que el libro de texto considera literalmente "el poblamiento de América... un largo proceso que se originó por varias migraciones, aproximadamente entre los años 40,000 y 6,000 a. C.". Ni Colón supo que había desembarcado en un nuevo continente ni los niños de primaria aprenden que el marino genovés lo haya descubierto.

Iniciativas tomadas al botepronto no contribuyen en nada al debate histórico serio y entraña riesgos considerables para la conservación de la memoria en una ciudad que se precia de inclusiva y de aceptar las inevitables diferencias. ¿Qué pasaría por ejemplo si otro "colectivo" demandara quitar el monumento a Cuauhtémoc argumentando que la Triple Alianza exigía tributo a los pueblos que sometía y sacrificaba a los guerreros que capturaba en las guerras floridas? ¿Lo consideraríamos la glorificación del despotismo y el genocidio? Los anacronismos conducen a callejones sin salida, oscurecen el debate público y conducen a un revisionismo histórico sin fundamento en el conocimiento riguroso. Las ciudades guardan un registro del tiempo, de los acontecimientos y de

su apropiación por las colectividades y el ente público, satisfaga éste o no nuestras simpatías políticas. En circunstancias críticas —que no son las actuales— estas intervenciones se imponen, por ejemplo, el derribo de la columna Vendôme en las jornadas de la Comuna de París o el de la estatua del conquistador Diego de Mazariegos en San Cristóbal de las Casas en 1992. No obstante, son excepcionales. Y los Estados procuran actuar con responsabilidad en lugar de atizar la disputa por el pasado. A pesar de que cayó el régimen soviético, o que desapareció la República Democrática Alemana, todavía hay estatuas de Lenin en las capitales rusas y en Berlín oriental subsisten la Karl Marx Allee y la Rosa Luxemburg Platz. París dedicó una calle al contrarrevolucionario Joseph de Maistre a pesar del culto nacional a Napoleón. Puede que los personajes históricos vivan en conflicto y sus fantasmas riñan por las noches, pero no es función de los vivos arbitrar sus disputas.

En las fiestas cívicas septembrinas de 2021 también se desató la otra punta de la madeja de la narrativa patria. Pasando vertiginosamente por los trescientos años de la Colonia en una escenificación alimentada por el láser y las omnipresentes fuerzas armadas (en modo mariachi la noche del 27), la insurgencia de Hidalgo (el 16 de septiembre de 1810) la culmina la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México (27 de septiembre de 1821) encabezado por Iturbide. El entendido fue que la Independencia liberó a los pueblos originarios del yugo español y los integró en la nueva nación. Aparte de que eso es inexacto si no es que falso, pues el régimen liberal los despojó de parte de sus tierras subordinándolos a un orden legal en el que perdieron derechos que les habían reconocido en la Colonia, también se reedita en el siglo xxi el relato liberal decimonónico acerca del devenir nacional. Aquella interpretación parece extraída de *Gil Gómez el Insurgente*, de Juan Díaz Covarrubias, o del *Martín Garatuza*, de Vicente Riva Palacio.

El otro anacronismo evidente es el que se refiere a la identidad nacional, bastante desgastada por la globalización, la insurgencia neozapatista y la proliferación de reivindicaciones identitarias múltiples, eventualmente articuladas con los movimientos sociales emergentes. La reconstrucción de una identidad que englobe a todas, funcional en otra época y exitosa en la práctica, se perfila como una tarea irrealizable. El himno, la bandera y la historia patria cumplieron su función y difícilmente podemos readaptarlos a las necesidades contemporáneas. Los pasamontañas, las pañoletas verdes o la pertenencia a algún colectivo dicen más a los jóvenes que la historia oficial con el tufo de civismo que todavía transpira. Admitir la convivencia en la pluralidad, en lugar de pretender borrarla o someterla a una identidad ilusoriamente originaria, valdría más la pena.

¿Por qué es tan importante la historia patria para López Obrador? El presidente considera que la historia es la maestra de la vida, y por tanto hay que aprender de ella. Las circunstancias que enfrentan los actores —supone— se recrean en contextos diferentes, de manera tal que quien conoce el pasado cuenta con una herramienta valiosa para actuar en el presente y prever el futuro. López Obrador, para efectos discursivos y porque parece creerlo, equipara la coyuntura histórica que le tocó con el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Con Juárez se asume liberal y sabe que va a ganar. En esa misma perspectiva, el presidente no piensa repetir los errores que le costaron la presidencia y la vida a Madero. Asimismo, López Obrador encuentra en la historia la confrontación entre el bien y el mal resuelta en favor del primero, en una especie de destino trazado por la Providencia. Y él se sitúa invariablemente del lado de los buenos.

Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos también reverberan en la conciencia histórica obradorista. Los momentos

nacionalistas de cada uno, en petróleo y electricidad, le impresionan y los quiere emular. Para el presidente, las empresas públicas del sector energético son la herencia que la Revolución dejó al pueblo de México y que los neoliberales le arrebataron devolviéndolas al capital privado extranjero. Su misión es restituirlas al patrimonio de la nación que identifica con el pueblo. La recuperación que hace López Obrador de ambos presidentes es selectiva y las omisiones no son irrelevantes. Cárdenas fue el gran referente de los presidentes del priato, incluso a Echeverría o a Salinas de Gortari se les comparó con él. En nombre del legado cardenista, la corriente democrática del PRI se sublevó contra la tecnocracia. Y el hijo del general se postuló tres veces a la presidencia asumiéndose continuador del cardenismo histórico. Por obvias razones, López Obrador no quiere conceder esa legitimidad a Cuauhtémoc Cárdenas.

Hay otro motivo que obstaculiza la identificación plena del presidente tabasqueño con el general michoacano: a su lado, López Obrador se siente disminuido. A diferencia de los héroes que más reivindica (Juárez y Madero), Lázaro Cárdenas representa la justicia social hecha gobierno y, como se aprecia en la iconografía del periodo, el general poseía una empatía con la gente común que comparativamente achica el carisma obradorista. Él mismo lo dijo sin ambages en la ceremonia del 18 de marzo de 2023: "así como no hay nadie con la vocación democrática de Madero, tampoco ha existido en México un presidente tan cercano a los humildes como el general Cárdenas ni tan convencido de la causa de la justicia social". Esto no obsta para que el presidente tabasqueño deslice al michoacano la crítica por inhibirse de sentar en la silla a su sucesor natural (Francisco J. Múgica) en lugar del también general Manuel Ávila Camacho, con ánimo de congraciarse con el capital y los moderados por la expropiación petrolera y la Segunda Guerra Mundial. Si López Obrador no repetiría el error de Madero de

no asegurar la lealtad de los militares, tampoco en aras de la concordia truncaría la continuidad de su proyecto como hizo Cárdenas. La historia es el oráculo que guía al presidente tabasqueño en las tinieblas del presente.

López Obrador admira a López Mateos, quien le parece prudente, administrado y patriota. La creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959 y la nacionalización de la industria eléctrica consagrada en el texto constitucional le emocionan. Incluso explota un supuesto testamento político del presidente mexiquense, quien proféticamente advirtió la insidia de los "traidores a la patria" que tratarían de revertir la nacionalización eléctrica. Cual brazo de la Providencia, López Obrador está para impedirlo. No obstante, el presidente morenista jamás refiere la represión a los ferrocarrileros y el asesinato de Rubén Jaramillo, responsabilidad de López Mateos, agravios mayores a los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX y objeto de reivindicación de la Nueva Izquierda que se expresará públicamente en el 68, movimiento problemático de suyo en la conciencia obradorista, en la que se entrecruzan su veneración por el Ejército y el humus priista donde germinó la socialización política del presidente tabasqueño. En un sentido profundo, López Obrador posee la concepción histórica del antiguo régimen que dice pretender derrumbar.

El obradorismo pretende integrar a los contrarios en un discurso histórico homogéneo y único en una alquimia de la memoria errática y plagada de contradicciones. Retiró —dijimos— a Colón del Paseo de la Reforma por la amenaza de un grupo desconocido que en las redes amagó con destruir la efigie del "conquistador". También plantó sucesivamente dos ahuehuetes en la glorieta de la Palma para atajar el intento de los familiares de los desaparecidos de la narcoguerra de rebautizarla en nombre de ellos. Y, lo más reciente, escribió los nombres

de los militares muertos en el combate a las guerrillas en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, dentro de la Plaza del Servicio a la Patria en Chapultepec, según anunció el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, ante las expresiones de repudio de los familiares de los primeros, y cobijado por el aplauso del presidente López Obrador, Rosario Piedra Ibarra y Claudia Sheinbaum.

Quedar bien con el Ejército y la izquierda socialista suena complicado si consideramos la conducta pública del Estado autoritario salido de las entrañas de la Revolución mexicana. Las fuerzas armadas reprimieron a los movimientos sociales de los cincuenta (mineros, maestros, ferrocarrileros y ejidatarios), a los universitarios en los sesenta y a las guerrillas y luchadores sociales durante la guerra sucia e incluso después, acontecimientos todos en los que aquella izquierda confrontó a los gobiernos priistas, purgando en prisión, con la desaparición forzada, el exilio o la muerte la osadía de rebelarse contra el *statu quo*. En la alternancia, todos los colores celebraron como propia la democratización del régimen político que mucho debió a estos movimientos y a esa izquierda.

El obradorismo se asume heredero de aquellas luchas e izquierdas y dispensa honores por igual a los tirios y troyanos del régimen autoritario. Empero esta confusión del agua con el aceite es incompresible si obviamos los referentes ideológicos del obradorismo y su aquiescencia hacia el instituto armado. Por una parte, aquél considera a la 4T un episodio del relato patrio, que va de la Independencia hasta hoy, con dos rupturas o "desviaciones" (el porfiriato y la era neoliberal o "neoporfirista"), en la que los movimientos populares reivindicados por la izquierda socialista (la huelga ferrocarrilera, el jaramillismo o el 68) son marginales. Por otra, el obradorismo considera al Ejército "pueblo uniformado", es decir, el mismo agregado social en nombre del cual gobierna. Aparte de todas

las funciones fuera de su competencia asignadas en este sexenio y el crecido presupuesto de las fuerzas armadas, mientras se predica para otras dependencias la "pobreza franciscana", la administración federal confió a los militares el cometido de resguardar los bienes del "pueblo" (llamados antes simplemente "nacionales") de la codicia de una minoría privilegiada y corrupta ávida de privatizarlos.

El pueblo protegiendo al pueblo en un cuento feliz en el que el Ejército fue relevado de la obligación de responder por los crímenes de Estado cometidos "en cumplimiento del deber" y contra el pueblo rebelde. Y sorprender a los familiares de los más de 500 desaparecidos (documentados) de la guerra sucia, a los habitantes de pueblos devastados como Atoyac, víctimas de la estrategia de la "tierra arrasada" de las fuerzas armadas, a los deudos de los jóvenes y campesinos arrojados al mar en los vuelos de la muerte inaugurados en América Latina por los militares mexicanos, o de quienes sufrieron tortura y ejecuciones extrajudiciales en el Campo Militar Número 1, y a las mujeres violadas por soldados o miembros de la Brigada Blanca con la noticia de que los nombres de los "soldados de la patria caídos en el cumplimiento de su deber" se inscribirán en un monumento es sencillamente deplorable, lo que no obsta para condenar que en los ataques armados de las guerrillas murieran emboscados soldados inocentes.

Lo que se presenta como una decisión salomónica, honrando a los militares como héroes y reconociendo a los civiles como víctimas (¿de quién?), da cuenta de las fisuras y contradicciones de la coalición de fuerzas representadas por el obradorismo y su solución aparente en el discurso público. Ni el pueblo uniformado y el pueblo son lo mismo, porque el Estado y la sociedad son entes distintos, y tampoco el pueblo es uno, menos todavía un monolito. Tampoco el devenir patrio y el de la izquierda socialista vivieron armónicamente en el

siglo xx, más bien coexistieron en tensión porque esa izquierda buscaba cambiar radicalmente al país. Por eso la tentativa de empatarlos es espuria, tanto como la pretensión estatal de reconciliar simbólicamente a los muertos y prácticamente exonerar al Ejército antes de haber impartido justicia.

7

Ni "verdad histórica", ni verdad sin más

La administración obradorista se dijo dispuesta a aclarar los crímenes de la guerra sucia y coadyuvar a la búsqueda de los desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico. No obstante, la astringencia presupuestal redujo al mínimo el compromiso gubernamental. La prioridad fue aclarar qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la Noche de Iguala. En el afán de demoler la "verdad histórica" del peñismo, el gobierno obradorista reactivó la pesquisa logrando escasos resultados factuales sin construir una narrativa sustancialmente distinta de la hilada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, en la actualidad en prisión. Por desgracia, "la verdad histórica" enterró la verdad a secas, por lo que será arduo en el futuro ofrecer una explicación satisfactoria, sustentada en datos ciertos y verificables, más allá de las consabidas teorías conspirativas en las que invariablemente hay una voluntad única, monolítica e infalible detrás de los hechos. Una investigación deficiente de suyo llevada a cabo por un Estado autoritario desacostumbrado a convencer a la opinión pública, la manipulación de las pruebas, el encubrimiento por parte de la autoridad de los posibles responsables, el contexto de la guerra interna irregular —en la que participan el Estado, el crimen y la guerrilla—, donde cada bando posee canales propagandísticos de sus propias

verdades, y la creciente imbricación del submundo criminal con la clase política y los aparatos de seguridad pública, complican terriblemente descifrar Iguala.

La Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación poco rigurosa y opaca dirigida más a encubrir las complicidades oficiales que a esclarecer los hechos. La inacción de Enrique Peña Nieto durante los primeros 10 días dejó en manos de la procuraduría guerrerense el resguardo de la "escena del crimen", cuando sabemos que las primeras 48 horas son cruciales para el acopio de pruebas en cualquier diligencia criminal. Después, la urgencia de Murillo Karam por cerrar el caso sin explorar hipótesis alternas o agotar la revisión de la evidencia disponible. Los vínculos entre María de los Ángeles Pineda y el gobernador Ángel Aguirre Rivero no se indagaron, ni los del coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería (Iguala), con el alcalde José Luis Abarca. Se dejó de lado también la posible infiltración del grupo criminal de los Rojos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tampoco se revisaron las omisiones o complicidades abiertas de los mandos de la Policía Federal y del Ejército, informados en tiempo real de los sucesos de Iguala, con los Guerreros Unidos.

El proceso penal se concentró exclusivamente en los miembros del grupo criminal y en las policías locales, dando lugar a expedientes deficientemente armados y declaraciones obtenidas bajo tortura en 34 casos comprobados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Para agosto de 2022, 26 personas vinculadas con el caso habían fallecido, fuera por asesinato, accidente o muerte natural. Entretanto, murieron por Covid-19 Mario Casarrubias Salgado (líder de los Guerreros Unidos) y José Luis Hernández Rivera (director de la Normal Rural Isidro Burgos en 2014). Y en septiembre de aquel año un juez federal, residente en Tamaulipas, exoneró a José

Luis Abarca, exalcalde de Iguala, del secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa porque la FGR presentó pruebas insuficientes para acreditar el ilícito o éstas fueron desechadas por el juzgador por haber sido obtenidas mediante tortura. Un juez federal absolvió a 120 implicados en aquel crimen. Por uno u otro motivo, testimonios fundamentales se perdieron.

Múltiples versiones se acumularon acerca del móvil del ataque policial contra los estudiantes de Ayotzinapa y con respecto de su ulterior destino. Éstas oscilaron desde la "confusión" de los estudiantes con una banda delictiva contraria a los Guerreros Unidos, es decir, los Rojos, hasta un misterioso quinto autobús cargado de heroína con destino a Chicago. En cuanto a qué se hizo con los 43 jóvenes, las hipótesis fueron desde su incineración por parte de los Guerreros Unidos, hasta que remitieron a 20 de los estudiantes a un subgrupo de la banda del *Tequilero*, los llamados *Matanormalistas*, quienes los habrían ejecutado en el poblado de La Gavia, en Tierra Caliente guerrerense. Otra más señala que la policía municipal de Huitzuco participó en el ataque fuera del Palacio de Justicia y, apoyada por policías federales que controlaron los accesos y las salidas de Iguala, capturó entre 12 y 15 estudiantes subiéndolos en "cuatro patrullas [que] salieron rumbo a Chilpancingo y el paradero de los jóvenes se desconoce". En 2019 la FGR removió escombros en el basurero de Tepecoacuilco (contiguo a Iguala) presumiblemente buscando los restos de los normalistas.

Si únicamente cotejáramos la "verdad histórica" con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el núcleo de las diferencias reside en la responsabilidad estatal y en la ponderación de la penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad, esto es, si el problema es básicamente local —la infiltración criminal en las policías y ayuntamientos de Iguala y Cocula—, y de allí se desliza

hacia tratarlo como un caso aislado, o si ya estamos hablando de una relación más profunda entre el Estado y la economía criminal, al grado de llamarlo "crimen de Estado". A la luz de la evidencia disponible, hay que decir, ni una ni otra versión es satisfactoria. La de la PGR, porque se basó fundamentalmente en las declaraciones de los inculpados, por la eventual siembra de pruebas, porque hay indicios de que la Policía Federal facilitó la emboscada criminal e hizo un perímetro hasta Mezcala y los militares fueron testigos mudos de la masacre, careciendo además de evidencia suficiente para demostrar que los restos de los jóvenes supuestamente calcinados en el basurero de Cocula fueron arrojados en el río San Juan.

Por su parte, la investigación del GIEI no ofreció una explicación convincente de por qué no fueron atacados con armas de fuego y sobrevivieron el total de los normalistas del "autobús equivocado" —presuntamente el que estaba cargado de heroína—, mas no los de los demás camiones; de la conexión terrestre entre Iguala y Chicago para el trasiego de la droga —¿Cómo harían los autobuses Estrella Roja para recorrer miles de kilómetros y burlar los controles estadounidenses, o cómo dejarían "la carga" en la frontera?—, y por negar la posibilidad de que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula con base en el peritaje de un solo experto (en incendios de edificios, no en cremación de cuerpos), sin siquiera examinar rigurosamente el protocolo científico de las conclusiones en contrario de los demás especialistas que participaron en la investigación. El implícito del GIEI sería que los normalistas fueron cremados en hornos ex profeso sólo existentes en las instalaciones militares, pero, al igual que la cremación en el basurero de Cocula, habría que demostrar, de ser el caso, que los estudiantes fueron incinerados allí.

Cada vez será más difícil llegar a la verdad de la Noche de Iguala, tanto por los vicios de origen del caso como por los

intereses políticos en juego y el estado de guerra en que vive el país, contexto ineludible de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un problema mayor será satisfacer a los familiares de las víctimas y a la opinión pública, bastante escépticos de cualquier acción gubernamental: si no aparecen los cuerpos de los jóvenes jamás quedarán satisfechos (baste ver la reacción de los padres cuando se identificaron en Innsbruck, con alto grado de probabilidad, los restos de dos de los estudiantes remitidos por la procuraduría peñista).

El gobierno de López Obrador trajo de nueva cuenta a varios de los miembros del GIEI que condujeron la pesquisa en 2015 e incorporó a la fiscalía respectiva a quien los asistió, pensando que con ello podrá retomarse la madeja del caso. El presidente también ofreció el testimonio de los militares del 27 Batallón de Iguala, mientras que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración informó que reabrirá varias de las líneas de investigación canceladas en el gobierno de Peña Nieto, en particular las esbozadas por el GIEI, mas no la eventual presencia de los Rojos en la Escuela. Sin embargo, el Ejército mostró muy escasa disposición para permitir que los militares señalados, por acción u omisión, como posibles partícipes en la emboscada a los estudiantes fueran entrevistados por la autoridad competente, a no ser los mandos menores, incapaces por sí mismos de coordinar acciones de esta envergadura.

Cada día que pasa obra en contra de los buenos deseos presidenciales y de la demanda de verdad por parte de las familias de las víctimas y de la sociedad. Se excarceló a más de la mitad de los presuntos responsables de los 142 vinculados a proceso, entre ellos Gildardo López Astudillo (el *cabo Gil*), jefe regional de los Guerreros Unidos, y los policías municipales inculpados: el primero (*Juan*) funge actualmente como "testigo colaborador" de la Fiscalía y todos ellos demandan

indemnización por haber sido víctimas de tortura. Con ello, el sustento factual del proceso penal se diluye todavía más. En ese contexto, el compromiso del fiscal General de la República con los padres de los 43 de "iniciar desde cero la investigación" lució impracticable.

La investigación quedó a cargo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) constituida el 3 de diciembre de 2018. De acuerdo con el informe que presentó en agosto de 2022, la COVAJ inició su trabajo no "desde cero", sino "retomando las investigaciones y estudios realizados" por el GIEI, la CNDH, diversas agencias de la ONU, la CIDH, "la revisión de numerosos libros y publicaciones sobre el caso, y la llamada verdad histórica". Todo ello para cumplimentar el mandato presidencial de ofrecer "el debido esclarecimiento de los hechos; conocer la verdad de lo sucedido y el paradero de los estudiantes, y encontrar y procesar a los responsables". No cabía especular, antes bien el objetivo último era "revelar las circunstancias y motivos a través de la verdad fáctica y científica sobre estos atroces crímenes".

La nueva reconstrucción de los hechos difiere parcialmente de la llamada "verdad histórica", pero no al grado de ofrecer un relato alternativo y menos aún empíricamente verificable. Sólo han sido identificados los restos de tres estudiantes, dos de los cuales lo hizo la desaparecida PGR, y los del tercero los localizó la administración anterior, aunque sin acreditar a quién pertenecían. El inaprensible quinto autobús, presuntamente cargado con "droga y/o dinero perteneciente a Guerreros Unidos" —causa eficiente del desencadenamiento de la violencia de acuerdo con el GIEI—, no pasa de ser una hipótesis todavía indemostrable y una de las tres que considera el *Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa* (agosto de 2022). Las otras dos hipótesis esbozadas por la COVAJ son que "se haya identificado

a alguien con posibles vínculos con un grupo contrario" (posiblemente el estudiante apodado el *Cochiloco* con los Rojos) o que "el paso de los estudiantes que venían como apoyo desde la Normal de Ayotzinapa... les haya hecho pensar que se trataba de grupos opuestos que trataban de tomar la plaza" (los Rojos, otra vez). La hipótesis de la "confusión" es la que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam en su informe de enero de 2015 conocido como "la verdad histórica". Ni en una ni en otra versión de los acontecimientos se considera indagar el sustento de la "preocupación" del grupo criminal y por tanto extender la investigación a la Normal Rural Isidro Burgos.

Si las hipótesis de la COVAJ suman las del informe de 2015 con la del GIEI, la reconstrucción de la Noche de Iguala es muy parecida en los informes de 2015 y 2022, aunque distanciándose en el desenlace final, no obstante que en ambos se asume que los Guerreros Unidos fueron quienes ordenaron la masacre de los estudiantes. De acuerdo con la COVAJ, "en su declaración el testigo protegido *Juan* —excarcelado del penal del Altiplano en septiembre de 2019— hace mención de que la noche de los hechos Jesús N(a), el *Güero Mugres* dio la orden de matar a los que entraron en Iguala en camionetas, pues el *Tilo* dijo que las personas que habían llegado eran contras y se habían revuelto con los estudiantes". López Astudillo era el jefe de plaza de los Guerreros Unidos, a quien en la "verdad histórica" se le atribuía haber dado la orden de ejecutar a los jóvenes.

Uno y otro informe resaltan la participación de las policías locales en la persecución de los estudiantes (las de Iguala, Cocula y Huitzuco), el conocimiento del Ejército de lo que estaba sucediendo en Iguala y la intervención de la Policía Federal en la logística, con la diferencia significativa de que lo considerado en 2015 como "labores de inteligencia", en 2022 se caracterizó como "una evidente colusión de agentes del Estado mexicano con el grupo delictivo de los Guerreros Unidos

que toleraron, permitieron y participaron en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes".

El informe de la COVAJ niega categóricamente que exista "evidencia técnica, basada en la información disponible, que respalde que los estudiantes estuvieran juntos en algún momento", pero indica que "decidieron repartírselos", y cuando describe cómo fueron ejecutados, invariablemente refiere a grupos. El informe de 2015 había señalado que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y arrojadas las cenizas en el río San Juan. Posteriormente, el exprocurador Murillo Karam admitiría la posibilidad de que quizá fuera un grupo de alrededor de la mitad de los estudiantes el llevado al basurero por los sicarios de los Guerreros Unidos. De acuerdo con el informe de la COVAJ, "las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos por lo que el *Chuky* les metió machete y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera". Para mayor seguridad, los restos de los estudiantes "los iban a estar moviendo [de lugar] si era necesario". Un posible destino, sugiere, fueron las instalaciones del Batallón 27.

Indemostrable como la hipótesis de la cremación, la nueva versión ofrece múltiples destinos de las víctimas, no dando lugar tampoco a la posibilidad de encontrar los restos de los estudiantes. "El *Chino* arrojó sus paquetes al río Balsas. La *Gorda* los llevó al pozo de Pueblo Viejo con el apoyo de la *Cuca* y el *Feo*. Al *Moreno* se le pidió que cocinara a diez estudiantes, pero a falta de material sólo cocinó a cinco estudiantes. El resto se los mandó al *Chuky*. Sin que se ubique quién realizó el traslado, otros estudiantes fueron desplazados a la Casa de Huitzuco. El *Chino* comenta que hasta en la mina de los patrones aventaron gente".

Por su implicación, en este caso del Ejército, es importante señalar que el informe de la COVAJ asienta que "el día de

los hechos, seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en la Bodega Vieja" situada en Pueblo Viejo, municipio de Iguala. "El 30 de septiembre el *Coronel* —presuntamente el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala— comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que quedaban vivos". Estaba documentada la cercanía de Rodríguez Pérez con el matrimonio Abarca, pero, de acuerdo con una filtración a la prensa atribuida al entonces secretario técnico de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), la colusión para desaparecer a los estudiantes fue abierta dado el vínculo de algunos mandos del Ejército con los Guerreros Unidos.

El informe de la COVAJ contiene un segundo registro, yuxtapuesto al mandato expreso de "conocer la verdad de lo sucedido y el paradero de los estudiantes", éste es "romper el pacto de silencio entre los perpetradores de la violencia y desaparición de los estudiantes para obtener información que permita conocer la verdad de los hechos". De aquí emerge la hipótesis de la conspiración. Si los hechos no se conocieron en su momento, se ocultaron las evidencias y se trucó la escena del crimen fue por causa de una acción concertada entre "agentes del Estado" para solapar a los verdaderos responsables, sin indicarse en alguna de las partes legibles del documento (hay muchos párrafos testados) cuál era el propósito de ese encubrimiento, por qué "el intento del gobierno de ocultar la verdad sobre estos hechos", por qué fabricar la "verdad histórica" resultante "de una acción concertada del aparato organizado del poder". "Tomás Zerón de Lucio —exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR— era el que andaba mandando limpiar todo el caso de los chicharrones [los estudiantes presuntamente ultimados]". De allí se concluye que se trató de un "crimen de Estado", liberándose 83 órdenes de aprensión

contra los posibles responsables, de las cuales la propia FGR se desistió de 21 ante el juez. Éstas concernían a 16 militares, entre ellos el excomandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, así como al exprocurador general de Guerrero Iñaki Blanco. Cinco fueron inmediatamente cumplimentadas, la del exprocurador federal Jesús Murillo Karam, la del general José Rodríguez Pérez (el *Coronel* citado en los testimonios), y tres militares de menor rango, aunque cabe decir que a Rodríguez Pérez se le procesa por delincuencia organizada y no por desaparición forzada. Posteriormente se consignó a 9 policías (7 estatales y 2 municipales) como presuntos participantes en el ominoso delito y al extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por desaparición forzada, tortura y colusión de servidores públicos. Frente al naufragio de la investigación, en junio de 2023 la autoridad federal volvió a solicitar la orden de aprehensión contra los 16 militares referidos bajo el cargo de desaparición forzada de los normalistas, deteniéndose a 10, entre ellos el general Hernández Nieto.

Estas hipótesis tienen un exiguo y deficiente soporte fáctico: criminales como testigos colaboradores y capturas de pantalla procesadas sin el menor rigor técnico. Poco en verdad se ha avanzado con respecto a saber qué pasó con los estudiantes y menos todavía en localizar sus restos, pues en el mismo sentido que el informe de 2015, el de la COVAJ indica "que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos". Las consecuencias de esta afirmación son sumamente relevantes. En primer lugar, parece difícil que los padres de los jóvenes acepten que no podrán culminar el duelo por sus hijos

porque no hay restos que honrar (mismo problema de la "verdad histórica"). En segundo término, porque la desaparición forzada —como se le reclasificó— es un delito de lesa humanidad imprescriptible, por tanto, el Estado mexicano deberá continuar buscando a los estudiantes por tiempo indefinido, a falta de un cierre como fue el de aquella "verdad". Y, por último, hay un deslizamiento de la atención pública y de la acción de la justicia hacia el proceso contra los posibles responsables del encubrimiento en demérito de "la verdad fáctica y científica sobre estos atroces crímenes".

En septiembre de 2023 la COVAJ presentó un segundo informe con poco de nuevo, más allá de asegurar que "a los estudiantes se les separó al menos en tres grupos". No obstante, las hipótesis sobre el móvil eran las de antaño (la confusión, el escarmiento a los estudiantes y el trasiego de droga en los autobuses), las dos primeras de la PGR y la última del GIEI. A las pocas semanas, el subsecretario Encinas renunció a su cargo para sumarse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. El patético final de la verdad alternativa del obradorismo.

Años han pasado de la Noche de Iguala y la "cuna de la bandera nacional" sigue igual o peor. Los otrora poderosos Guerreros Unidos se fragmentaron en múltiples células criminales que se disputan las rentas de la región y el tráfico de la goma de opio que baja de la sierra. En su confrontación, la Bandera, los Tlacos y los Tilos hicieron repuntar la violencia en Iguala. Existe la sospecha por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal de que estas células se consolidaron y expandieron con la liberación de líderes, sicarios y policías municipales presos por el caso Ayotzinapa y excarcelados al comprobarse que fueron torturados. Se trata, de acuerdo con aquélla, "de algunas personas que recientemente salieron de prisión y que tratan de recuperar los espacios que antes controlaban".

8

¿Una nueva hegemonía?

Con cinco años de la administración de Andrés Manuel López Obrador y a unos meses de la próxima elección presidencial es oportuno reflexionar acerca de la naturaleza y particularidades de este gobierno, así como de las posibilidades de que la 4T devenga en un nuevo régimen político, más allá de su postulación discursiva como un capítulo nuevo de la historia nacional articulado con la Independencia, la Reforma y la Revolución, episodios que, además, dieron lugar a sendos textos constitucionales. La pregunta entonces es sobre la hegemonía, concierne a cómo se ejerce el poder, las bases que lo sustentan y las limitaciones impuestas por los contextos internacional e interno y, de manera más general, las condiciones para instaurarla.

La hegemonía implica consenso y mando, congregar a distintos contingentes sociales alrededor de determinadas políticas, valores o ideologías, en tanto que el mando supone la capacidad coercitiva para hacer que el todo social siga la conducción hegemónica. Esta suma de consenso y coerción se sintetiza en el obradorismo con el concepto de pueblo, entendido éste como pueblo concreto (clases populares, pueblo llano) y no como cuerpo político (unitario y representable). El pueblo obradorista se desdobla en el de los ciudadanos en nombre y a favor de los cuales se gobierna (incluido el que cedió ante el

crimen y que será necesario redimir y recuperar), y en las fuerzas militares (el pueblo uniformado), salvaguardas de la soberanía nacional y garantes de la 4T. Un mismo sujeto comprometido en funciones diferentes, pero idéntico entre sus partes.

La contundente victoria obradorista en 2018, la elevada aceptación presidencial y la sólida base social hablan de un consenso amplio entre las clases populares que, aunado a su discurso binario (el pueblo y el no pueblo) y a la mengua del apoyo por parte de algunos sectores (las clases medias urbanas, los jóvenes), muestra también los puntos ciegos de esta hegemonía. Con respecto a las clases populares López Obrador busca tener una conexión directa e inmediata, sin mediaciones institucionales (el "hombre pueblo" que se funde con el pueblo concreto). La justificación de ello es evitar cualquier distorsión de la voluntad general y, cuando hay recursos pecuniarios en juego, para impedir la corrupción. En relación con el no pueblo ("la mafia del poder", las clases medias "aspiracionistas", los "conservadores"), la actitud del Ejecutivo es ambivalente: la satanización discursiva y la oportunidad de hacer negocios para el gran capital siempre y cuando se someta al mando presidencial.

Consecuencia de esta concepción y práctica políticas es la amenaza permanente a la pluralidad y un acicate a la intolerancia. Como el no pueblo no puede desaparecer por decreto, y tampoco hay una revolución social en el horizonte obradorista sino la "revolución de las conciencias", el recurso contra aquél es el asedio desde la tribuna presidencial y las redes operadas por las instancias de comunicación gubernamentales. El desplazamiento del término "mafia del poder" por el de "conservadores" en el discurso obradorista no es para nada ingenuo. Con él, la condena a las élites se extendió a todo aquel que discrepa de la línea presidencial, por lo que empresarios, adversarios políticos, feministas, periodistas, dirigentes sociales,

ecologistas, jueces y científicos entran en el mismo costal que se dilata de acuerdo con el humor del inquilino de Palacio.

La otra cara de la pluralidad que niega el obradorismo es la de los componentes de la nación, asumiendo implícitamente la mestizofilia procedente del siglo XIX y adoptada como política oficial en la posrevolución. A los pueblos originarios la actual administración únicamente los reconoce, en igual forma que los demás gobiernos de la alternancia, en su diversidad cultural. El Estado homogéneo y unitario surgido de la Independencia, que alberga una sola nación, es el que impera en el imaginario presidencial donde no tiene cabida la autonomía territorial de aquellos pueblos y menos aún el autogobierno.

Lo que se asume como una ruptura con el "periodo neoliberal" no es tal. Los fundamentos materiales del consenso obradorista se asientan en la continuidad de la élite económica conformada por la privatización de las empresas públicas en los noventa del siglo pasado (telecomunicaciones, minería, banca), en una capa de empresarios medios vinculados con el nuevo gobierno y en los numerosos beneficiarios de los programas sociales. Dentro del orden estatal, sin embargo, los cambios son notorios aduciéndose la urgencia de recuperar lo público para restituirlo al pueblo tras romper desde el Estado la colusión corrupta del poder político con el dinero. En aras de ese propósito superior se vindica la concentración del poder público en el Ejecutivo y la centralización de las decisiones gubernamentales, la subordinación de los otros poderes de la República, la desinstitucionalización de la administración pública (agravada por el derrumbe en la calidad de la gestión producto de la "austeridad republicana" y de la "pobreza franciscana" que le siguió) y el debilitamiento del poder civil dentro del Estado en favor de las fuerzas armadas. Esta erosión del ente estatal (moderno) pretende compensarse con el concurso

de las instituciones premodernas (familia, Ejército, Iglesias), si bien la relación con la Iglesia católica quedó dañada por la indiferencia presidencial ante el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara a manos del crimen organizado. Frente a este desdén, la Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a un diálogo nacional por la paz para ofrecer una respuesta colectiva viable a las autoridades a fin de atajar la violencia. Los libros de texto gratuitos, elaborados en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, abonaron al distanciamiento de la administración obradorista con la curia mexicana.

La concentración del poder por el Ejecutivo marcha a contramano del mecanismo de pesos y contrapesos de índole liberal, pero tampoco corre en el sentido de distribuir capilarmente el poder estatal en la sociedad organizada, éste de signo socialista. Inopinadamente, los vacíos de poder de un Estado disminuido los ha colmado el crimen o capturado el aparato militar. De hecho, el gobierno inhibe la movilización social, a no ser la que se da en torno del líder; en esto se distancia el obradorismo de la familia populista en su vertiente de izquierda (progresismos de acuerdo con otra taxonomía política). La sociedad civil independiente, incluso la de naturaleza plebeya, carece de lugar en el espectro obradorista, a no ser como apelación retórica en los documentos fundacionales de MORENA. En la línea del viejo régimen posrevolucionario, el obradorismo se aviene mejor con los grupos corporativos.

Diversos factores complican la consolidación de la hegemonía de la 4T. Los compromisos contraídos con el T-MEC acotan considerablemente el campo de maniobra de un gobierno deseoso de recuperar el nacionalismo económico y las políticas desarrollistas de la época dorada del régimen de la Revolución mexicana. Al respecto, los arrebatos verbales del presidente y los subterfugios para eludir el marco constitucional desnudan más la impotencia que la fuerza. La interdependencia, con el

añadido de que ocurre entre países con niveles de desarrollo tan dispares como son los de América del Norte, implica ceder parte de la soberanía nacional a cambio de algunas ventajas (el acceso al mercado), como nos recuerdan recurrentemente el desplazamiento de la Guardia Nacional a las fronteras para frenar el flujo migratorio centroamericano, la detención de algún capo o el decomiso de droga para tranquilizar al vecino del norte.

Otra porción de la soberanía está en poder de las organizaciones criminales. Refutando cotidianamente los buenos deseos presidenciales, la presencia criminal se extiende geográfica y económicamente en el espacio nacional con una dinámica imparable. El control territorial, la fiscalidad y el monopolio de la violencia (i)legítima los disputa o comparte el crimen con el Estado, dando lugar a una soberanía o gobernanza criminal en regiones enteras del país. El involucramiento cada vez mayor de los grupos criminales en los procesos electorales —coaccionando el voto, bajando o eliminando candidatos, imponiendo a los propios o a los afines— es la inquietante evidencia de la penetración del crimen en la sociedad política, amén de la progresiva captura de la esfera económico-social.

El ensanchamiento de las competencias militares, el crecimiento exponencial de su presupuesto a expensas de otros rubros sustantivos y el mandato de la seguridad pública son señales ominosas para el orden civil y la institucionalidad democrática, además acentúan el componente potencialmente coercitivo de la hegemonía obradorista. Acaso en una primera instancia la refuerce y frene a los adversarios, pero también abre el camino para que el aparato armado cobre autonomía con el incremento de su poder, pese cada vez más en las decisiones públicas o intervenga en la política.

Ahora bien, hay factores internos que complican la consolidación de una nueva hegemonía. Son evidentes de suyo la

laxitud organizativa, conflictividad, precariedad formativa de la militancia y el escaso aprecio que MORENA muestra por las normas y la convivencia democrática. Cada proceso interno provoca en el partido más rispideces que acuerdos. A diferencia de las izquierdas socialistas, que compartían valores e ideología, MORENA básicamente articula un cúmulo de intereses, pero carece de disciplina y la única directriz que sigue es la voluntad presidencial. Sin un liderazgo fuerte en Palacio Nacional, no sabemos qué otro pegamento sirva para cohesionar estos intereses.

Conexa a esto es la carencia de una intelectualidad robusta que conforme el ideario del partido y elabore un proyecto de gobierno transexenal. Hasta el momento, ésta no ha pasado de traducir en el debate público las máximas presidenciales. Seña de esta precariedad discursiva fue que las políticas desarrollistas inspiradas en el nacionalismo revolucionario no compitieron con proyectos alternativos perfilados desde una perspectiva socialista. El obradorismo tiene un pensamiento débil por donde se le mire.

Los vínculos con el pasado que el obradorismo niega o en el mejor de los casos intenta romper son evidentes. El desarrollismo de mediados del siglo xx se renueva en las obras emblemáticas de esta administración: la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec (proyecto que se remonta al porfiriato) y el Tren Maya. La élite económica formada o fortalecida con las privatizaciones salinistas sigue en pie y favorecida por los contratos de las obras de infraestructura y de la distribución de los recursos de los programas sociales. Con matices, la narcoguerra calderonista ha tenido su solución de continuidad en el obradorismo, tanto en términos de la expansión de la violencia, como en la militarización de la seguridad pública. El presidente michoacano sacó al Ejército de los cuarteles y el mandatario

tabasqueño prorrogó su presencia en las calles. La cuestionada Ley de Seguridad Interior promulgada por Peña Nieto en 2017 —severamente objetada por el entonces aspirante presidencial—, la cual dio cobijo legal al despliegue militar en el país, suena bastante tímida comparada con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa promovida por López Obrador.

El llamado régimen de la transición democrática trató de superar el modelo autoritario de la posrevolución. Fracasó por la corrupción de sus élites, la desigualdad social inherente a su política económica y la guerra interna irregular que entabló con el crimen organizado. Los saldos de las sucesivas gestiones, más algunas razones puntuales, colapsaron el sistema político y permitieron el rotundo triunfo obradorista. El endeble andamiaje de este régimen ha crujido con el presidencialismo revigorizado e incontinente del obradorismo. No obstante, la hegemonía de éste todavía no se consolida ni tampoco da lugar a un nuevo régimen político que concretaría la 4T, hasta ahora un propósito más que una realidad tangible.

La obsesión presidencial por manejar todos los hilos de la sucesión de 2024 y por derruir los frágiles pilares de Fuerza y Corazón por México, además de una pulsión autoritaria, expone la preocupación de que la construcción hegemónica no está concluida y la duda de si será posible que sobreviva sin su liderazgo. Una centralización tan vasta del poder político y del manejo de sus engranes entraña el riesgo de que el mecanismo se trabe al pasar a manos menos diestras. Asimismo, los elementos disruptivos mencionados pueden adquirir un peso mayor cuando el sexenio llegue a su fin. Metido de lleno en la sucesión, la estrategia de López Obrador para ocultar a su candidato o candidata fue "destapar" a muchos, tratando de convencer a la opinión pública de que él no sería el gran elector porque "ya no hay dedazo". Aparte de que esto es inverosímil,

la sucesión adelantada dio ventaja al obradorismo, puso en un predicamento constante al árbitro electoral y perjudicó la función pública, deficiente de suyo, al tener desde muy temprano a los aspirantes morenistas ocupados en su autopromoción.

La oportunidad de efectuar cambios constitucionales mayores suena improbable en el tramo final del sexenio, menos aún en el año electoral, y muy lejana si la coalición gobernante no obtiene la mayoría legislativa en las elecciones de julio de 2024. Así ocurrió con la fallida tentativa presidencial de reforma constitucional en materia electoral y la burda salida de modificar la ley secundaria, que obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse al respecto y consumar el revés presidencial. Eso permite pensar que el jefe del Ejecutivo aumentará la presión sobre los demás poderes de la República, los organismos autónomos y la oposición para cumplir su agenda política y asegurar la continuidad en el poder con una sucesión ventajosa. De todos modos, esto es insuficiente para cimentar la hegemonía obradorista en este sexenio. Por tanto, la tarea la continuará la próxima administración morenista si logra refrendar la victoria de 2018, como posiblemente suceda dadas las condiciones favorables al obradorismo y el desprestigio de los partidos de la transición (PAN, PRI, PRD).

Es poco creíble el retiro de López Obrador de la política o que no meta las manos en la nueva administración, sobre todo si pensamos que él palomeará a los candidatos a puestos de elección popular en 2024 y buscará, como ha dicho, la mayoría calificada en ambas cámaras obviamente con congresistas afines, además de atados a la agenda obradorista pendiente (reformas del INE, de la Suprema Corte de Justicia, integración orgánica de la Guardia Nacional al Ejército) y al programa de gobierno 2024-2030 que encargó a 21 miembros de su movimiento, más todo lo que el presidente quiera añadir en los últimos meses de su administración. López Obrador

eligió de antemano a quien le sucedería en el cargo, por lo que la eventual victoria de su candidata será, con mucho, obra presidencial. Aquí cabe la hipótesis de un maximato, esto es, una figura tutelar en la sombra (de una ceiba), con una presidenta débil que gobierne en nombre de la 4T, con todo y el "bastón de mando" con el que la ungió simbólicamente el presidente saliente.

Después de adelantar la sucesión, favoreciendo descaradamente a los aspirantes morenistas, y dentro de éstos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al secretario de Gobernación —la "hija" y el "hermano" metafóricamente hablando—, el presidente trató de ordenar un proceso de suyo caótico y ofreció cargos en el futuro gobierno a los posibles perdedores, tanto para evitar la ruptura y eventual fuga hacia otras fuerzas políticas como para blindar a su favorita. Esta desmesura rebasó las tentativas transexenales de sus predecesores (*i.e.* Salinas de Gortari), arroja severas dudas acerca del fin del "tapado", el "dedazo" y la "cargada", herencias nefastas del presidencialismo mexicano, y alimenta la sospecha de que la voluntad presidencial se impondrá a despecho de las reglas del órgano electoral. Y, como mostró la designación de la candidata de MORENA a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el partido puede ser instrumento de López Obrador para acotar a su eventual sucesora.

9

Las izquierdas no partidarias

La izquierda configurada de acuerdo con el modelo leninista, triunfante con la Revolución de Octubre, sufrió una derrota histórica tras el colapso del bloque socialista, de la cual no logró reponerse ni política ni intelectualmente, en tanto que la de perfil socialdemócrata se allanó a los designios neoliberales. De esta forma, las opciones socialistas más robustas del siglo xx se desarticularon o desdibujaron en el nuevo milenio, subsistiendo únicamente las pequeñas e imbatibles sectas comunistas.[1] El altermundismo trajo de vuelta al anarquismo y revivió experiencias societarias que parecían enterradas. En México además reverdeció laureles el nacionalismo (independiente y oficialista), mientras que la gangrena priista contagió a todo el cuerpo político, incluida la vieja izquierda socialista, que de por sí venía apagándose con las sucesivas fusiones del último decenio del siglo pasado. Las guerrillas, si bien endémicas por la permanente violencia rural, pasaron a segundo plano con la emergencia de la violencia criminal, mientras que la izquierda radical ganó presencia en los nuevos movimientos sociales. La rebeldía del siglo xxi se camufló con máscaras.

[1] Christophe Bourseiller, *Historia de la ultraizquierda*, traducción Silvia Moreno (Madrid, Errata Naturae, 2022), pp. 11-22.

Tras cuarenta años de participar regularmente en la política formal la izquierda llegó al poder a través de las urnas, no obstante que a lo largo del siglo xx a nivel local y federal la voluntad de su electorado fue reiteradamente burlada y la izquierda reprimida. Con sobrada razón sus militantes se formaron en la desconfianza respecto de los mecanismos electorales manejados por el Estado que, no obstante, le permitieron conseguir recursos públicos para desarrollarse y alcanzar una presencia nacional. Si las elecciones eran un objetivo prioritario o un recurso táctico para alcanzar otras metas fue tema de acalorados debates estratégicos, como lo fueron también la caracterización del régimen político mexicano o la índole del capitalismo nacional. Debatir, a veces en exceso o por diferencias menores, era una práctica corriente, aunque también fuente de conflictos y escisiones partidarias. En igual sentido, el verticalismo de las organizaciones y el dogmatismo ideológico propiciaron rupturas, depuraciones y purgas. Esa izquierda no existe más, si bien perduraron unos pocos de sus ideales y la mayoría de sus vicios.

El último intento de la izquierda independiente de ir sola en las elecciones fue la candidatura presidencial Heberto Castillo, a nombre del Partido Mexicano Socialista (PMS), en 1988. El alud neocardenista sepultó las aspiraciones del ingeniero jarocho que, con grandes dificultades, apenas concitó una intención de voto del 2%, menos de la mitad de lo alcanzado en 1982 por la suma de las dos candidaturas de la izquierda socialista inscritas —el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), con el 3.49% y el 1.77% de la votación, respectivamente—. La evidencia motivó a la porción mayoritaria de esta izquierda a aliarse y fusionarse hasta confundirse con el desprendimiento priista representado por la Corriente Democrática, tras el grosero fraude en la elección constitucional de 1988. Contra

un pronóstico optimista, los cuadros socialistas fueron devorados por los vástagos del partidazo con una experiencia en las ligas mayores de la política nacional de la que carecían los socialistas. Con la pérdida de la conducción del PRD, bastante centralizada en el caudillo (Cuauhtémoc Cárdenas), y el faro soviético apagado, el nacionalismo revolucionario neocardenista se impuso como directriz partidaria. En palabras del también ingeniero, el adversario era la tecnocracia neoliberal y el objetivo de la nueva formación política era recuperar "los ideales históricos de la Revolución mexicana, la vigencia plena de la Constitución y la legitimidad de nuestro gobierno y nuestros gobernantes". Varios factores minaron al mayor agrupamiento que había tenido la izquierda hasta entonces: el caudillismo, la falta de cohesión partidaria, la fuga de militantes de regreso al PRI y la represión del gobierno salinista, dada la amenaza que representaba la agrupación para el proyecto neoliberal.[2]

El nacionalismo neocardenista, con los socialistas incluidos, fue desbordado en sus extremos: a la derecha, por el neoliberalismo; a la izquierda, por el neozapatismo. De hecho, aquél iba en declive cuando la presentación pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994 sacudió el tablero político, descolocando tanto al PRD como a la administración salinista. Era la alborada del altermundismo. El nacionalismo parecía haber dado de sí. En un breve lapso temporal la izquierda histórica perdió sus asideros y la opción neozapatista mostró también en un tiempo corto que podía conseguir muy poco más que simpatía moral fuera de la Lacandona. Entretanto, la perspectiva neoliberal se veía reforzada por la alianza de facto entre el PRI y el PAN después de la elección de 1988 y el fallecimiento del aguerrido excandidato

[2] Carlos Illades, *El futuro es nuestro. Historia de la izquierda en México* (México, Océano, 2018), p. 134.

presidencial Manuel Clouthier al año siguiente. Con buenas posibilidades de ganar la elección presidencial de 1994, posiblemente por un acuerdo palaciego como acostumbraba, Diego Fernández de Cevallos bajó su perfil en la recta final de la contienda, abriendo el camino al triunfo de Ernesto Zedillo Ponce de León, el descafeinado relevo priista del difunto Luis Donaldo Colosio. Asimismo, la irrupción neozapatista cobró un costo político al PRD con un electorado amedrentado por la eventual expansión de la violencia.

Todavía al PRD le bastó para ganar la elección de 1997 a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, bastión histórico de la izquierda socialista. Ello entusiasmó a Cuauhtémoc Cárdenas para contender por tercera vez a la presidencia de la República en 2000. Un rotundo fracaso electoral, aunado a la fuga de parte de sus apoyos hacia el candidato panista (el "voto útil"), rubricó el cierre del ciclo neocardenista. La alternancia se había resuelto hacia la derecha y parecía asegurada la continuidad del proyecto neoliberal. La alternativa de izquierda, neocardenista y neozapatista, esta última perseguida por el gobierno de Zedillo Ponce de León, dejó de ser una amenaza. Sin embargo, la fanfarronería, ignorancia e incompetencia del presidente panista, conjugada con su poca disposición a desmontar el andamiaje del poder priista, ofreció una nueva oportunidad a la izquierda nacionalista vertebrada bajo el liderazgo de un nuevo caudillo. Sin pedigrí revolucionario, López Obrador contaba con el carisma y combatividad que faltaban al gris hijo del general Cárdenas. En contacto con la gente durante toda su trayectoria pública, la política a ras de piso diferenciaba al líder tabasqueño del resto de los dirigentes y posibles candidatos presidenciales de los demás partidos.

Desafiado el *statu quo* por un enemigo inesperado de la izquierda del espectro político, éste le daría un portazo como había hecho a Cuauhtémoc Cárdenas 12 años atrás. No

obstante, uno y otro renunciaron a la violencia como instrumento para llegar al poder o resarcir el agravio, si bien López Obrador fue mucho más tenaz en buscar la revancha y en avivar el resentimiento dentro de un leal contingente dispuesto a seguirlo. Tanto Cárdenas como López Obrador articularon un movimiento para dar sustento a sus aspiraciones políticas, y cada uno de éstos sumó los brotes de descontento que se multiplicaron en las administraciones de Miguel de la Madrid Hurtado (universitario, damnificados del temblor) y en los gobiernos de la alternancia democrática (contra la segunda generación de reformas estructurales), respectivamente. Además, el político tabasqueño construyó una estructura nacional para anclar sus sucesivas candidaturas presidenciales y fue particularmente sagaz al denunciar el Pacto por México, al que se había sumado el PRD, todavía su partido en 2012, con que las cúpulas de las tres principales fuerzas políticas, derecha e izquierda, lograron un consenso en torno del programa neoliberal.

El crecimiento del obradorismo como movimiento político creó un campo propicio para la convergencia con movimientos sociales carentes de referentes en el sistema de partidos. Antes de que se convirtiera en gobierno ello parecía plausible, pero nunca se concretó esa posibilidad. En el poder se manifestó tanto lo poco inclusivo que era aquél como el conservadurismo presidencial, dejando fuera de su órbita a los movimientos independientes y aliándose con organizaciones políticas retardatarias. Fuera del registro obradorista quedaron el neozapatismo, el neoanarquismo, el feminismo radical, la guerrilla rural y la izquierda social participante en la protesta pública. La izquierda ajena al sistema político y un segmento de MORENA es lo que quedará de esta corriente política en el futuro próximo, ya que el PRD se desfondó con la salida de López Obrador y perdió la brújula en la alianza con la

derecha. Y no digamos el PT, que únicamente subsiste merced de una maniobra turbia del Tribunal Electoral. La guerrilla rural menguó considerablemente en los últimos 15 años, tanto por la acción de las fuerzas armadas como porque el poder en el mundo agrario está en manos del crimen organizado, no de los caciques de antaño, además de que las rupturas internas también hicieron lo suyo. Éste es el único que puede desafiar al Estado o capturarlo, al grado de hacerlo funcional a sus intereses. Una acumulación de fuerzas que llevara a las guerrillas a construir un contrapoder y a conseguir un control territorial es sencillamente impensable en un ámbito donde imperan las armas de alto calibre, la abundancia de recursos económicos, el amedrentamiento de la población y una ilimitada oferta de brazos a disposición de la empresa criminal. La obsolescencia, que no la extinción, parece el destino de las viejas guerrillas. El monopolio de la violencia (i)legítima en el mundo rural lo posee el crimen, que también es el fiel de la balanza de la gobernanza local.

El neozapatismo está sumamente disminuido y aquejado por los conflictos internos. En 2012 rompieron el Subcomandante Marcos y el comandante Germán, este último dirigente de las extintas Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), núcleo del que surgió el EZLN. La no campaña de Marichuy fue una tentativa agónica de salir del marasmo y el ánimo de los simpatizantes fuera de la entidad chiapaneca se apagó tras la imposibilidad de lograr las adhesiones suficientes para figurar en la boleta electoral de 2018. Aunado a ello, el apoyo incondicional de López Obrador al impresentable gobernador de la entidad, Rutilio Cruz Escandón, canceló cualquier eventual acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN, además de que, a despecho de su oferta de campaña, el presidente no estuvo dispuesto a traducir en un texto constitucional los acuerdos de San Andrés Larráinzar porque, entre otras razones, López

Obrador no pretende crear un Estado plurinacional. Otra limitante de su desarrollo es la insuficiencia de recursos económicos. La ayuda internacional es decisiva en el financiamiento de las actividades del EZLN, dado que los proyectos autogestionarios de las comunidades indígenas donde tiene presencia son claramente insuficientes para su sustento. Estancada, si no es que agotada, se encuentra esta tentativa política, que en noviembre pasado planteó una reorganización integral que suprimiría los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno.

Los anarquismos y nihilismos posmodernos muestran mayor vitalidad en la medida que se vinculan con los movimientos sociales emergentes. La protesta pública es un campo de acción propicio para estos colectivos dada la pobre respuesta que el sistema político en su conjunto ha tenido respecto de sus demandas. Y ni qué decir de la satanización gubernamental de éstos y el desdén hacia sus reclamos. La magnitud de los feminicidios —10 asesinatos de mujeres diarios en el país— es el combustible cotidiano de esta protesta que no se puede acallar con declaraciones huecas o vanas intenciones. El deterioro ambiental y la depredación de los recursos naturales también ha propiciado continuas manifestaciones de rechazo. De un lado están los ecologistas que resguardan el bosque y el agua, y que sufren la violencia del crimen, los caciques, los personeros de las empresas privadas (comúnmente transnacionales) y agentes del Estado. Del otro están los grupos organizados que realizan acciones propagandísticas, sabotajes y atentados en contra de quienes consideran responsables de dañar a la naturaleza. Los últimos no suelen participar en las movilizaciones públicas.

La defensa de las libertades y la lucha contra el capital y el Estado (la civilización del dominio) son los objetivos de colectivos que reivindican la acción directa y diferentes formas de anarquismo, grupos que, como las feministas radicales, suelen

participar en la protesta callejera, confrontarse con la policía e intervenir el espacio público. Hasta hace poco se consideraba que existían en el país alrededor de 100 núcleos anarquistas de tendencia no violenta, mientras que un informe confidencial de la inteligencia estatal hablaba en 2016 de aproximadamente 50 células activas de tipo insurreccional. El anarquismo de nueva generación en el terreno táctico pondera el ataque como instrumento de lucha en demérito de la organización que solía considerarse prerrequisito de la acción, esto es, asume que el ataque en acto produce simultáneamente la organización y la lucha, disrumpiendo el funcionamiento normal del sistema y, eventualmente, propicia una reacción en cadena que lo colapse. Las posibles víctimas no son consideración suficiente para modular sus acciones.[3]

Un gobierno que creyó tener el monopolio nominativo de las demandas sociales, un régimen que no se desprendió de la matriz autoritaria de la cual surgió y un partido que dejó de intervenir en las luchas sociales y tampoco procesó las reivindicaciones de la sociedad civil autónoma, ciñéndose únicamente a convertir en ley los designios presidenciales, carecieron de una respuesta adecuada a los movimientos sociales emergentes. Es notorio el desencuentro del obradorismo con éstos, no obstante que comparten una base social plebeya y ambos consideran que hay que proponer el conflicto para activar la lucha y, con ella, definir y alinear los bloques confrontados. Abona a ello el anacronismo presidencial en cuanto al género, la ecología o las drogas y la incapacidad de MORENA para ser el enlace de aquellos movimientos con la sociedad política, aunada a la inexistente disposición de contradecir los

[3] Carlos Illades y Rafael Mondragón Velázquez, *Izquierdas radicales en México. Anarquismos y nihilismos posmodernos* (México, Debate, 2023), pp. 184 y ss.

dictados presidenciales. Con esto deja fuera la agenda progresista, mientras que se expande una política plebeya basada en la movilización callejera, expresión de los movimientos sociales con los cuales el obradorismo tiene escasa interlocución, si bien aspira a cercenar la base de los grupos que la activan con los programas sociales.

10

La salida es a la izquierda

La malograda transformación prometida por la 4T, la desilusión frente a sus componentes regresivos y las políticas fallidas seguramente convencieron a más de uno de que el cambio es imposible o que lo mejor sería regresar al estado de cosas precedente. No comparto esa opinión. La victoria obradorista manifestó un malestar genuino hacia un modelo de desarrollo excluyente, un régimen político corrupto y un orden social terriblemente injusto que denominé despotismo oligárquico en un libro anterior.[1] Que López Obrador no lo desmantelara más allá de su discurso rijoso no invalida la necesidad de hacerlo ni tampoco la urgencia de dotarse de los instrumentos para lograrlo, es decir, formular una política de izquierda que congregue, oriente y movilice a quienes luchan por una sociedad igualitaria, justa, libre, democrática, autónoma y solidaria, no segada tan brutalmente por la violencia. El avance en cualquiera de estos campos sería indudablemente positivo, con independencia de la corriente de izquierda que postulara estos principios o de la vía elegida para su consecución, incluidos quienes —como las izquierdas radicales— consideran que la política debería ir más allá de los programas, proyectos

[1] Illades, *Vuelta a la izquierda*, 2020.

y perspectivas, sin una finalidad que no sea la lucha misma.[2] Todo eso que engloba la palabra socialismo.

Los mayores retos que enfrenta la humanidad en la tercera década del siglo xxi son el cambio climático, la geopolítica imperial —trazada en torno al antagonismo de los Estados Unidos con China— y la profunda desigualdad. Ésta, en sus distintas facetas, es el problema cardinal del país. De ella penden otros asuntos apremiantes y se ceban múltiples violencias. La formación neoliberal no trajo el crecimiento económico prometido y produjo la desigualdad social mayor de la era moderna. Para dar únicamente un ejemplo: en 2020 "la renta media del 1% más rico del mundo era 154 veces superior a la renta media de la mitad más pobre de la humanidad", es decir, el doble que en 1820. Y hablando de un periodo más breve, en los últimos 40 años la proporción de la propiedad privada en manos de trabajadores y clases medias menguó en prácticamente todo el mundo.[3] Ya ofrecimos datos acerca de la escandalosa desigualdad en México, incrementada por la pandemia, que sitúa al país en el segmento más desigual del planeta, al lado de naciones como Brasil, Chile, la India y de regiones como el sur de África. Brechas ensanchadas por el sexo, la procedencia étnica y la calidad migratoria.

En el siglo xx la desigualdad social se redujo por dos caminos: en el Tercer Mundo, por la estatización de los medios

[2] Comité Invisible, *Ahora*, 2ª. ed. (Logroño, Pepitas de Calabaza, 2019), p. 69. Véase al respecto Illades y Mondragón, *Izquierdas radicales en México*, 2023.

[3] Göran Therborn, "El mundo y la izquierda", *New Left Review* [edición castellana], núm. 137, noviembre-diciembre de 2022, pp. 63, 70; Thomas Piketty, *Capital e ideología*, traducción Daniel Fuentes (México, Grano de Sal, 2020), pp. 1125, 1154; Boaventura de Sousa Santos, *El futuro comienza ahora. De la pandemia a la utopía*, traducción Antoni Aguiló y José Luis Exeni (Madrid, Akal, 2021), pp. 18, 21.

de producción, la masiva educación pública, la seguridad social universal y los subsidios al consumo realizados por el socialismo; en Europa Occidental, a instancias del Estado de bienestar implantado por la socialdemocracia. Más cortos en estas conquistas fueron los populismos latinoamericanos. En cualquier caso, fue la intervención estatal la que palió las desigualdades instauradas por el mercado. Las propuestas contemporáneas anclan también en el gasto público, pero robustecido por una reforma fiscal progresiva que grave las rentas de acuerdo con su monto (impuestos directos), no así el consumo (impuestos indirectos), tan del agrado de los neoliberales, en perjuicio de las clases populares. Sin un aumento consistente y sostenible de la tributación cualquier política social es limitada y endeble, e implica tocar los intereses de las clases propietarias y de los asalariados mejor remunerados a fin de redistribuir el ingreso en todo el cuerpo social con miras hacia la igualdad. Las modalidades varían, si bien hay cierto consenso en la intelectualidad de izquierda tanto en la tributación progresiva sobre rentas, propiedades y herencias, como en la instauración de la renta básica universal que dé un piso común a todos los ciudadanos y les garantice el acceso a los satisfactores básicos de la vida.[4]

Además de la desigualdad social hay otras que producen inequidades en el mercado de trabajo o el acceso a la justicia, minimizan en la práctica libertades fundamentales e incuban violencias; tienen que ver con el sexo, la procedencia étnica y la calidad migratoria. Mujeres, indígenas y trabajadores migrantes son los principales afectados. Aquí tanto la igualdad de derechos como la opción a la diferencia (sexual, de género, cultural) son reclamos esenciales. Esto requiere que

[4] Piketty, *Capital e ideología*, pp. 1127, 1152; Olin Wright, *Cómo ser anticapitalista en el siglo xxi*, p. 93; De Sousa Santos, *El futuro comienza ahora*, p. 305.

el resto de la sociedad asuma que ello es indispensable para conseguir una sociedad justa, pero también aceptar el papel cardinal del Estado porque el ente público puede hacer que se reconozcan estos derechos u obligar a cumplirlos. El Estado plural (para los indígenas) y "la igualdad creadora de símbolos" (para las mujeres), monopolio histórico del patriarcado, y añadiría la regulación del mercado de trabajo y el derecho a la sindicalización (para los migrantes), son algunas de las ideas concebidas por la izquierda para el efecto.[5]

El liberalismo concibe la libertad en sentido negativo, esto es, como la no interferencia del Estado (hipotéticamente neutral) en la libertad de los individuos y grupos en la sociedad; es la posibilidad de hacer sin mediar la coerción, siempre y cuando sea dentro del marco legal. Entendiendo la libertad en este sentido, "no tener dinero significa, de hecho, ser presa de la interferencia". La sociedad para el liberalismo, cuando más, sería un agregado de individuos, no una comunidad con entidad propia. Ello no supone necesariamente ni la justicia ni tampoco la democracia, pues la capacidad de hacer de algunos podría menoscabar la realización de los demás, negar su facultad de decidir acerca de las cuestiones que les atañen y consagrar, incluso amplificar, las desigualdades existentes a falta de un poder público que las corrija. Bien mirado, la perspectiva de izquierda debería hacerse cargo de promover la libertad positiva, es decir, crear las condiciones, en cuanto a recursos y oportunidades, que posibilitaran la libertad de la totalidad del cuerpo social. Luego entonces, la igualdad sustantiva sería condición tanto de la libertad como de la justicia distributiva,

[5] Luis Villoro, *La alternativa. Perspectivas y posibilidades de cambio*, prólogo Luis Hernández Navarro, México, FCE, 2015), p. 41; Alain Badiou, *La verdadera vida. Un mensaje a los jóvenes*, traducción Adriana Santoveña (Barcelona, Malpaso, 2017), p. 119. Se cita éste.

donde cada cual disponga equitativamente del "acceso a los medios materiales y sociales necesarios para llevar una vida próspera".[6]

La democracia liberal también es una noción restrictiva, dado que no se ocupa de las condiciones sociales que la hagan efectiva, como tampoco de mucho más que los procesos electorales de la sociedad política y de los pesos y contrapesos dentro del Estado, menos todavía de formas de participación ciudadana y de deliberación colectiva, también democráticas pero diferentes de las prescritas por aquélla y concernientes a ámbitos fuera de la esfera política, señaladamente en la economía y en la sociedad. Desde mediados del siglo XIX el socialismo postuló, junto con el sufragio universal, la democracia social como forma óptima de deliberación pública y de organización de la sociedad. Una reformulación contemporánea indica que una sociedad democrática "exige que las personas puedan participar de manera significativa en todas las decisiones que afectan su vida de un modo sustancial, con independencia de que dichas decisiones se tomen dentro del Estado o de otro tipo de instituciones". A este respecto, la democracia republicana —que incorpora formas de democracia directa sin renunciar a la democracia representativa— representaría una vía "para la participación equitativa en el poder, [pues la] no exclusión de ninguna persona o grupo son los únicos fines que justifican la democracia". Otra más postula la democracia económica, en la cual las personas decidirían colectivamente qué producir y para quiénes, estableciendo un control democrático

[6] Luis Villoro, *El poder y el valor. Fundamentos de una ética política* (México, FCE/El Colegio Nacional, 1997), pp. 295, 314; Gerald A. Cohen, *Por una vuelta al socialismo o cómo el capitalismo nos hace menos libres*, traducción Hugo Salas y otros (Buenos Aires, Siglo XXI, 2014), p. 120; Olin Wright, *Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI*, p. 22. Se citan los dos últimos.

del mercado.[7] Estas formas de la democracia redistribuirían el poder dentro de la sociedad o, más todavía, la empoderarían, obstaculizando la captura del Estado por el poder económico, el estamento militar o el poder coercitivo representado por las organizaciones criminales.

El autogobierno, la autonomía, la autogestión económica y el federalismo radical forman parte del corpus doctrinal de la izquierda socialista que incluso consideró la extinción del Estado en una sociedad emancipada, en la cual los ciudadanos organizados no sólo gobernarían la *polis* sino también se harían cargo de su seguridad, tal como adelantó la Comuna de París. Transferir el poder estatal y el poder económico a la comunidad de modo tal de constituir un poder social es un objetivo cardinal de esta izquierda que asume la capacidad de la sociedad de autorregularse siempre y cuando la igualdad (material, de oportunidades, etcétera) de quienes la integran sea tal y la democracia en sentido amplio funcione adecuadamente. En este marco, la libertad como autorrealización del individuo y de la colectividad tendría las condiciones indispensables para su concreción. Conformar una sociedad con estas cualidades supone la acción colectiva orientada hacia fines, esto es, elaborar una estrategia que articule al o a los sujetos políticos agentes del cambio. En el siglo pasado esa función se asignó al partido (con base en el modelo bolchevique) o a la clase obrera (de acuerdo con las perspectivas autogestionarias). En la nueva centuria se pensaría en agregados mayores y a la vez más diversos, con una identidad social definida y múltiples

[7] Olin Wright, *Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI*, pp. 27-28; Luis Villoro, "Democracia comunitaria y democracia republicana", en *La significación del silencio y otros ensayos*, nota introductoria Rafael Vargas y Juan Villoro (México, UAM, 2008), p. 300; Bhaskar Sunkara, *Manifiesto socialista*, traducción Horacio Pons (Buenos Aires, Siglo XXI, 2020), p. 220. Se citan los dos primeros.

identidades específicas susceptibles de adherirse a un proyecto común, no obstante las eventuales diferencias y antagonismos de algunas de ellas respecto de otras.[8]

Ahora bien, estos objetivos de la izquierda confrontan una formación (la neoliberal) que combate todo lo que tenga que ver con lo social, fragmenta y precariza a las clases populares y socava la democracia. Incluso algunos teóricos sociales hablan de necropolítica para conceptualizar un *statu quo* fundado en la violencia en las sociedades poscoloniales y en "la privatización del poder de coacción" estatal. Otros auguran la mutación del Estado moderno en un Estado profundo "que combina represión legal e ilegal" en un continuo de la excepcionalidad signado por la emergencia sanitaria. Y unos más ven la conformación de un "Neo Estado", específicamente en México, que compagina el orden legal con las economías ilícitas y amplía la soberanía del ente público. Nosotros hablamos de una soberanía criminal que fragmenta el territorio y en la cual los grupos criminales suplantan las funciones estatales esenciales, ejercen el control sobre los recursos naturales y económicos, y deciden quién vive y quién muere en función de la soberanía sumaria que opera de facto en la guerra interna irregular y dentro de la cual impera la necropolítica como modo de gestión de los asuntos públicos. Las fosas comunes que pueblan el territorio nacional constituyen la cruel evidencia de aquélla.[9]

[8] Sunkara, *Manifiesto socialista*, p. 270; Cohen, *Por una vuelta al socialismo*, p. 235; Therborn, "El mundo y la izquierda", p. 51; Olin Wright, *Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI*, pp. 146, 155-156.

[9] Wendy Brown, *En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente*, traducción Cecilia Palmeiro, p. 69; Therborn, "El mundo y la izquierda", pp. 41-42; Olin Wright, *Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI*, p. 132; Mbembe, *Necropolítica*, p. 57; De Sousa Santos, *El futuro comienza ahora*, p. 301; Lomnitz, *El tejido social rasgado*, p. 129. Se citan los tres últimos. Illades y Santiago, *Mundos de muerte*, pp. 32 y ss.

Una izquierda renovada, no por ello dislocada de su tradición, podría incidir en el espacio político abierto por la crisis de la hegemonía de las élites que condujeron al país en la globalización, la transición democrática y la narcoguerra, y que lamentablemente no supo capitalizar el obradorismo con su proyecto alternativo de nación. La lucha por la igualdad, la justicia, la democracia y la autonomía habrá de hacerse cargo de la coordenada de la guerra en la que está inserto el país, donde cada uno de estos objetivos está bloqueado por los actores del conflicto (el crimen organizado y las fuerzas armadas) y dentro del marco del capitalismo global que ha potenciado considerablemente el alcance y la penetración de la economía criminal en el mercado mundial. De esta forma, la acción concertada de los sujetos políticos alineados hacia la izquierda habrá de confrontar la violencia estructural ejercida por núcleos dentro y fuera del Estado que, en disputa o coludidos, dominan porciones del territorio nacional, someten a la población, conectan con el mercado mundial y con los circuitos financieros internacionales, ninguno de los cuales posee una índole democrática y todos son contrarios a los objetivos trazados por la izquierda.

Construir un poder autónomo implicaría entonces ganar terreno tanto al Estado como al poder económico, así como cortar los tentáculos de la economía y del poder criminal, conformar las instancias autonómicas de la sociedad en oposición con el control estatal —más si se ejerce a través del aparato militar— y también frente a la soberanía y gobernanza criminales, además de desvincularse de la lógica autoritaria del uno y de la racionalidad predatoria del actor criminal. La extensión y profundización de la capacidad de decisión colectiva sería indispensable para acotar a los actores no democráticos y hacerse cargo de la gestión del bien común. Asimismo, sería una obligación moral del Estado identificar a las víctimas de esta

guerra, apoyar con recursos públicos y proteger a los colectivos que buscan a sus familiares, además de darles la oportunidad de realizar el imprescindible duelo.

La estrategia política consistiría en favorecer las acciones que apuntalen ese poder social, en el entendido de que sus reivindicaciones obedezcan al interés común y sean coincidentes con los objetivos de la izquierda recién esbozados, independientemente de los grupos que las postulen o incluso cuando el Estado las promueva, tengan una naturaleza institucional o sean antisistémicas, se demanden en los recintos legislativos o en la calle. Al ente estatal tampoco hay que desaparecerlo ni suplantarlo, antes bien hay que forzarlo a responder a las exigencias ciudadanas, a no dar la espalda a las inquietudes legítimas de los movimientos sociales emergentes, a hacerse cargo de la seguridad de la población con los instrumentos adecuados sin violar los derechos humanos, y a recaudar suficientemente y gastar los recursos públicos de manera eficiente, redistributiva y transparente, favoreciendo a quienes menos tienen, pero sin sacrificar actividades sustantivas por considerarlas onerosas, prescindibles o no políticamente redituables.

Tanto la violencia descontrolada como la pandemia en sus diferentes facetas mostraron perentoriamente la imprescindible presencia y acción estatales, al tiempo que desnudaron las falencias del poder público y el sesgo autoritario del obradorismo. No necesitamos menos Estado —sea mínimo o gestor y garante de los intereses privados, como dictan el liberalismo y el neoliberalismo, respectivamente—, lo indispensable es convertirlo en un agente del cambio controlado por la sociedad, si bien no en el sustituto del actor o los agregados colectivos abocados a sacudir el estado de cosas actual y a ofrecer una salida hacia la izquierda a una sociedad herida, abandonada por un sistema disfuncional, cleptocrático y descompuesto. No hablaríamos entonces de una revolución imaginaria o de

una mítica Cuarta Transformación, sino del genuino cambio hacia la izquierda, con igualdad, justicia y democracia que el país necesita.

Índice analítico

Abarca, José Luis, 106, 107, 113
ABC (guardería), 52
África, 55, 138
Aguililla (Michoacán), 60
Aguirre Rivero, Ángel, 106
Ahumada, Carlos, 68
Almonte, Raybel Jacobo de (el *Tequilero*), 107
América del Norte, 121
América Latina, 79, 102
Anaya, Ricardo, 69
Atoyac de Álvarez (Guerrero), 102
Ávila Camacho, Manuel, 99
Ayotzinapa, caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 66, 72, 82, 105-115

Baillères González, Alberto, 44
Banco del Bienestar, 47
Bartra, Roger, 15, 16
Becas Elisa Acuña, 86
Biden, Joseph Robinette (Joe), 34, 56, 73
Blanco, Cuauhtémoc, 85
Bolsonaro, Jair, 16
Brasil, 138

Caborca (Sonora), 60
Calderón Hinojosa, Felipe, 14, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 82
Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, 83
Cárdenas del Río, Lázaro, 98-100, 130
Cárdenas Solórzano, Cuauhtémoc, 88, 99, 129, 130
Casarrubias Salgado, Mario, 106
Casas, fray Bartolomé de las, 95
Castillo, Heberto, 128
Chapitos (cártel), 59, 60
Chávez, Hugo, 22
Chicago (Estados Unidos), 107, 108
Chile, 138
Chilpancingo (Guerrero), 107
China, 138
Ciudad de México, 29, 33, 73, 88, 97, 125, 130, 151
Clouthier, Manuel, 130
Cocula (Guerrero), 107, 108, 111, 112
Colima (Colima), 60
Colón, Cristóbal, 95, 96, 100
Colosio, Luis Donaldo, 130
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 73
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 35
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 42, 110

Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), 110-115
Comuna de París, 97, 142
Confederación Autónoma de Empleados y Trabajadores de México, 83
Confederación Sindical Internacional Democrática, 83
Conferencia del Episcopado Mexicano, 120
Consejo Estudiantil Universitario (CEU), 82, 87
Consejo General de Huelga (1999), 88
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 87
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), 66
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 82
Cordier, Charles, 95
corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 122
Corriente Democrática, 128
Covid-19, 18, 48, 66, 73, 78, 79, 106
Cruz Escandón, Rutilio, 132
Cuarta Transformación (4T), 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 31-33, 41, 43, 44, 47, 50, 59, 64, 65, 69, 71, 81, 83, 85, 93, 95, 101, 117, 118, 120, 123, 125, 137, 146
Cuba, 22
Culiacán (Sinaloa), 36, 72

Díaz Covarrubias, Juan, 97
Díaz Mori, Porfirio, 91, 92
Dos Bocas (refinería), 122

Echeverría Álvarez, Luis, 63, 99
Ejército mexicano, 16, 31, 33, 34, 46, 48, 49, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 82, 100-103, 106, 109, 111, 112, 113, 120, 122, 124
Ejército Trigarante, 97
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 129, 132, 133
Elizondo, Carlos, 15
Erdŏgan, Recep Tayyip, 16
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 25, 58, 66, 106, 107, 109, 111, 115
Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, 58
Estados Unidos de América (EUA), 21, 34, 35, 59, 72, 73, 92, 95, 138
Estafa Maestra, 72
Europa Occidental, 139

Familia Michoacana (grupo criminal), 57
Felipe Ángeles (aeropuerto), 122
Fernández, Vicente, 71
Fernández de Cevallos, Diego, 130
Fiscalía General de la República (FGR), 68, 107, 114
Flores Magón, Enrique, 94
Flores Magón, Ricardo 94
Flores Soberanes, Samir, 85
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), 18
Forbes (revista), 44
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 87
Fox Quesada, Vicente, 25, 82, 94
Frente Amplio de las Mujeres que Luchan (FAML), 95
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), 85

Frente Nacional Ciudadano (FRENA), 71
Fuerza Aérea, 58
Fuerza y Corazón por México, 123

García Luna, Genaro, 61, 72
Germán, comandante, 132
Gertz Manero, Alejandro, 51
Gil Gómez el Insurgente (Díaz Covarrubias), 97
Gómez Bruera, Hernán, 18, 19
Gómez Urrutia, Napoleón, 83
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 107-111, 115
Guanajuato (estado), 6
Guardia Nacional, 34, 54, 57, 58, 61, 65, 74, 121, 123, 124
Guerrero (estado), 55, 60, 114
Guerreros Unidos (cártel), 106, 107, 109-113, 115
Guía ética para la transformación de México, 49, 50, 80
Guzmán Loera, Joaquín (*Chapo*), 58
Guzmán López, Ovidio, 58-60, 72

Haces Barba, Pedro, 83
Hernández Nieto, Rafael, 114
Hernández Rivera, José Luis, 106
Hidalgo y Costilla, Miguel, 97
Hitler, Adolf, 22
Huitzuco (Guerrero), 107, 111, 112

Iberdrola (empresa), 33
Iguala (Guerrero), 105-109, 111, 113, 115
India, 96, 138
Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, 110
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), 47
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 100
Instituto Nacional de Migración, 35
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 47
Instituto Federal Electoral (IFE), 29
Instituto Nacional Electoral (INE), 42, 43, 83, 124
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), 47, 48
Iturbide, Agustín de, 91, 97

Jalisco Nueva Generación (cártel), 60, 61
Jaramillo, Rubén, 34, 100
Juan Gabriel, 71
Juárez, Benito, 35, 47, 91, 98, 99, 151
Juntos Haremos Historia, 26, 27

Kim Jong-un, 27

La Gavia (Guerrero), 107
Landau, Christopher, 56
Larrea Mota Velasco, Germán, 44
Latinus (portal de noticias), 69, 70
LeBarón, familia, 83
Lenin, Vladímir Ilích, 97
León, David, 69, 70
Lomnitz, Claudio, 17, 18, 143
López Astudillo, Gildardo (el *cabo Gil*), 109, 111
López de Santa Anna, Antonio, 91
López-Gatell Ramírez, Hugo, 37
López Mateos, Adolfo, 33, 98, 100
López Obrador, Andrés Manuel (AMLO), 13-17, 19-38, 41-44, 46, 50, 51, 56, 58, 60, 61, 64-67, 69-73, 77,

80-85, 87, 88, 98-101, 109, 117, 118, 123-125, 130-132, 137
López Obrador, Martín, 70
López Obrador, Pío, 69
López Portillo y Pacheco, José, 63
Lozoya Austin, Emilio, 67, 69
Lozoya Austin, Juan Jesús, 67

Madero, Francisco I., 91, 94, 98, 99
Madrazo Pintado, Roberto, 70
Madrid Hurtado, Miguel de la, 77, 82, 131
Maistre, Joseph de, 97
Marcha blanca, 73
Marcha sobre Roma, 22
Marina, 31, 34
Martín Garatuza (Riva Palacio), 97
Matanormalistas (grupo criminal), 107
Mazariegos, Diego de, 97
Metro (Sistema de Transporte Colectivo), 74, 75
México: esplendores de treinta siglos (exposición), 92
Mezcala (Guerrero), 108
Michelet, Jules, 78
Michoacán (estado), 55-57
Morelos (estado), 85
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 20, 23, 25, 27-29, 42, 69, 70, 84, 120, 122, 125, 131, 134
movimiento estudiantil de 1968, 86, 87, 92, 100
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 82
Múgica, Francisco J., 99
Murillo Karam, Jesús, 105, 106, 111, 112, 114
Mussolini, Benito, 22

Napoleón Bonaparte, 97
Noche de Iguala, 105, 108, 111, 115. *Véase también* Ayotzinapa, caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Notimex, 35

Odebrecht (empresa), 68
Oficina del Alto Comisionado (ONU), 106
Orbán, Viktor, 16
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 62, 106, 110
Organización Mundial de la Salud (OMS), 38

Pacífico, cártel del, 61
Pacto por México, 25, 131
Palacio de Invierno, 22
Partido Acción Nacional (PAN), 13, 16, 17, 21, 25, 27, 29, 92, 124, 129
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 13, 25, 69, 93, 124, 129-131
Partido del Trabajo (PT), 27, 132
Partido Encuentro Social (PES), 27, 34
Partido Mexicano Socialista (PMS), 128
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 128
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 13, 17, 21, 27, 29, 57, 88, 93, 99, 124, 129
Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 128
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 27, 69
Peña Nieto, Enrique, 13, 25, 28, 43, 57, 60, 66, 69, 82, 106, 109, 123
Pérez Salas, Néstor Isidro (el *Nini*), 59
Petróleos Mexicanos (Pemex), 68, 69, 73
Piedra Ibarra, Rosario, 101

Pineda, María de los Ángeles, 106
Plan Integral Morelos (PIM), 85
Policía Federal Preventiva, 61
Procuraduría General de la República (PGR), 106, 108, 110, 113, 115
Pueblo Viejo (Guerrero), 112, 113

Quintana Pali, Miguel, 44

Ramírez Garrido Abreu, Graco, 85
República Democrática Alemana, 97
Revolución de Octubre, 127
Revolución mexicana, 24, 32, 33, 43, 64, 83, 92, 101, 120, 129
Reyes, Alfonso, 49
Riva Palacio, Vicente, 97
Rodríguez Pérez, José, 106, 113, 114
Rojos (grupo criminal), 106, 107, 109, 111

Salinas de Gortari, Carlos, 14, 27, 34, 82, 99, 125
Salinas Pliego, Ricardo, 44
San Cristóbal de las Casas (Chiapas), 97
Sandoval, Luis Crescencio, 101
Secretería de la Defensa Nacional, 123
Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), 47, 48
Sheinbaum Pardo, Claudia, 95, 101, 115
Sicilia, Javier, 83
Silva-Herzog Márquez, Jesús, 17
Slim Helú, Carlos, 44
Stalin, Iósif, 22
Subcomandante Marcos (Rafael Sebastían Guillén), 132
Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), 114
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 43, 51, 124
Tabasco (estado), 25, 88
Tamaulipas (estado), 106
Tarahumara, sierra, 120
Tayikistán, 65
Tepecoacuilco (Guerrero), 107
Texcoco (aeropuerto), 44, 67
Therborn, Göran, 11, 79, 80, 138, 143
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 21, 77, 120
Tren Maya, 47, 78, 122
Trump, Donald, 16, 34

Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), 113
Unión Soviética, 22
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 88
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 54, 86, 142
Universidad Iberoamericana (Ibero), 86
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 86-88
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), 47, 48
VanHerck, Glen, 56
Velasco Coello, Manuel, 69
Venezuela, 22

Yo Soy 132, 88

Zacatecas (Zacatecas), 60
Zapata, Emiliano, 93, 94
Zedillo Ponce de León, Ernesto, 82, 130
Zepeda Patterson, Jorge, 18, 19
Zerón de Lucio, Tomás, 113

Esta obra se imprimió y encuadernó
en el mes de enero de 2024,
en los talleres de Impregráfica Digital, S.A. de C.V.,
Av. Coyoacán 100–D, Col. Del Valle Norte,
C.P. 03103, Benito Juárez, Ciudad de México.

AMLO TUVO LA OPORTUNIDAD DE HACER UN CAMBIO Y LA DESPERDICIÓ. ÉSTE ES UN ANÁLISIS DEL SEXENIO DONDE LA IZQUIERDA LLEGÓ AL PODER Y DILUYÓ CON SU INOPERANCIA EL PROYECTO OBRADORISTA.

Antes de las elecciones de 2018, Carlos Illades escribió que la inminente victoria de la izquierda era una oportunidad pero también un riesgo. ¿Cuál es el balance hoy, a menos de un año de que concluya el mandato de López Obrador? ¿Se logró revertir la desigualdad social, la corrupción, la injusticia crónica y el clasismo?

A muchos les parece evidente la incapacidad de esta administración de conformar un programa de gobierno viable, la cortedad de su agenda, la politización de todas las decisiones públicas, la consecuente polarización y la falta de habilidad técnica de no pocos de sus cuadros. Sin embargo, la oposición tampoco ha logrado reconstruirse para recuperar su credibilidad y se prevé como altamente probable un segundo mandato de la coalición gobernante.

Independientemente de sus taras y fracasos, los partidarios de la 4T la consideran una revolución —la "revolución de las conciencias", según López Obrador—, un cambio de gran calado, el cuarto de los grandes hitos del relato patrio en una continuidad histórica: el nuevo mito nacional. De esa revolución imaginaria trata este libro.

ISBN 978-607-557-895-8

OCEANO
www.oceano.mx